

PALMA ACEITERA

de la cosmética al biodiesel

La colonización continúa

Coordinación general: Ricardo Carrere
Edición: Hersilia Fonseca
Diseño de tapa: Flavio Pazos

© *Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales*

Secretariado Internacional

Maldonado 1858, Montevideo, Uruguay
tel: +598 2 413 2989, Fax: +598 2 418 0762
correo electrónico: wrm@wrm.org.uy
página web: <http://www.wrm.org.uy>

Oficina en Europa

1c Fosseyway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh,
GL56 9NQ, United Kingdom
tel: +44.1608.652.893, Fax: +44.1608.652.878
correo electrónico: wrm@gn.apc.org

Esta publicación está disponible también en inglés.

El contenido de esta publicación puede ser reproducido total o parcialmente sin necesidad de autorización previa. No obstante, deberá reconocerse claramente la autoría del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales y comunicar al mismo cualquier tipo de reproducción.

Publicado en setiembre 2006.

ISBN: 9974 - 7969 - 6 - 2

Esta publicación fue posible por la colaboración de Novib, de la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza y la Secretaría Regional Latinoamericana de la UITA (Rel-UITA).

n(o)vib
OXFAM NETHERLANDS



Svenska Naturskyddsföreningen



PALMA ACEITERA

de la cosmética al biodiesel

La colonización continúa



WRM



www.rei-uita.org

INDICE

INTRODUCCIÓN

Palma aceitera: la expansión de otro monocultivo destructivo <i>por Ricardo Carrere</i>	9
---	---

ARTICULOS GENERALES

- Palma aceitera y soja: dos cultivos comerciales paradigmáticos de la deforestación	20
- Monocultivos: el símbolo de un modelo perimido	25
- Plantaciones de palma aceitera: no hay sustentabilidad con Paraquat	27
- El cultivo que más destruye la tierra no es la solución para la crisis energética	28

AFRICA

Uganda

- Plantaciones de palma aceitera de BIDCO a costa de las selvas prístinas de Bugala	33
- Plantaciones de palma aceitera que trajeron fuertes vientos y salarios bajos	35

AMERICA

Colombia

- La dura vida de los trabajadores de plantaciones de palma africana	39
- Política antisindical en plantaciones de palma aceitera .	41
- Proyecto de plantaciones de palma aceitera pone en peligro biodiversidad del Chocó	42
- Lo forestal como negocio	44
- Expansión de la palma aceitera en un marco de violación de los derechos humanos	47
- Plantaciones de palma aceitera en tierras comunales usurpadas	50

Ecuador

- Palma africana y madereras en la Bio-región del Chocó	52
---	----

México

- ¿Quiénes se benefician con la palma aceitera en Chiapas?	55
--	----

Perú

- La Amazonía amenazada por proyectos de plantaciones de palma aceitera 57

ASIA

Camboya

- Plantaciones de caucho y de palma africana provocan impactos en las comunidades locales 60

Indonesia

- ¡¡¡Buenas noticias sobre la palma aceitera!!! 62
- Plantaciones de palma aceitera en el centro de la destrucción de la biodiversidad 64
- Informe del WWF vincula plantaciones de palma aceitera con deforestación a gran escala 65
- La palma aceitera hace desaparecer los bosques 68
- Invirtiendo para el desastre; la CFI y las plantaciones de palma aceitera 72
- El FMI y la deforestación 79
- El insalubre olor del dinero en los incendios forestales .. 82
- Pedido de cancelación del plan para establecer tres millones de hectáreas de plantaciones de palma aceitera 85
- Las plantaciones de palma aceitera vienen con represión... 87
- Plantaciones de palma aceitera invaden las tierras tradicionales de las comunidades 91

Malasia

- La difícil situación de las trabajadoras en las plantaciones de palma aceitera 93
- Trabajadoras de las plantaciones envenenadas y silenciadas 96
- La lucha de las comunidades indígenas de Sabah contra el madereo y las plantaciones de palma aceitera 99
- Las condiciones laborales de las trabajadoras en las plantaciones de palma aceitera 101

OCEANIA

Papúa Nueva Guinea

- Impactos de monocultivos de palma aceitera promovidos desde Inglaterra 106

- Devolución de tierras tradicionales impide destrucción de bosques por madereo y plantaciones de palma aceitera	108
- <i>Joint venture</i> de palma aceitera beneficia a grandes empresas	109
- Declaración de propietarios tradicionales sobre el madereo, la minería y las plantaciones de palma aceitera	112
- ONG locales impugnan el préstamo del Banco Mundial para proyecto de palma aceitera	114
REFERENCIAS	119

INTRODUCCION

Palma aceitera: la expansión de otro monocultivo destructivo

por Ricardo Carrere¹

Durante las últimas décadas, el cultivo de la palma aceitera –también llamada palma africana– se ha venido expandiendo en forma acelerada en un número creciente de países del Sur. Estas plantaciones están causando graves problemas para las poblaciones y el medio ambiente locales, llegando en muchos casos a desembocar en conflictos sociales y violaciones de los derechos humanos. A pesar de ello, un número de actores nacionales e internacionales continúan promoviendo activamente este cultivo, bajo un trasfondo de creciente oposición a nivel local.

Datos básicos sobre la palma aceitera

La palma aceitera (*Elaeis guineensis*) es originaria de África Occidental, donde las poblaciones locales la utilizan para los más diversos usos, desde los alimenticios a los medicinales, incluyendo también el uso de sus fibras, así como de su savia para la fabricación de vino de palma. Sin embargo, la promoción de los actuales monocultivos a gran escala tiene dos objetivos centrales. El objetivo que ha predominado hasta ahora es la extracción del aceite de palma (a partir de la parte carnosa de su fruto) y del aceite de palmiste (obtenido de la semilla) para la producción de aceites comestibles e industriales. Más recientemente, se ha sumado un segundo objetivo: la producción de biodiesel a partir del aceite crudo de palma.

Las plantaciones de palma comienzan a producir frutos a los 4-5 años de implantadas –mediante el uso de variedades seleccionadas y clonadas– y alcanzan su mayor producción entre los 20 y 25 años.

¹ Coordinador internacional del Movimiento Mundial por los Bosques (WRM), Maldonado 1858 - 11200 Montevideo - Uruguay, Tel: +598 2 413 2989 Fax: 418 0762, correo electrónico: rcarrere@wrm.org.uy

Los racimos, que pesan unos 15-25 kilos, están conformados por unos 1000 a 4000 frutos de forma ovalada, de 3 a 5 cms. de largo.

Una vez cosechados, la parte carnosa de los frutos es transformada mediante diversos procesos en aceite, en tanto que de la nuez se extrae el aceite de palmiste. El procesamiento del aceite crudo resulta en tres usos diferentes: 1) Productos comestibles (aceite para cocinar, margarinas, cremas, confitería); 2) Productos industriales (cosméticos, jabones, detergentes, velas, grasas lubricantes) y 3) Combustible (biodiesel).

Plantaciones de palma en el mundo

Las plantaciones de palma aceitera se están implantando principalmente en las regiones tropicales, donde en 1997 ocupaban 6,5 millones de hectáreas, en las que se producían 17,5 millones de toneladas de aceite de palma y 2,1 millones de toneladas de aceite de palmiste. En 2005 el área plantada era de 12 millones de hectáreas, llegando la producción 30 millones de toneladas de aceite. Es decir, que en menos de 10 años casi se han duplicado tanto el área plantada como la producción de aceite.

En Asia descollan Malasia con algo más de 4 millones hectáreas en 2005 e Indonesia con 5,3 millones de hectáreas en 2005², que se han constituido en los principales productores de aceite de palma. Entre ambos países producen el 85% del aceite de palma del mundo.

Sin embargo, otros países se están sumando a la producción a gran escala de esta oleaginosa y entre ellos se destacan Papúa Nueva Guinea y Tailandia. Cuando en 2001 el WRM publicó el libro "El amargo fruto de la palma aceitera. Despojo y deforestación", Tailandia tenía 200.000 hectáreas plantadas. En 2005, la cifra había aumentado a 280.000 hectáreas³. A su vez, en el 2005 Papúa Nueva Guinea tenía

² Fuente: GAPKI citado en Dow Jones 30/Jul/03, en: <http://dte.gn.apc.org/63OP1.HTM>

³ Fuentes: *Oil World Monthly*, abril 2006; *Oil Annual* 2005.

una superficie de 88.000 hectáreas plantadas⁴, constituyéndose en el tercer mayor exportador mundial de aceite de palma. Existen además ambiciosos planes de promoción de este cultivo en Filipinas, Vietnam, Camboya e India, hasta ahora importador neto de aceite de palma.

En África resulta difícil obtener cifras precisas acerca del área ocupada por plantaciones industriales, debido a que esta palma es nativa de muchos países del África Occidental. Por ejemplo, la producción de Nigeria es obtenida de un área de tres millones de hectáreas de palma aceitera, entre las que se cuentan unas 370.000 hectáreas⁵, de plantaciones industriales. En Ghana se pasó de 125.000 hectáreas plantadas a 304.000 en 2002⁶ y Costa de Marfil tiene 160.000 hectáreas.⁷ También existen importantes áreas sembradas de esta palma en Congo, Guinea (310.000 hás), República Democrática de Congo (ex Zaire) (220.000 hás), Camerún (80.000 hás), Sierra Leona (29.000 hás) y áreas más pequeñas en Benin, Burundi, República Centroafricana, Gabón, Gambia, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Senegal, Tanzania, Togo y Uganda.

En América Latina, Ecuador pasó de 153.623 en 2000 a 207.285 hás en 2005⁸ y Colombia de 145.027 en 1998 a 275.317 hectáreas de área sembrada en 2005⁹, experimentando una ocupación creciente de su territorio por esta palma. Este cultivo continúa extendiéndose en numerosos países como Honduras, que pasó de 33.000 en 1998¹⁰ a 71.000 hectáreas en 2004¹¹, Costa Rica de 29.000 en 1998 pasó a 41.000 hectáreas en 2003¹², Venezuela de 3.410 hás en 1988 a 50.000

⁴ Fuentes: *Oil World Monthly*, abril 2006; *Oil Annual* 2005.

⁵ Fuentes: *Oil World Monthly*, abril 2006; *Oil Annual* 2005.

⁶ ver: <http://www.fao.org/docrep/008/a0013e/a0013e06.htm>

⁷ Fuentes: *Oil World Monthly*, abril 2006; *Oil Annual* 2005.

⁸ ver: <http://www.sica.gov.ec/cadenas/aceites/cuadros/sup.prod.rend.htm>

⁹ ver: http://www.fedepalma.org/eco_mercado_nal.shtml

¹⁰ Fuente: *Oil World Annual* 99 / 2.000 / 01 / 02 / 03, en: <http://www.ancupa.com/>

¹¹ ver: [http://www.minminas.gov.co/minminas/sectores.nsf/2a84e89f4d73f130052567be0052c75a/8d566806de23cd580525705f00432e6d/\\$FILE/Perspectivas%20bioetanol_Cepal.pdf#search=%22estad%C3%ADsticas%2C%20C3%A1rea%20plantada%20de%20palma%20aceitera%20en%20el%20mundo%22](http://www.minminas.gov.co/minminas/sectores.nsf/2a84e89f4d73f130052567be0052c75a/8d566806de23cd580525705f00432e6d/$FILE/Perspectivas%20bioetanol_Cepal.pdf#search=%22estad%C3%ADsticas%2C%20C3%A1rea%20plantada%20de%20palma%20aceitera%20en%20el%20mundo%22)

¹² Fuente: *Oil World Annual* 99 / 2.000 / 01 / 02 / 03, en: <http://www.ancupa.com/>

hectáreas en 2003.¹³ A estos países se suman Brasil que tenía un área sembrada de 34.000 hás en 1998 y en 2003 contaba con 51.000 hás,¹⁴ y países como Perú (con 14.667 hás sembradas en 2005¹⁵), Guatemala, República Dominicana, Nicaragua, México (con más de 40.000 hás en 2003¹⁶), a los que se suman Panamá, Suriname y Guyana, que si bien tienen superficies menores, actualmente están desarrollando diversos proyectos de ampliación del área sembrada de palma aceitera.

Los impactos socioambientales

A medida que el área plantada aumenta, se incrementan en igual medida los impactos ambientales y sociales que el cultivo provoca. Es que, al igual que en el caso de los monocultivos forestales de pinos y eucaliptos, el problema no es el árbol, sino el modelo en el que se lo implanta.

Pese a la constatación de impactos, sus promotores insisten en presentarlo como la solución al problema del desempleo y hasta intentan mostrarlo como beneficioso para el ambiente. Es así que la Federación Colombiana de Palmicultores dice que “los cultivos de palma de aceite son bosques protectores de los ecosistemas”. A su vez, un director de la Corporación Financiera Internacional (el brazo de préstamos al sector privado del Banco Mundial), sostuvo que la plantación de palma aceitera en Costa de Marfil –financiada por la CFI– “daría lugar a mayor empleo y superiores niveles de vida y que promovería exportaciones generadoras de divisas, al mismo tiempo que apoyaría la producción agrícola con el máximo de cuidado hacia el medio ambiente” (*Africa News Online*). Un ministro de Malasia llegó a afirmar

¹³ ver: http://www2.bvs.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0002-192X2003000400006&lng=en&nrm=iso&tlng=es

¹⁴ Fuente: Oil World Annual 99 / 2.000 / 01 / 02 / 03, en: <http://www.ancupa.com/>

¹⁵ ver: <http://www.editoraperu.com.pe/edc/2005/08/29/inf.asp>

¹⁶ ver: <http://www.equilibrium.com.pe/Palmasset03.pdf#search=%22costa%20rica%20palma%20aceitera%20area%20plantada%22>

que las plantaciones de palma son más eficientes como sumideros de carbono que los pinos de los países desarrollados (Lohmann 1999). Un promotor de la palma en Perú (Sáenz Vértiz 2005) afirma que las 21.200 hectáreas de palma en ese país ¡generan 4.200 empleos directos y 21.000 empleos indirectos!

Sin embargo, como se verá en los numerosos casos presentados en este libro, el cultivo de esta palma conlleva una serie de impactos negativos, que afectan a la gente y al ambiente donde se instalan.

Uno de los principales impactos es la apropiación de amplias áreas de tierras hasta entonces en posesión de poblaciones indígenas o campesinas, que de ellas obtenían sus medios de vida. Es común que esto genere procesos de resistencia ante ese despojo, normalmente enfrentados a través del aparato represivo del Estado y de las propias empresas palmicultoras. A la violación del derecho a la tierra se suma entonces la violación de una larga cadena de derechos humanos, inclusive el del derecho a la vida.

A la pérdida de las fuentes tradicionales de trabajo se suman las malas condiciones de trabajo en las plantaciones, donde a la peligrosidad de la tarea de cosecha se suma el uso generalizado de agrotóxicos, que impacta en primer lugar sobre los trabajadores (en su mayoría mujeres), contratadas para realizar esa tarea.

En un mundo crecientemente preocupado por la rápida desaparición de los bosques tropicales, es de destacar que en casi todos los casos los monocultivos industriales de palma aceitera se instalan en áreas boscosas. Detrás de los gigantescos incendios en Indonesia que conmovieron al mundo en 1997 estaban las grandes empresas plantadoras de palma, que hallaron más barato “limpiar” el área a ser plantada mediante el uso del fuego. Pero sin llegar a ese extremo, se puede generalizar que detrás de toda plantación industrial de palma aceitera hay un proceso de deforestación más o menos importante.

Esos bosques tropicales eliminados por este cultivo son a su vez el hábitat de una enorme biodiversidad. Estudios de caso en Malasia e Indonesia han demostrado que el 80-100% de las especies de la fauna que habitan los bosques tropicales no pueden sobrevivir en mo-

nocultivos de palma (Wakker 2000). Sin embargo, algunas pocas especies logran adaptarse y se convierten en “plagas”, dado que, al no encontrar suficiente alimento por la desaparición de su hábitat natural, pasan a alimentarse de las plantas jóvenes de palma, provocando graves daños a las plantaciones. Esto a su vez resulta en la aplicación de métodos de “control”, que incluyen plaguicidas químicos que afectan aún más a la biodiversidad, así como a las aguas, suelos y salud de las poblaciones locales.

Además, estos monocultivos generan procesos erosivos a consecuencia del desbroce del terreno antes ocupado por bosques, que deja el suelo desnudo y expuesto a las fuertes lluvias tropicales. Estos procesos erosivos a su vez afectan a los cursos de agua provocando contaminación y sedimentación, lo cual tiene además consecuencias sobre las especies acuáticas que allí habitan y por ende sobre las poblaciones locales que se abastecen de agua y alimentos de la misma.

Adicionalmente, las industrias procesadoras impactan sobre la calidad de las aguas por la liberación de grandes cantidades de efluentes —por cada tonelada de aceite se generan 2,5 toneladas de efluentes— que en muchos casos contaminan los cursos de agua por no cumplir con los requisitos legales en cuanto a su tratamiento.

A pesar de todo ello, los propulsores de la implantación del cultivo de palma insisten en presentar este cultivo como la solución a todos los problemas sociales de la región en la que pretenden instalarse, asegurando que generará empleo, riqueza, infraestructura, educación, etc., con el objetivo de lograr el apoyo de la población local.

Las razones de la expansión

Pese a todos los impactos constatados, el cultivo de palma aceitera continúa expandiéndose en más y más países. La razón que explica esta aparente sinrazón, es que, en primer lugar, constituye una inversión muy rentable para el sector empresarial —nacional o extranjero— que invierte en esa actividad. La rentabilidad surge de la combinación de mano de obra barata, tierra a bajo precio, inexistencia de controles laborales y ambientales efectivos, disponibilidad de finan-

ciamiento y apoyos, el corto período que media entre la plantación y el inicio de la cosecha y un mercado en expansión, en particular en los países del Norte. En este último sentido, cabe señalar que el aceite de palma es el aceite vegetal más comercializado del mundo, ocupando un 56% del comercio global de todos los oleaginosos. Es mucho más importante que la soja, que cubre el 23% del comercio global (FAS Online 2005).

A ello se suma el hecho de que se trata de un cultivo orientado a la exportación, por lo que gobiernos agobiados por el peso de la deuda externa lo ven como una solución a ese problema, mediante el ingreso de divisas provenientes de su venta a mercado extranjeros. Pero a su vez, existen otros actores externos que lo promueven activamente (tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) o que se benefician económicamente, tales como los bancos internacionales que lo financian. En referencia a esto último, un estudio (Wakker 2000), comprobó que los principales bancos de Holanda (ABN-AMRO Bank, ING Bank, Rabobank y MeesPierson) mantienen estrechos vínculos financieros con las principales empresas palmicultoras de Indonesia.

Otro actor, menos visible, son las empresas extranjeras que se benefician del comercio internacional del aceite de palma. Su objetivo no es nada novedoso y se ha repetido tantas veces, que ya debería ser obvio: la promoción masiva del cultivo para lograr la baja mundial de los precios, el incremento del consumo y de las ganancias derivadas de su comercialización y posterior procesamiento. En este sentido, un informe de mercado sobre palma aceitera elaborado por ARAB (una institución de investigación y consultoría de Malasia), señala que “los precios del aceite de palma son generalmente más bajos que los del aceite de soya, que constituye el aceite dominante y su precio es la referencia para el comercio en aceites vegetales”.

El informe continúa diciendo que la razón que explica el más bajo precio del aceite de palma es el “gran incremento de la oferta de aceite de palma durante las dos últimas décadas y la necesidad de los comerciantes de ofrecer ese producto a un precio menor a fin de poder competir con el aceite de soya en los mercados existentes y emergentes”. El motivo del incremento en la oferta de aceite de palma es

muy sencillo: la palma aceitera está ahora siendo plantada a gran escala en los trópicos.

Este proceso ha sido una constante histórica y numerosos países y pueblos del Sur lo han sufrido en carne propia en los casos del café, el cacao, el banano, la caña de azúcar y tantos otros cultivos cuyos precios bajaron tanto que llevaron a la ruina a incontables productores ... para beneficio del comercio y el consumo en los países industrializados.

Una razón más reciente: el negocio de los biocombustibles

A los destinos tradicionales de la palma aceitera se ha sumado recientemente el del uso de su aceite como biocombustible bajo la forma de biodiesel. Esto ha significado un nuevo aliciente a la expansión de plantaciones, ahora bajo un manto “ecológico”.

En efecto, los combustibles fósiles son una de las principales causas del cambio climático, por lo que su sustitución por otras fuentes de energía parecería ser parte de la solución. Entre estas nuevas fuentes, una de las más promocionadas es la palma aceitera, con cuyo aceite ya se está produciendo biodiesel.

Sin embargo, ésta es una de las peores opciones posibles. Por un lado, porque con los niveles actuales de consumo de combustible por parte de los países industrializados, la promoción de los biocombustibles (que van desde la palma aceitera hasta la caña de azúcar y los eucaliptos) significará la sustitución de la producción de alimentos por cultivos destinados a la producción de energía. En el caso de la palma aceitera, se trataría de millones de hectáreas en los países tropicales, por la sencilla razón de que es sólo allí donde puede crecer. En esas regiones ya hay escasez de alimentos, por lo que la “solución” para los países del Norte significaría más hambre en los países del Sur.

Por otro lado, la plantación de palma aceitera ni siquiera tiene sentido desde el punto de vista climático. En efecto, las zonas donde se desarrolla se caracterizan por ser ecosistemas de bosques que, desde el punto de vista estrictamente climático constituyen enormes reservorios de carbono. La ocupación de esas áreas por las empresas

palmicultoras implica la destrucción del bosque (normalmente a través de incendios), por lo que resulta en la emisión de enormes cantidades de gases de efecto invernadero que agravan el cambio climático.

En realidad el discurso pseudo ambiental intenta esconder el verdadero problema: el encarecimiento de los combustibles fósiles y la búsqueda de alternativas más baratas. El Presidente colombiano Uribe —quien no se destaca por sus preocupaciones ambientales— explicó claramente por qué mira “con mucho entusiasmo el cultivo de palma” diciendo: “En un país con declinación en petróleo, el biodiesel se convierte en una alternativa necesaria”. Lo mismo es aplicable en particular a Europa, que desea romper su dependencia del petróleo importado y que consume muchísimo más que Colombia.

En ese sentido, la palma aceitera es uno de los candidatos favoritos, dado que su producción por hectárea es muy alta y sus costos de producción muy bajos. Por esas razones se espera que pueda competir exitosamente con el petróleo. Pero el hecho es que esos “bajos” costos son en realidad altísimos a nivel local, dado que se basan en: expulsión de población rural, explotación del trabajo, represión de las comunidades locales, corrupción en la adjudicación de tierras y destrucción ambiental.

Tratando de mejorar la imagen

La situación que acabamos de describir es moneda corriente en los países productores de aceite de palma y ha venido siendo denunciada a nivel nacional e internacional desde hace muchos años. Dichas denuncias generaron preocupación entre las grandes empresas y los inversionistas vinculados al sector, puesto que estaban resultando en cuestionamientos por parte de los consumidores y en la posible pérdida de mercados.

Es así que la gran industria ha liderado un proceso denominado Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sustentable (Roundtable on Sustainable Oil Palm - RSOP), que acaba de aprobar recientemente una serie de Principios y Criterios para asegurar una producción supeestablemente “sustentable”.

La RSOP, creada en el año 2003 está organizada en siete sectores que incluyen a: 1) palmicultores 2) procesadores y/o comerciantes de aceite 3) productores de bienes de consumo a partir del aceite de palma 4) comerciantes minoristas 5) bancos e inversionistas 6) ONG ambientalistas/conservacionistas 7) ONG sociales o de desarrollo.

Entre sus miembros y asociados aparecen nombres muy conocidos, normalmente asociados a impactos sociales y ambientales negativos: Cargill, Unilever, Cognis, Corporación Financiera Internacional, British Petroleum, Syngenta, Bayer.

Dicho proceso ha generado divisiones entre las ONG, dado que mientras algunas entienden que se trata de una buena oportunidad para lograr mejoras sociales y ambientales en el sector, otras consideran que la participación en el mismo solo sirve para avalar una industria esencialmente destructiva.

Necesidad de fortalecer las luchas

Más allá de las buenas intenciones de los representantes de las ONG —e incluso de los demás actores— que participan en ese proceso, la pregunta es si los monocultivos industriales de palma aceitera pueden ser social y ambientalmente sustentables.

Resulta claro que mayoría de los miembros y afiliados de la RSOP no cuestionan la expansión de los monocultivos de palma; al contrario, buscan aumentar la producción y el consumo. Si bien es cierto que se pueden mejorar muchos aspectos en el proceso productivo, también es cierto que el modelo en su conjunto —aun con esas mejoras— sigue siendo insustentable.

En efecto, la producción industrial de aceite de palma está ligada a monocultivos a gran escala, que requieren el uso de grandes cantidades de insumos externos tales como fertilizantes, herbicidas y plaguicidas, con la consiguiente contaminación que impacta sobre trabajadores, pobladores locales y medio ambiente.

Por otro lado, dicha producción requiere de amplias extensiones de tierra en áreas boscosas tropicales, cuya conversión en monocultivos de palma conlleva graves impactos sociales y ambientales.

El escenario más probable resultante del proceso de la RSOP será que en el futuro habrá dos sectores de producción abasteciendo diferentes mercados. Por un lado, habrá un conjunto de empresas certificadas –que en mayor o menor medida intentarán cumplir con los principios y criterios adoptados por la RSOP– y por otro lado habrá un segundo grupo de empresas no certificadas. Las primeras abastecerán mercados –como el europeo– donde los consumidores exigen el cumplimiento de determinados estándares sociales y ambientales, en tanto que las segundas abastecerán a todos los demás mercados.

Al igual que en el caso de los monocultivos de pino y eucalipto – donde también se han establecido principios y criterios para su certificación– el resultado final será que el cultivo continuará expandiéndose y que los impactos acumulados –de las plantaciones “sustentables” y de las otras– seguirán afectando gravemente a la gente y su ambiente.

Más allá de los intentos de los distintos actores vinculados a la producción, comercialización e industrialización del aceite de palma, importa destacar que el proceso iniciado por ellos no se dio por arte de magia, sino que fue el resultado de las numerosas luchas locales de resistencia y de las campañas nacionales e internacionales desarrolladas para denunciar la situación.

Más que apoyar u oponerse al proceso de la RSOP, lo que importa entonces es fortalecer esas luchas y campañas para frenar el avance de este sector esencialmente destructivo. El tema central no radica en mejorar los grandes monocultivos sino en detener su expansión, para lo cual resulta esencial cambiar las condiciones que hoy los hacen posibles.

Los numerosos casos documentados en este libro muestran que los monocultivos de palma aceitera, lejos de servir para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales, resultan en el incremento de la injusticia social y en la degradación ambiental.

ARTICULOS GENERALES

- **Palma aceitera y soja: dos cultivos comerciales paradigmáticos de la deforestación**

La deforestación de los bosques tropicales ha tenido lugar a razón de 10-16 millones de hectáreas por año durante las dos últimas décadas, y ese ritmo no da señales de disminuir. Ya ha desaparecido el 16% de la totalidad de la selva Amazónica y cada día se pierden otras 7.000 hectáreas de bosque –una superficie de 10 por 7 kilómetros. Las causas son complejas y a menudo están interrelacionadas, pero entre ellas juega un papel la agricultura comercial en gran escala.

En años recientes, entre los cultivos de más rápida expansión en los trópicos ha figurado la palma aceitera y la soja, plantados principalmente como monocultivos en gran escala destinados a la exportación. En el ámbito mundial, el área de palma aceitera aumentó en un 43% (10,7 millones de hectáreas) y el área de soja en un 26% (77,1 millones de hectáreas) durante el período 1990-2002. Las políticas gubernamentales han facilitado esta expansión que ha ocurrido principalmente en Indonesia y Malasia (en el caso de la palma aceitera), y en Argentina, EE.UU. y Brasil (en el caso de la soja). En Brasil, en 1940 había sólo 704 hectáreas de plantaciones de soja, cifra que para el año 2003 aumentó a 18 millones de hectáreas.

El impacto más directo de este proceso ha sido la deforestación de aproximadamente 2 millones de hectáreas de bosque tropical en el caso de Indonesia ya en 1999, y la pérdida de vastas áreas de bosques en la región centro-oeste de Brasil para dar lugar a las plantaciones de palma aceitera y soja respectivamente. Los plaguicidas y herbicidas inherentes a estos monocultivos terminan de exterminar los últimos vestigios de biodiversidad capaz de coexistir con las plantaciones, y disminuyen significativamente la posibilidad de restauración del hábitat. En Indonesia y Brasil, las compañías de palma aceitera y soja han estado relacionadas con incendios devastadores en los bosques, que sólo entre 1997 y 1998 destruyeron más de 11,7 millones de hectáreas de bosque y otros tipos de vegetación en Indonesia, y 3,3 millones de hectáreas de bosque y otros tipos de vegetación en el estado de Roraima, en el norte amazónico de Brasil.

La soja es un cultivo muy apropiado para una producción basada en el uso intensivo de capital y en la siembra a gran escala. Los principales productos derivados de la soja son la harina de soja (la principal harina oleaginosa del mundo para ración animal) y el aceite de soja (el aceite vegetal de mayor consumo mundial). Sólo una pequeña parte de la cosecha mundial es procesada como porotos de soja enteros para consumo humano, principalmente en Asia. La producción de soja se ha desarrollado al impulso de una creciente demanda de ración para ganado en Europa, aunque últimamente también como consecuencia del crecimiento del mercado chino para la producción de aceite.

Brasil es el segundo productor mundial de soja (50 millones de toneladas o 26% de la producción en 2003), detrás de los EE.UU., (38%). Argentina, Paraguay y Bolivia tienen una participación en el mercado del 18%, 2% y 1% respectivamente. Otros grandes productores son China e India (8% y 2% respectivamente).

La soja tradicionalmente se cultiva en las regiones templadas y subtropicales de todo el mundo, pero ahora se está expandiendo hacia regiones tropicales. La región amazónica está siendo directamente afectada, ya que se han desarrollado nuevas variedades tropicales de soja de alto rendimiento, específicamente para la expansión del cultivo en esta región. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, la tasa de pérdida anual de bosques en la Amazonia aumentó en un 40% en el año 2002, principalmente como resultado de la presión para reemplazar zonas de bosque por cultivos de soja y producción de ganado.

Argentina adoptó la producción de soja transgénica. Se calcula que hasta 2003 la expansión del área plantada con soja se produjo a expensas de otros cultivos agrícolas; hoy, en cambio, el 75% del aumento del área de plantaciones de soja tiene lugar en las partes húmedas de la región del Chaco y el restante 25% en la Mata Atlántica de la Provincia de Misiones.

En Bolivia, la soja se expandirá a expensas de zonas del Bosque (seco) Chiquitano, mientras que en Paraguay lo hará a costa de la Mata Atlántica. Aunque en Paraguay la soja transgénica es formal-

mente ilegal o está severamente restringida, está siendo plantada igualmente en forma creciente, un proceso que también ha ocurrido en el sur de Brasil.

El comercio y la molienda de soja en los cuatro países sojeros de América del Sur son dominados por un reducido número de grandes compañías internacionales que manejan el comercio exterior de productos básicos: Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill (las tres con base en los EE.UU. y con el control del 80% de la industria de molienda de soja en Europa), y Louis Dreyfus, de Francia. Aunque estas compañías habitualmente no invierten en el cultivo de soja como tal, su influencia en la expansión del sector es muy importante. Los plantadores de soja a veces dependen de estas compañías de comercio exterior para obtener semillas, créditos y otros insumos.

Los accionistas financieros de las cuatro compañías de comercio y molienda antes mencionadas son ABN AMRO Bank (Países Bajos), Bank of America (EE.UU.), BNP Paribas (Francia), Citigroup (EE.UU.), Commerzbank (Alemania), Crédit Agricole (Francia), Crédit Lyonnais (Francia), Crédit Suisse (Suiza), Deutsche Bank (Alemania), HSBC Bank (Reino Unido), ING Bank (Países Bajos), IntesaBci (Italia), J.P. Morgan Chase & Co (EE.UU.), Rabobank (Países Bajos), Société Générale (Francia).

La palma aceitera es originaria de África Central, donde su cultivo como producto básico es central para el sustento de millones de pequeños agricultores. Pero en cualquier otra parte del mundo se ha transformado en un gran negocio, y es cultivada principalmente en plantaciones de gran escala. El aceite de palma es un aceite vegetal derivado de la palma aceitera. Su consumo a nivel mundial es segundo entre los aceites comestibles (detrás del de soja), y tiene una gran variedad de usos —desde champú a papas fritas, pasando por comidas congeladas y cosméticos.

Las plantaciones comerciales de palma aceitera se han expandido a través de los trópicos, teniendo mayor presencia en el sureste de Asia, particularmente Malasia, Indonesia y Papúa Nueva Guinea, donde constituyen la causa principal de destrucción de los bosques tropicales. Los índices de la industria muestran que casi la mitad (48%) de

las plantaciones del sureste de Asia se han establecido en tierras de algún tipo de bosque primario o secundario. El uso del fuego para despejar las zonas de plantación también fue una de las causas principales de los incendios que en 1997 devastaron los bosques indonesios y dejaron una nube de *smog* devastadora sobre toda la región.

Las plantaciones de palma aceitera también han provocado un enorme sufrimiento humano y la destrucción de bosques de los que dependen las comunidades. En Indonesia, las plantaciones de palma aceitera están asociadas con el desalojo de pueblos de los bosques de sus territorios. Existe un desequilibrio de poder entre estas comunidades —que no tienen ningún derecho formal sobre sus tierras tradicionales— y las compañías a las que el Gobierno otorga la libertad de convertir los bosques en plantaciones.

De acuerdo con la FAO, la cobertura de bosque en Indonesia y Malasia disminuyó 12% en la década de 1990. En el pasado, buena parte de la culpa de esta pérdida se atribuía a que las comunidades utilizaban la práctica denominada “de roza y quema” y a la explotación de los bosques por las compañías madereras para obtener madera para industria y para celulosa. El rol de las plantaciones de palma aceitera ha pasado relativamente desapercibido también porque las fuentes de la industria sostienen que sus operaciones involucran muy poca destrucción “directa” en los bosques ya que habitualmente las plantaciones de palma aceitera se ubican en áreas que ya han sido taladas previamente.

Ciertamente, gran parte de las tierras de bosque que se talan para dar lugar a las plantaciones de palma aceitera han sido cortadas previamente y pueden ser consideradas como “degradadas”, y por tanto “de poco valor”, por quienes no son de la zona. Sin embargo, esta conclusión no toma en cuenta que esos bosques “degradados” suelen proporcionar todavía hábitat para un conjunto de especies, que son destruidas cuando se sustituye el bosque por la palma aceitera. La investigación ha demostrado que las plantaciones de palma aceitera pueden mantener sólo entre 0-20% de las especies de mamíferos, reptiles y aves que habitan en los bosques tropicales primarios. Aquellas especies que son capaces de sobrevivir no pueden encontrar fuentes de alimento en el nuevo entorno de la plantación y frecuentemente

entran en conflicto con los humanos en las plantaciones y sus alrededores. Durante un tiempo después de talada una zona de bosque, trabajadores y habitantes de poblaciones aledañas se encuentran con elefantes, orangutanes, tigres, puercoespines y jabalíes salvajes expulsados de su hábitat. Los resultados a menudo son graves y a veces fatales.

No debe subestimarse la importancia mundial de la destrucción de los bosques en términos de biodiversidad y cambio climático, pero son las comunidades locales las que inmediatamente sienten el impacto de su destrucción. Estas comunidades dependen de los bosques, cuyo manejo se realiza a menudo de acuerdo con las leyes tradicionales de la comunidad, para su subsistencia y el ingreso de dinero en efectivo, así como para la realización de sus prácticas culturales y religiosas. La deforestación trae aparejados cambios radicales en el estilo de vida de estas comunidades.

Las economías de escala requieren que una plantación de palma aceitera tenga por lo menos 4.000 hectáreas de superficie de forma de poder operar de manera factible un molino de aceite crudo de palma que procese racimos de fruta fresca de las grandes plantaciones. En el sudeste de Asia, cada empresa palmicultora maneja en promedio una superficie de 10.000 a 25.000 hectáreas. Estas compañías son mayoritariamente parte de *holdings* agrícolas, con grandes plantaciones cuya extensión varía entre 100.000 y 600.000 hectáreas diseminadas en distintas provincias y países.

Además de Malasia, Indonesia y Papúa Nueva Guinea, hay proyectos de palma aceitera en muchos otros países, entre ellos Filipinas, Vietnam, Camboya, Tailandia, Birmania, India, Islas Salomón, Kenia, Tanzania, Congo, Camerún, Nigeria, Liberia, Guinea, Ghana, Costa de Marfil, Guyana, Brasil, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica y México.

Las preocupaciones sobre los impactos sociales y ambientales de las plantaciones de soja y palma aceitera hoy están acentuadas porque se prevé un mayor crecimiento en ambos cultivos en esos y otros países. (Boletín del WRM, n° 85, agosto 2004).

- **Monocultivos: el símbolo de un modelo perimido**

Si hay algo que ese otro mundo posible que reclamamos debe contener es diversidad biológica. La vida nos lo dice a cada paso, y a gritos. El mensaje rompe los ojos. Cuanta mayor es la diversidad de un ecosistema, mayor es su riqueza, mayor es su belleza. He ahí los preciados bosques tropicales, receptáculo de innumerables especies animales y vegetales, de colores, matices y sonidos, cuna de cascadas y riachuelos, matriz de poblaciones humanas. Son valiosos tanto estética como funcionalmente para el ser humano, proveyéndole de alimento, abrigo, materiales de construcción, de ornamento, de utensilios. No se trata de no utilizarlos, sino de hacerlo con prudencia, solidaridad y respeto, “sustentablemente” para decirlo de una manera actual.

Sólo esta modernidad que ha roto todo vínculo con el mundo natural puede haber olvidado la lección. El acelerado desarrollo tecnológico y de las comunicaciones fue el vehículo que permitió a gigantescos grupos económicos y financieros tomar la naturaleza por asalto e intentar apoderarse del mundo, esta vez de una manera aplastante.

La lógica propia de las empresas, de lograr cada vez mayores ganancias, les lleva a recrear el mundo para lograr esos fines de la manera más eficiente. Surge así el paradigma de la escala –la gran escala– y dentro de ella el monocultivo, que se manifiesta ferozmente en la agricultura, separándola dramáticamente de la naturaleza.

Los monocultivos de árboles son una de sus expresiones. Los intereses que los imponen quieren a toda costa disrizarlos de bosques, pero están tan lejos de serlo como de ser considerados praderas. Tan es así que destruyen ambos ecosistemas.

Millones de hectáreas en todo el mundo –en algunos casos antes ocupadas por bosques y en otros por praderas– están plantadas con interminables filas uniformes de eucaliptos destinados a ser reducidos a pasta de papel –celulosa– con la cual producir millones de toneladas de papel que alimentan un consumo dilapidador, principalmente para empaque y propaganda. Los mayores índices de consumo se registran, claro, en los países del Norte.

Otro destino que últimamente se procura dar a las plantaciones comerciales de monocultivos de eucaliptos es la de “sumideros de carbono”, o basureros de carbono. El Protocolo de Kyoto de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático habilitó un mecanismo que supuestamente compensaría las emisiones de dióxido de carbono, responsables del efecto invernadero y de sus graves consecuencias sobre el cambio del clima. Se trata de plantar árboles que absorberían carbono mientras crecen. Como los eucaliptos son de rápido crecimiento, se deduce que son ideales —eso sí, que no se vayan a incendiar, o a pudrir, o a ser cubiertos por inundaciones, ¡porque devolverían a la atmósfera todo el carbono tomado! Los mismos países que emiten son los que además plantan, generalmente en el Sur, y así, plantando y plantando pueden seguir emitiendo. Eso dio lugar, además, a otro gran negocio: el mercado del carbono. ¿Y el clima? Mal, gracias. ¿Y el suelo, la flora, la fauna, los ecosistemas, las diversas formas de sustento? Mal, gracias.

Las plantaciones de palma aceitera se extienden cada vez más en los países del Sur por la gran rentabilidad resultante de combinar mano de obra barata, tierra a bajo precio, abundante apoyo financiero del Banco Mundial, el FMI y el PNUD, corto periodo entre la plantación y el inicio de la cosecha, y un mercado en expansión en los países del Norte. La colonización, la desigualdad social, el desmantelamiento de los Estados es campo fértil para hacer grandes negocios con las plantaciones. La rica naturaleza del Sur es violada una y otra vez.

Y, como la moña del paquete, la última novedad en plantaciones de árboles la constituye los árboles transgénicos. Profundizando el proceso de selección genética que con fines comerciales se centró en ciertos rasgos genéticos de los árboles como el crecimiento rápido, la altura, el diámetro, la calidad de la madera y los troncos rectos con pocas ramas, ahora la ingeniería genética produce los árboles modificados genéticamente (transgénicos) para adecuarlos aún más a las necesidades de la industria forestal. Eso, a costa de los graves peligros que traen consigo. Si aumenta la velocidad de crecimiento de los árboles, el agua se agotaría más rápidamente y se aceleraría la destrucción de la biodiversidad dando paso a desiertos biológicos poblados de árboles transgénicos resistentes a insectos, sin flores, frutos ni semillas; el suelo se destruiría a un ritmo aún mayor a raíz del

aumento en la extracción de biomasa, la mecanización intensiva y el mayor uso de agroquímicos.

Todos estos distintos tipos de plantaciones tienen en común los problemas que causan: lesionan los ancestrales derechos territoriales y de utilización de los bienes naturales de comunidades indígenas y de campesinos, erosionan el suelo, alteran el ciclo del agua, eliminan otros ecosistemas y otras formas de producción, reducen la biodiversidad.

En definitiva los monocultivos –ya sea de árboles, de plantas o de la mente– simbolizan un modelo perimido que debe ser sustituido por uno que permita la diversidad biológica y cultural para hacer posible ese otro mundo al que aspiramos. (Por: Raquel Núñez, Boletín del WRM, n° 91, febrero 2005).

- Plantaciones de palma aceitera: no hay sustentabilidad con Paraquat

Iniciada en el año 2003 por WWF conjuntamente con socios empresariales –un grupo de productores de soja, compradores y empresas de venta al público, e instituciones financieras– la iniciativa llamada Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sustentable (RSPO, por su sigla en inglés) realizó su tercera reunión en Singapur en noviembre, en ocasión de la cual adoptó 8 Principios y 39 Criterios.

La Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y Agrícolas (UITA) y la Declaración de Berna habían reclamado cambios fundamentales a los “Principios y Criterios para la Producción Sustentable del Aceite de Palma” propuestos, que finalmente fueron adoptados sin cambio alguno. Los Principios y Criterios permiten el uso de plaguicidas muy tóxicos, que son extremadamente perjudiciales para la salud humana y ambiental. En su forma actual, los criterios sirven a los intereses de la industria de los plaguicidas –co-auspiciantes de la iniciativa– y no a la salud de los trabajadores de las plantaciones de palma aceitera.

Los Principios, si bien exigen que los productores busquen alternativas a los plaguicidas designados como tóxicos clase 1, en defini-

tiva no prohíben el uso de estas sustancias. También permiten el uso continuado de Paraquat, un potente herbicida utilizado ampliamente en las plantaciones de palma aceitera y que se sabe envenena cada año a miles de trabajadores/as de plantaciones y pequeños agricultores/as. El Paraquat es responsable de una proporción importante de las decenas de miles de muertes anuales relacionadas con los plaguicidas. Una vez absorbido a través de la piel o los pulmones o ingerido oralmente, sus efectos son irreversibles. Varios países ya han prohibido la sustancia, siendo la última prohibición la que entrará en vigor en Malasia en el año 2007.

La Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y Agrícolas (UITA) y organizaciones sindicales de trabajadores agrícolas de todo el mundo han reclamado durante años la prohibición del Paraquat. “No hay espacio para el Paraquat en una agricultura social y ambientalmente sustentable”, declaró el Secretario General de la UITA, Ron Oswald. Hay una tendencia en los sistemas de certificación de la producción sustentable del sector agrícola a negar explícitamente el uso de los plaguicidas más tóxicos, entre los que figura el Paraquat.

Como expresan la UITA y la Declaración de Berna: “No obstante, los criterios para el aceite de palma sustentable no reflejan en forma alguna estas preocupaciones acerca del Paraquat. Ningún rótulo es tan complaciente respecto a los criterios sobre los plaguicidas como los nuevos Principios y Criterios para el Aceite de Palma. Una razón para esto podría ser el vínculo de la reunión de la RSPO con la industria agroquímica. Después de todo, la cena oficial de la reunión de la RSPO en Singapur es auspiciada nada menos que por la empresa Syngenta, principal fabricante de Paraquat del mundo”.

Son diversas las consideraciones que se están discutiendo en torno a si es posible o no producir aceite de palma de manera sustentable. Por cierto, no con Paraquat. (Boletín del WRM, n° 100, noviembre 2005).

- El cultivo que más destruye la tierra no es la solución para la crisis energética

Durante los últimos dos años hice un descubrimiento desagradable. Como la mayoría de los ambientalistas, estuve tan ciego respecto

a los problemas que afectan nuestra provisión de energía como mis oponentes respecto al cambio climático. Ahora entiendo que creí en la magia.

En el año 2003, el biólogo Jeffrey Dukes calculó que los combustibles fósiles que quemamos en un año estaban formados por materia orgánica “que contenía 44 x 10¹⁸ gramos de carbono, lo cual es más de 400 veces la productividad primaria neta de la biota actual del planeta”. Para decirlo claramente, significa que cada año utilizamos el equivalente a cuatro siglos de plantas y animales.

La idea de que podemos simplemente reemplazar la herencia fósil –y la extraordinaria densidad energética que nos da– por energía ambiente, es cosa de ciencia ficción. Sencillamente no hay sustitutos, pero se los sigue buscando por todas partes. Hoy en día son promovidos por los Estados, como el nuestro [Reino Unido], en las conversaciones sobre el clima en Montreal, buscando evitar las duras decisiones que el cambio climático requiere. Y al menos uno de los sustitutos es peor que la quema de combustible fósil que éste reemplazaría.

La última vez que señalé los peligros de fabricar combustible diesel a partir de aceites vegetales recibí tantos insultos como cuando planteé mi posición sobre la guerra de Irak. Descubrí que los misioneros del biodiesel son tan estridentes en su negación como los ejecutivos de Exxon. Ahora estoy preparado para admitir que estaba equivocado en mi artículo anterior, pero a ellos no les va a gustar. Estaba equivocado porque subestimé el impacto destructivo de este combustible.

Antes de continuar debo aclarar que es bueno convertir aceite de cocina usado en combustible para motores. Las personas que pasan el día hurgando en contenedores de basura están prestando un servicio a la sociedad. Pero el aceite de cocina usado en el Reino Unido alcanzaría para cubrir 1/380 de la demanda de combustible para el transporte.

Cuando escribí sobre el tema el año pasado, pensé que el mayor problema causado por el biodiesel era que generaba una competencia por el uso de los suelos. La tierra arable que de otra forma hubiera

sido utilizada para cultivar alimentos, sería usada para cultivar combustible. Pero ahora descubro que algo aún peor está sucediendo: la industria del biodiesel ha inventado accidentalmente el combustible que libera mayor cantidad de carbono del mundo.

Al promover el biodiesel –como lo hacen los gobiernos de la Unión Europea, del Reino Unido y de los Estados Unidos y miles de ambientalistas– podríamos imaginar que estamos creando un mercado para el aceite de cocina usado, el aceite de colza o el aceite de algas cultivadas en estanques en el desierto. En realidad estamos creando un mercado para el cultivo más destructivo de la tierra.

La semana pasada, el presidente de la autoridad federal malaya de desarrollo territorial anunció que construiría una nueva fábrica de biodiesel. Era la novena vez en cuatro meses que tomaba una decisión de este tipo. Cuatro nuevas refinerías se están construyendo en la península malaya, una en Sarawak y dos en Rotterdam. Dos consorcios extranjeros –uno alemán y otro norteamericano– están estableciendo plantas rivales en Singapur. Todas ellas fabricarán biodiesel de la misma fuente: aceite de palma.

Según informa el *Malaysian Star*, “la demanda de biodiesel provenirá de la Comunidad Europea... Esta nueva demanda ... absorbería como mínimo la mayor parte de las existencias de aceite de palma crudo de Malasia”. ¿Por qué? Porque es más barato que el biodiesel obtenido de cualquier otro cultivo.

En setiembre, Amigos de la Tierra publicó un informe sobre el impacto de la producción de aceite de palma. Según dicho informe, “entre 1985 y 2000, el desarrollo de las plantaciones de palma aceitera fue responsable de alrededor del 87% de la deforestación en Malasia”. En Sumatra y Borneo, unos 4 millones de hectáreas de bosques fueron convertidos en plantaciones de palma aceitera. Ahora está prevista la tala de otros 6 millones de hectáreas en Malasia, y de 16,5 millones en Indonesia.

Casi todo el bosque que queda está en peligro. Incluso el famoso parque nacional Tajung Puting en Kalimantan está siendo destrozado por los cultivadores de palma aceitera. El orangután probablemente

desaparezca del bosque. Los rinocerontes, tigres, gibones, tapires, monos narigudos y miles de otras especies de Sumatra podrían correr la misma suerte. Miles de indígenas han sido expulsados de sus tierras y unos 500 indonesios fueron torturados cuando trataron de resistir. Los incendios forestales que tan a menudo sofocan la región con la humareda son en general provocados por los cultivadores de palma. La región entera se está transformando en un gigantesco campo de aceite vegetal.

Antes de plantar las palmas aceiteras, que son pequeñas y achaparradas, los enormes árboles del bosque, que contienen una cantidad de carbono mucho mayor, deben ser derribados y quemados. Habiendo agotado las tierras más secas, las plantaciones se están desplazando hacia los bosques pantanosos que crecen sobre la turba. Una vez que cortan los árboles, los cultivadores drenan el suelo. Cuando la turba se seca, se oxida, liberando aún más dióxido de carbono que los árboles. En lo que refiere a su impacto sobre el medio ambiente tanto local como mundial, el biodiesel de palma aceitera es más destructivo que el petróleo crudo de Nigeria.

El gobierno británico lo sabe muy bien. En un informe publicado el mes pasado, donde anunció que obedecería a la Unión Europea y que se aseguraría de que, para el año 2010, el 5,75% del combustible para el transporte fuera de origen vegetal, admitió que “los mayores riesgos ambientales son probablemente aquéllos que implican cualquier gran expansión en la producción de materia prima para el biocombustible, particularmente en Brasil (la caña de azúcar) y en el sudeste asiático (las plantaciones de palma aceitera).

El informe sugería que la mejor forma de manejar el problema era evitar las importaciones de combustibles que dañan el medio ambiente. El gobierno consultó a sus asesores para saber si una prohibición infringiría las reglas del comercio mundial. La respuesta fue afirmativa: “[establecer] criterios ambientales obligatorios...aumentaría en gran medida el riesgo de una acción judicial internacional contra la política en su conjunto”. Así, descartó la idea de prohibir las importaciones y en su lugar se volcó hacia “alguna forma de iniciativa voluntaria”. Aun sabiendo que la creación de este mercado llevará a una oleada masiva de importaciones de palma aceitera, que no hay ninguna forma eficaz

de evitarlo y que en lugar de reducir el cambio climático lo agravará, el gobierno decidió seguir adelante de todas maneras.

En otros momentos desafía alegremente a la Unión Europea. Pero de hecho, lo que la Unión Europea quiere y lo que el gobierno quiere son la misma cosa. Según dice el informe del Gobierno, “es esencial que equilibremos la creciente demanda de transporte con nuestros objetivos de protección del medio ambiente”. Hasta hace poco, nuestra política era reducir dicha demanda. Ahora, si bien no se han hecho anuncios al respecto, tal política ha desaparecido. Al igual que los conservadores a comienzos de los años 90, la administración laborista intenta satisfacer la demanda, por grande que sea. Las cifras obtenidas la semana pasada por el grupo activista Road Block muestran que solo en el ensanchamiento de la autopista M1 el gobierno pagará 3.600 millones de libras, más de lo que está gastando en la totalidad del programa contra el cambio climático. En lugar de tratar de reducir la demanda, está tratando de alterar la oferta. Está dispuesto a sacrificar los bosques tropicales del sudeste asiático con tal de mostrar que está haciendo algo y para que los automovilistas se sientan mejor consigo mismos.

Todo esto ilustra la futilidad de los arreglos tecnológicos discutidos en Montreal. Tratar de satisfacer una demanda creciente de combustible es una locura, sea cual sea la fuente. Las decisiones difíciles han sido evitadas, y otra porción de la biosfera se está yendo en humo. (Por: George Monbiot, Boletín del WRM, nº 102, enero 2006).

AFRICA

- **Uganda: plantaciones de palma aceitera de BIDCO a costa de las selvas prístinas de Bugala**

La palma aceitera es nativa de África occidental. Tradicionalmente las poblaciones locales han cosechado las plantas semi-silvestres, intercaladas con cultivos alimenticios, a pequeña escala. El avance actual de la palma aceitera se presenta en el mismo paquete globalizado de siempre: monocultivos a gran escala destinados a la exportación, que excluyen cualquier otro proyecto. Bastante lejos de la naturaleza diversa.

La creciente tendencia a establecer extensas plantaciones de palma aceitera ha causado más estragos principalmente en los bosques tropicales, donde esta palma encuentra suelo, agua y energía solar suficientes para cubrir sus necesidades.

El procedimiento típico consiste en talar una zona determinada de bosque y luego establecer la plantación destinada a la producción de aceite de palma y de palmiste.¹⁷ Pero puede ocurrir también que las empresas dueñas de las plantaciones “limpien” el bosque entero prendiéndole fuego, como ha ocurrido en los notorios casos de incendios en Indonesia.

Sin embargo, en un intento por entusiasmar al pueblo de Uganda con el negocio, su presidente Yoweri Museveni salió a decir que talar los bosques para dar lugar a las plantaciones no planteaba peligros al medio ambiente porque la plantación de palma sería un bosque en sí misma. ¿Cómo puede compararse un “desierto verde” (un solo tipo de árbol) con la diversidad intensamente interrelacionada de un ecosistema de bosque?

No hay respuesta posible para el “cómo”, pero sí para el “por qué”.

¹⁷ Palmiste: semilla o almendra dura y blanca del fruto de la palma de aceite.

BIDCO Oil Refineries Ltd., el mayor y más pujante fabricante de aceites vegetales, margarinas, jabones y concentrados proteicos de África oriental y central, está haciendo una inversión multimillonaria en plantaciones de palma aceitera en las islas Bugala, en Kalangala. Los planes son que este proyecto abarque 26.500 hectáreas y produzca 140.000 toneladas de aceite de palmiste. Para esta inversión BIDCO cuenta con socios como Archer Daniels Midlands de EE.UU., el grupo Wilmar de Malasia y Josovina de Singapur. En el marco del Proyecto para el Desarrollo del Aceite Vegetal, el Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (FIDA) y el Banco Mundial han otorgado un préstamo de US\$ 10 millones para colaborar con las plantaciones y su infraestructura de apoyo, mientras que el gobierno suministrará US\$ 12 millones en forma de tierras, electricidad y carreteras y BIDCO invertirá US\$ 120 millones.

Son varios los intereses que coinciden en torno al negocio de la palma aceitera. Para un país endeudado como Uganda se trata de un ingreso de divisas; es un negocio lucrativo para los conglomerados que se benefician con la promoción masiva que conlleva la reducción de los precios mundiales y el estímulo al consumo; para el Banco Mundial, es un servicio financiero con el cual obtener ganancias. Fuentes locales informan que las elites locales se están beneficiando cada vez más, al brindar el apoyo político necesario para asegurarse términos comerciales favorables con el gobierno y conseguirse sus propios negocios, por ejemplo lucrativas concesiones para establecer plantaciones como terceros.

Pero el proyecto se enfrenta a la dura oposición de los parlamentarios. También algunos residentes de las islas están muy preocupados por las plantaciones de palma aceitera en una de las únicas grandes selvas prístinas naturales que quedan en Uganda: una hermosa isla llamada Bugala, que tiene uno de los ecosistemas más singulares del mundo. Se están destruyendo más de 5.500 hectáreas de bosque tropical y por primera vez el raro loro gris parlante está anidando en la capital (a una distancia de 180 Km. por carretera, 80 Km. en línea recta), lo que demuestra que hay algo que anda mal.

Las plantaciones de palma aceitera a gran escala, al igual que otros monocultivos, suelen estar vinculadas a la violación de los dere-

chos a la tierra y otros derechos humanos, puesto que ocupan grandes extensiones de tierras habitadas por poblaciones indígenas o campesinas, lo que provoca situaciones de conflicto.

El gobierno está intentando convencer a los residentes de las islas que cedan su tierra a las plantaciones y “hagan dinero”, pero se ha informado de varios conflictos familiares surgidos a causa del proyecto. Al dejar su tierra, ¿dónde trabajarán estas personas? Presumiblemente en las plantaciones de palma aceitera, en empleos temporarios y mal pagos y en malas condiciones, como bien lo demuestra la experiencia de otros países. Lo que es seguro es que las ganancias no serán para el pueblo sino para las grandes empresas, casi siempre extranjeras, que controlan la producción, la industrialización y la comercialización de la palma aceitera.

No se ha dado lugar al debate en torno a este asunto. Los isleños y los indígenas dueños de las tierras están llenos de desconfianza y recelo. Tal vez sea el momento de que presionen al gobierno para que tenga en cuenta sus preocupaciones. (Boletín del WRM, n° 100, noviembre 2005).

- Uganda: plantaciones de palma aceitera que trajeron fuertes vientos y salarios bajos

La acelerada destrucción de bosques tropicales y tierras boscosas indígenas en Uganda con la finalidad de hacer lugar a la producción de palma aceitera y azúcar, sigue un patrón muy conocido que ya se vio en otras partes del mundo, en especial en el sur de Asia.

En 2001 el gobierno, según informó profusamente la prensa local, entregó 5.000 hectáreas de bosques protegidos que estaban bajo su tutela a BIDCO, una empresa productora de aceite de palma originaria del sur de Asia. Estos bosques, situados en las islas Ssesse, en el lago Victoria, fueron rápidamente eliminados.

Actualmente se avecina otro revuelo en torno a la propuesta de entregar 7.000 hectáreas de bosques vírgenes situados al este de la capital a una productora azucarera que ya posee miles de hectáreas de plantaciones en las cercanías.

La línea del Ecuador atraviesa el corazón de la región de los grandes lagos de Uganda, que alberga, al oeste, la rica biodiversidad del Congo, comparable con la del Amazonas. Este país ha sufrido largos períodos de violencia política suscitada desde el Estado, que dejaron un legado contradictorio. Por un lado, en la élite y la clase política sigue habiendo una sensación generalizada de que el período de guerra e insurgencia (1966-1986) y los disturbios subsiguientes ocasionaron el “atraso” del país, que tiene la responsabilidad de “alcanzar” al resto del mundo.

Esto ha dado origen a una forma particularmente perniciosa de planificación económica hipócrita y dictatorial donde todo aquél que cuestione el gran plan para el desarrollo es calificado de inmediato de “antipatriótico”, simpatizante en secreto de los brutales regímenes anteriores o, simplemente, estúpido.

He pasado por esa experiencia. Recuerdo cuando nuestro presidente Museveni retrucó “¿Usted es un romántico? ¿Quiere volver al estado natural?”, en respuesta a mi indagación sobre la base filosófica de sus planes de “desarrollo” para el país.

Esto ocurrió en 2001, en una entrevista radial durante las elecciones presidenciales. Lamentablemente la calidad del discurso oficial público en torno al medio ambiente no ha evolucionado mucho desde entonces.

La Dra. Margaret Kigozi, directora de la principal agencia ugandesa para atraer capitales extranjeros (Uganda Investment Authority), descalificó a los opositores del proyecto de represa hidroeléctrica en nuestro río Nilo tildándolos de “obsesionados con las ranas y las mariposas”.

Más recientemente, durante una entrevista radial muy dura, en respuesta a mis reiteradas indagaciones en cuanto a la sensatez de la decisión de otorgar a BIDCO carta blanca para talar grandes superficies de bosques e instalar allí sus plantaciones de palma, el Ministro de Estado para Inversiones preguntó enojado: “¿Acaso las palmas no son árboles?”

Por otra parte, sin embargo, Uganda realmente fue “dejada atrás” en la rebatiña de los capitales mundiales por convertir las riquezas naturales de los países pobres del Sur en “pasto para las inversiones”. El país permaneció relativamente más verde (situación similar a la de Congo y Sudán meridional, que ahora también están bajo amenaza) que otras partes del Sur que en aquel momento se consideraron suficientemente “estables” para la rapaz inversión extranjera. Esta es la perpetua ironía de la situación en la que nos encontramos.

Y entonces realmente estamos apenas en el principio de este proceso. Hay una enorme riqueza ecológica para que estos “cortoplacistas” internacionales saqueen y destruyan y hay una enorme avaricia, ignorancia e hipocresía en el gobierno que hace increíblemente fácil el acceso a esta riqueza.

Unos pocos valientes del departamento de bosques de Uganda han estado en contra del proyecto desde el principio. Incluso encontraron aliados en los lugares más insólitos (como el DFID, Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido) al explicar que los empleos prometidos eran virtualmente “esclavitud” y por lo tanto no un intercambio justo por la pérdida de estos bosques. Los ignoraron.

En este proceso de destrucción no hay nada nuevo. Las maniobras de los financistas globalizados ya no son novedosas. Por lo tanto, la única pregunta es: ¿Qué puede hacerse antes de que sea demasiado tarde o antes de que el costo de restauración potencial sea demasiado elevado?

La respuesta radica en el fortalecimiento de las voces activistas que están intentando, antes que nada, acceder a toda la nueva información relacionada con estos escándalos y hacerla pública, y en poder trabajar juntos en un foro que permita llevar a cabo acciones (tales como recursos de amparo, manifestaciones, campañas educativas en los medios y educación comunitaria) que aumenten el costo político de la adopción de tales políticas.

Para esto se necesitará que las personas organizadas compartan su información y sus capacidades. Ya hemos comenzado con la ex-

posición pública de lo que ocurre en las islas Ssese, que están siendo destruidas por fuertes vientos y salarios bajos desde que se talaron los bosques de la península Bwendero. Según se informa, BIDCO ha solicitado otras 3.000 hectáreas de lo que queda de bosque. Dicen que les habían prometido un total de 10.000 hectáreas y tienen al gobierno de Uganda muerto de miedo con sus amenazas de retirarse si esta promesa no se cumple. La amenaza para los bosques no hace más que crecer.

Es importante saber que no estamos solos en esta lucha y que podemos aprender de los esfuerzos de otras personas que se enfrentan a los mismos desafíos. (Por: Kalundi Serumaga, Boletín del WRM, n° 109, agosto 2006).

AMERICA

- **Colombia: la dura vida de los trabajadores de plantaciones de palma africana**

Desde hace tiempo el WRM ha venido abordando la problemática de las plantaciones de palma africana. Pero fue en nuestro boletín especial de junio de 2001 –dedicado enteramente al tema– y en el libro “El Amargo Fruto de la Palma Aceitera: despojo y deforestación”, donde incurrimos más específicamente en las derivaciones que este monocultivo a gran escala tiene en la situación de los trabajadores.

Continuando en esa línea, les toca hablar ahora a trabajadores del Sindicato de la Empresa de Plantaciones Unipalma de los Llanos S.A., con plantaciones de palma africana en las regiones de los llanos del Meta y Cundinamarca, en Colombia.

La palma africana fue introducida en este país en 1932, pero su desarrollo comercial comenzó a fines del 50, hasta alcanzar unas 130.000 hectáreas en 1995, fundamentalmente en las zonas norte, central y oriental. Actualmente, en el marco del Plan Colombia, se pretende sustituir las plantaciones de los llamados cultivos ilícitos por palma africana y hay planes de sembrar en todo el país hasta 300 mil hectáreas nuevas. Sin embargo, para la población local el remedio puede ser peor que la enfermedad y el caso de Unipalma de los Llanos puede ser un ejemplo en ese sentido.

En efecto, el sindicato de Unipalma de los Llanos tenía hace 12 años 400 afiliados y ahora tiene sólo 132, de un total de 150 trabajadores directos. Ese cambio es el resultado de una nueva modalidad impulsada para desplazar a los trabajadores directos. La empresa promueve las cooperativas de trabajadores asociados, que es una figura que le sirve para subcontratar a empresas prestadoras de servicios y así evadir responsabilidades y el pago de la seguridad social. Los trabajadores indirectos, que trabajan para esas empresas subcontratadas, suman unos 300.

Del pueblo a la plantación de Cundinamarca hay una hora y media de viaje. La empresa lleva a los trabajadores los lunes por la mañana

y los regresa los viernes por la tarde y durante ese tiempo permanecen en un alojamiento en la plantación.

Algunos de ellos cuentan cómo transcurre el trabajo: “Los lunes uno llega a las 6:30 a la plantación, se instala en el alojamiento y la jornada comienza a las 7:00, hasta las 5:00 de la tarde con una hora de almuerzo. De martes a viernes, la jornada comienza a las 6:00, hasta las 16:30, y una hora de almuerzo también. El trabajo es duro y riesgoso. La palma tiene muchas espinas y el racimo de 50 kilos a 12 metros de altura cae con una velocidad impresionante y es peligroso. En el corte se utiliza una vara de aluminio, como una antena, que en la punta tiene un cuchillo que se llama malayo. Si usted quiere tumbar el racimo, hay que tumbar primero las hojas donde se apoya. La hoja es inmensa, mide como seis metros, y ¡cómo pesa mi hermano! Esa labor la hace el cosechero, y hay mucha gente aporreada por las hojas o por el mismo racimo”.

Las espinas son un problema: “¡Eso sí es permanente! Los chuzones se dan a diario y es un problema para quien está cortando. Muchas veces usted anda caminando entre lotes, resbala, cae sobre una hoja y se chuza. ¡Oiga, ...y eso duele!”

El elevado grado de aplicación de agrotóxicos —el más utilizado es el herbicida Roundup— es causante de numerosas intoxicaciones. No obstante, el sindicato ha logrado que se realicen exámenes de colinesterasa logrando demostrar la conexión entre la aplicación de veneno y los problemas de salud. En esos casos la empresa generalmente termina recomendando el traslado del trabajador a otro sector, sustituyéndolo por otro y generalizando así el problema.

Todos los trabajadores coinciden en que la empresa no entrega equipo de protección, y en caso de que alguien lo exija, como elemento de presión cuenta con el numeroso “ejército de reserva” generado por el elevado desempleo.

Por otro lado, los sueldos que se pagan son muy magros ya que la producción de palma africana tiene como referencia los bajos costos de producción de Malasia. Esa es su “ventaja comparativa”.

Concluye un trabajador: “Hay empresas pretendiendo que se vincule la familia al trabajo, que es como entrar a un sistema de esclavitud y explotación total. Yo les diría a los trabajadores de otros países que la palma africana más que un empleo produce un sometimiento tenaz.” (Boletín del WRM, n° 52, noviembre 2001).

- **Colombia: política antisindical en plantaciones de palma aceitera**

Cuanto más se planta más derechos se pierden. En Colombia hay aproximadamente 170.000 hectáreas sembradas de palma aceitera. Testimonios de un delegado de la organización de trabajadores del sector palmero, relacionado con las empresas Oleaginosas Bucarelia y Oleaginosas Las Brisas, denuncia las malas condiciones de trabajo en las plantaciones de palma aceitera en el departamento de Santander, además de las presiones e incentivos para debilitar a los sindicatos del sector. Oleaginosas Bucarelia cuenta con 4.700 hectáreas y la otra empresa con unas 2.800, todas ubicadas en Puerto Wilches, Santander.

Según palabras de este trabajador: “la estrategia de las empresas para debilitar y eliminar los sindicatos se basa en planes de retiro voluntario con indemnizaciones superiores a lo otorgado por ley. Muchos compañeros se han ido de las empresas y por lo tanto de la organización sindical, pero vuelven a laborar en el sector con el régimen de condiciones impuesto por las empresas a través de cooperativas. La política de los empresarios tiende a reducir las conquistas convencionales alcanzadas durante 20 o 30 años de lucha. Se comenta por parte de algunos empresarios que las empresas en las cuales los trabajadores están organizados sindicalmente son menos competitivas, y además esos trabajadores son renuentes a aceptar las condiciones de trabajo que esas empresas quieren imponer, condiciones que atentan contra la salud y la dignidad de los trabajadores.

En definitiva, lo que plantean es que las organizaciones sindicales deben desaparecer. Otra modalidad que fomentan las empresas es que los campesinos se vuelvan parceleros de palma ahorrándose así costos laborales. Luego, estos campesinos deben vender la materia prima a las empresas al precio que ellas imponen. La gente gana menos y no tiene ninguna garantía de seguridad social”.

Evitando la organización de los trabajadores, las empresas evitan también los reclamos por el bajo salario y por uno de los mayores problemas que enfrentan los trabajadores que es el de las pésimas condiciones de trabajo. “Por ejemplo: a medida que la palma es más vieja es también más alta, y por lo tanto las condiciones de cosecha del racimo y poda de la mata propician accidentes. Los trabajadores que se desempeñan en la cosecha se quejan de dolores en sus cervicales y son comunes los accidentes cuando son alcanzados por las hojas que tienen muchas espinas. Por otro lado, en las plantaciones también se fumiga para el control de plagas y no se sabe qué impactos en el ambiente y en la salud ocasionan esos productos”.

Todo lo anterior y en particular la política empresarial de intentar debilitar a los sindicatos a través del aumento de trabajadores empleados por medio de cooperativas y de contratistas individuales, llevó a SINTRAINAGRO, la mayor organización de trabajadores agrarios del país, a plantear la necesidad de unificar los sindicatos de esa rama con la idea de conservar las conquistas logradas hasta el momento y de buscar la sindicalización en las empresas que aún no tienen sindicato. Gracias a la organización de los trabajadores, en Bucarelia y Las Brisas se logró la firma de algunos convenios colectivos y ahora los trabajadores de algunas cooperativas están también exigiendo mejores condiciones laborales.

Es de señalar que en este artículo sólo hemos hecho referencia a los impactos sociales del cultivo de palma aceitera, pero que a ellos se suman además los graves impactos ambientales de este modelo de monocultivo a gran escala, que se repiten en todas las regiones y países donde se instalan, entre los que se destacan los impactos sobre la biodiversidad, los suelos y el agua. (Boletín del WRM, n° 65, diciembre 2002).

- **Colombia: proyecto de plantaciones de palma aceitera pone en peligro biodiversidad del Chocó**

La región del Chocó (75.000Km² de superficie sobre la costa del Pacífico Colombiano) es un ecosistema estratégico por su diversidad natural y cultural y presenta la mayor concentración de biodiversidad del mundo en cuanto a número de especies por hectárea. De la super-

ficie original de bosques heterogéneos, queda tan solo un 40% en pie, resultado principalmente de la colonización, la expansión de la frontera agrícola, la ganadería y la explotación maderera.

El Bajo Atrato, en la cuenca del río Atrato, que forma parte de esa región biogeográfica, está en estado de alerta. La Defensoría del Pueblo, a través del documento Explotación Maderera y Derechos Humanos Bajo Atrato-Chocó, expresa la profunda preocupación de los miembros de los consejos comunitarios del Bajo Atrato (Cacarica, Jiguamiandó y de Curvaradó, entre otros), por un proyecto de palmicultura (plantaciones de palma aceitera) a realizarse en el municipio de Riosucio.

Se trata de un proyecto de la empresa Urapalma S.A., compañía que no integra el convenio de concertación para una producción más limpia que había sido suscrito por la federación Fedepalma, los Ministerios del Medio Ambiente y Agricultura, y varias empresas ambientales.

El objeto del proyecto es la siembra de 20 mil hectáreas de palma (variedades Ekona y Ekona X lame) en los departamentos de Chocó y Antioquía. El primer bloque es de 9 mil hectáreas, 6.500 de la citada compañía y 2.500 de Asopalma (empresa promovida por la anterior, en la que están asociados campesinos de la región a quienes se les asignó un lote de 5 hectáreas a cada uno).

Para una etapa posterior está prevista la instalación de una planta extractora en la zona para la producción de 35.000 toneladas de aceite crudo en cinco años. En la actualidad se está en proceso de conformar las asociaciones de habitantes de la zona en Paravandocito y Munguidó para sembrar 380 hectáreas. Esta iniciativa ha contado con el apoyo de diferentes entidades, entre ellas los Ministerios de Agricultura y Desarrollo, el Banco Agrario (que concedió un crédito de hasta un 80% de los costos directos de operación en la etapa improductiva), FINAGRO, el Fondo de Inversiones para la Paz (fuente de los recursos del ICR –Incentivo de Capitalización Rural– para el cultivo de palma aceitera) y de la Gobernación de Antioquía.

No se ha realizado un proceso de consulta con las comunidades étnicas, no se ha tramitado el concepto de viabilidad ambiental, ni se

han solicitado los permisos para concesión de aguas y aprovechamiento forestal ante las autoridades ambientales con jurisdicción en los mencionados departamentos de Codechocó y Corpourabá, desconociendo así la normativa ambiental y étnica que rige para esta zona.

Los grupos paramilitares que actúan en la región han servido a los propósitos de este proyecto, para el cual la tenencia colectiva de los territorios de la zona por parte de las comunidades constituye un obstáculo. En ese sentido, la arremetida contra la guerrilla obedece a una estrategia militar pero también económica del sector privado. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha denunciado que es evidente que no existe una intervención estatal para enfrentar estructuralmente la acción armada encubierta a través del paramilitarismo, en tanto que se continúa desconociendo los derechos de las comunidades afro descendientes y se amplía la siembra ilegal e ilícita de la palma aceitera amparada por la protección armada.

Como en tantos otros lugares de la región tropical, la diversidad natural y cultural corre el riesgo de desaparecer para ser sustituida por extensos monocultivos que sólo sirven a intereses empresariales dedicados a la producción y comercialización de aceite de palma. Y al igual que en casi todos los demás casos, la resistencia a la apropiación de territorios por parte de las empresas comienza a surgir cada vez con mayor fuerza. (Boletín del WRM, n° 70, mayo 2003).

- Colombia: lo forestal como negocio

Resulta de suma importancia saber porqué desde los últimos años el tema forestal en Colombia ha estado en el centro de los principales debates y de la agenda gubernamental. Este artículo pretende en primer lugar responder esta pregunta, y mostrar algunos elementos de política que nos permiten afirmar que el tema forestal, así como sus servicios ambientales, son un negocio más no solo en el ámbito nacional sino global.

El Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF) del actual gobierno, concebido para los próximos 25 años, busca establecer 4 millones de hectáreas de monocultivos de árboles. Para el presente año se planea plantar 17.000 hectáreas, principalmente de Palma africana.

Pese a que se trata claramente de monocultivos, las plantaciones son presentadas como “reforestación”, pero es interesante señalar que en el plan de desarrollo forestal no se mencionan las cifras reales de deforestación, que son muy superiores a los datos que el gobierno aporta al respecto.

Entre las razones que se esgrimen para fomentar los monocultivos forestales, la principal es que las características geográficas y ambientales del país son sumamente aptas para el desarrollo de plantaciones productivas con altos rendimientos de madera, debido entre otras razones a los reducidos turnos de cortas (7-15-20 años).

El Gobierno está promoviendo las plantaciones forestales comerciales a través de las llamadas “Cadenas Productivas”, las cuales se vienen promoviendo desde 1995 y buscan la suscripción de Acuerdos de Competitividad con el sector privado, representado por organizaciones de productores y empresarios. En ese marco, el gobierno promueve distintas políticas, planes y proyectos apuntando a mejorar el entorno competitivo de los distintos eslabones de las cadenas y las condiciones de competitividad de las empresas mismas.

Particularmente con el desarrollo de estas Cadenas se pretende identificar y consolidar núcleos de “desarrollo forestal” que permitan reactivar la inversión en nuevos proyectos productivos bajo condiciones de competitividad, impulsando acuerdos regionales y estableciendo alianzas estratégicas entre el sector público y privado (*partnerships*) y con la comunidad en general, que permitan ampliar la base de recursos madereros, consolidar los esquemas de cadenas productivas y posicionar los productos y servicios forestales en los mercados nacionales e internacionales.

Esto nos parece sumamente preocupante, ya que la reorganización que se está produciendo en Colombia, no solo en el ámbito institucional sino inclusive del territorio, pasa por estas Cadenas Productivas. Es decir, que la producción nacional está condicionada a las exigencias del mercado externo y en consecuencia de las transnacionales que compran. Dicho de otra manera, las Cadenas Productivas están articuladas al comercio internacional, que a su vez exige lo que debe producir cada país. Esto explica el porqué de los monocultivos

de palma africana, de palmito, de eucaliptos, de pinos, etc. La Cadena se convierte así en la forma de producción, en donde cabe anotar que los pequeños productores estarán por fuera de dicha cadena, ya que el interés es la producción a gran escala.

Esto significa entre otras cosas, la inseguridad y pérdida de soberanía alimentaria, puesto que el uso de la tierra y su producción no estarán en función de las necesidades de la población, sino por el contrario, de asegurar el negocio de las transnacionales que impulsan estas Cadenas. Para nosotros no hay duda de que el uso de la tierra debe beneficiar principalmente a la población, y no ser encarado simplemente como otro negocio más.

De allí la inconveniencia de los monocultivos de árboles, puesto que su rentabilidad está asociada de manera directa al carácter comercial y extensivo de las plantaciones, sin importar el desalojo y expropiación de las tierras colectivas, habitadas tradicionalmente por campesinos y comunidades indígenas y negras.

Es importante señalar que el propio Presidente Uribe ha sido uno de los más entusiastas en impulsar el sector forestal como uno de los pilares del nuevo “desarrollo” en el campo, promoviendo las plantaciones forestales. De allí uno de los grandes programas del Plan Nacional de Desarrollo, llamado “Familias Guardabosques”, el cual recibe de parte de la Cooperación Internacional un fuerte apoyo económico para ejecutar proyectos relacionados con la ordenación, conservación y restauración de ecosistemas forestales; promoción de cadenas forestales productivas y desarrollo institucional.

Si bien ello podría parecer positivo, lo que se esconde detrás es que a través de incentivos económicos, se incorpora a estas familias a las cadenas de extracción a gran escala, que en última instancia favorece a la multinacional dueña de la plantación y en donde además el gobierno nacional avala y crea todas las condiciones para aplicar esta política, canalizando directamente recursos de la Cooperación Internacional a estas Cadenas Productivas y al negocio.

Al mismo tiempo, a través de este modelo de familias guardabosques se quiere establecer una relación de asalariados con la gente

local, y que las comunidades dejen de relacionarse con el bosque como hasta la fecha lo han hecho, particularmente las comunidades indígenas y negras. Más aún, la estrategia del gobierno apunta a la apropiación del territorio de las comunidades, que quedaría en manos de las empresas madereras.

Todo eso se esconde tras bonitas palabras como “reforestación”, “ordenación”, “conservación” y “restauración”, cuando en realidad se trata de sustituir ecosistemas y comunidades con gran diversidad por plantaciones y sociedades homogéneas y atadas al interés de las grandes empresas. (Por: Paula Alvarez Roa, Boletín del WRM, n° 84, julio 2004).

- Colombia: expansión de la palma aceitera en un marco de violación de los derechos humanos

El Plan Colombia ha resultado funcional a los grupos económicos de la palma aceitera. Operaciones militares y paramilitares de protección o de avanzada del proyecto agroindustrial han incursionado en territorios colectivos, han construido carreteras, talado bosques, excavado canales artificiales. Todo eso, en un entorno de impunidad y violación de los derechos humanos.

Desde el 2001, la organización de derechos humanos Justicia y Paz ha denunciado la siembra ilegal de palma por la empresa Urapalma S.A. en por lo menos 1.500 hectáreas en el Territorio Colectivo del Curvaradó y su proyección sobre el Jiguamiandó. A pesar de años de transitar vías del diálogo, acciones jurídicas, comisiones de verificación, no se ha podido parar el avance de la destrucción del bosque, ni las amenazas de muerte contra los legítimos propietarios. En el informe de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Consejo Comunitario del Jiguamiandó y Familias de Curvaradó denuncia que en los últimos 15 días de abril de 2005 se intensificó la preparación de tierras para la siembra de palma aceitera, con deforestación de bosques nativos de los caseríos Caño Claro y La Cristalina dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó y por el sector de Urada en el entorno del Jiguamiandó, en el Bajo Atrato, y en los territorios con títulos individuales de miembros de las comunidades.

A pesar de que el pasado 14 de marzo el Gobierno Nacional se comprometió en la Audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a tomar medidas para que las empresas palmicultoras detengan sus actuaciones y a definir mecanismos para resolver el problema de fondo, lo que se ha constatado es un avance acelerado de la preparación de nuevos predios, la destrucción ambiental, la imposibilidad de retorno de las familias afro descendientes del Curvaradó y Jiguamiandó y el incremento de amenazas de muerte contra los verdaderos propietarios, que ante la inacción gubernamental, la negligencia del ente investigador y los organismos de control han intentado recuperar las fincas para su supervivencia.

La Brigada XVII y la Policía de la región han sido responsables por acción u omisión de dichas violaciones de los derechos humanos. Por otro lado, personal vinculado con las empresas palmicultoras han intimidado a los pobladores -legítimos dueños- con la advertencia de que matarán a 5 de ellos y quemarán las enramadas de sus fincas si persisten en trabajar en las propiedades, que ya están destinadas para la siembra de palma.

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz expresa, además, que ante la impunidad de lo que ocurre en el Curvaradó y Jiguamiandó no es posible creer en las políticas oficiales en materia de ambiente ni de respeto a los Derechos Consagrados en la Ley 70 de comunidades negras, ni esperar que el circuito de impunidad cese: “se constata nuevamente que Derechos para los empobrecidos no existen sino en la formalidad, en centenares de papeles o de archivos electrónicos. Se constata que el exterminio, la persecución, la destrucción de un grupo humano desarrolla las más diversas técnicas desde la tortura corporal a la psicológica, desde la desaparición forzosa hasta la destrucción de caseríos, desde el asesinato selectivo y la masacre hasta el arrasamiento de todo tipo de vida, desde el desplazamiento forzoso hasta el desarraigo total y absoluto. Se ha impuesto el Estado de Hecho, el Derecho No Existe. La verdad no es posible. La ambición se impone sobre la solidaridad. El odio del poder sobre el amor de los empobrecidos. El Estado está erosionado”.

En un pedido de solidaridad urgente, los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y 9 comunidades del Curvaradó han solicitado, entre otras cosas:

- “Presencia urgente de voluntarios internacionales en las 3 Zonas Humanitarias y apoyo a la presencia permanente de Justicia y Paz en nuestras Zonas Humanitarias ‘Pueblo Nuevo’, ‘Bella Flor Remacho’, ‘Nueva Esperanza’”.
- Participación de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos en la semana de presencia mundial en los territorios de las comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó del 1 al 10 de agosto de 2005, con el fin de:
- Constatar las actividades de las empresas palmicultoras durante esa semana, exigir la suspensión de los trabajos en los territorios de las comunidades y realizar un acto de indignación.
- Visualizar la expropiación de tierras, de la que vienen siendo víctimas las comunidades, a través de medios nacionales e internacionales de información que serán convocados a la jornada en terreno”.

Como exigencia al Estado y al Gobierno, las comunidades solicitan:

- “Dirigir cartas al Presidente de la República Alvaro Uribe Vélez, al Vicepresidente Francisco Santos; al Ministro del Interior Sabas Pretel De La Vega, al Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias; a la Ministra del Medio Ambiente, Sandra Suárez Pérez; Ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Barco, exigiendo:
- Honrar la palabra empeñada ante la Corte Interamericana el 14 de marzo pasado, en San José de Costa Rica, de frenar y de suspender de modo inmediato la siembra de palma aceitera en los Territorios Colectivos del Jiguamiandó y Curvaradó.
- Responder integralmente a la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 15 de marzo respecto a la asistencia humanitaria, condiciones de retorno de las comunidades, respeto a las Zonas Humanitarias, dotación de los sistemas de comunicación, presencia permanente de la Defensoría del Pueblo en las Zonas Humanitarias.

- Crear una Comisión de Verificación de Medición de Daños Ecológicos en el Territorio Colectivo del Jiguamiandó y Curvaradó por efecto de la siembra de palma aceitera y las posibilidades de Retorno de las comunidades afro descendientes”. (Boletín del WRM, n° 94, mayo 2005).
- **Colombia: plantaciones de palma aceitera en tierras comunales usurpadas**

Las selvas del Pacífico colombiano, que constituyen el Territorio Región del Pacífico, una de las zonas de mayor diversidad biológica del mundo, han sido habitadas desde hace muchos años por las comunidades ribereñas negras. Sus integrantes fueron los últimos ciudadanos colombianos a los que se les reconoció el derecho a la propiedad de los territorios que poseyeron y utilizaron durante siglos. La Constitución de 1991 les reconoció derechos colectivos sobre los territorios ocupados tradicionalmente, pero estuvo acompañada desde sus inicios por un feroz y sistemático proceso de desplazamiento forzado interno que aún continúa en muchos lugares de la región y que, incluso, se ha agravado con el número creciente de comunidades a las que se les impide su movilización y se les controla el ingreso de alimentos, medicinas y combustibles.

Como expresa Carlos Rosero, Candidato a la Cámara de Representantes de las Comunidades Negras: “El desplazamiento forzado interno es funcional, no sólo a la guerra, sino también al avance de los megaproyectos y monocultivos, que como la palma aceitera, avanzan con el apoyo del gobierno nacional al norte y al sur del Territorio Región del Pacífico y de otros asentamientos de comunidades negras en el país. El reconocimiento inicial por parte del INCODER [Instituto Colombiano de Desarrollo Rural] hecho en el mes de marzo de 2005, del avance ilegal del monocultivo de la palma aceitera en los territorios colectivos de comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó y la reciente reversa que despoja a estas comunidades de parte de las tierras que les habían sido tituladas colectivamente con carácter inembargable, imprescriptible e inalienable, es un clarísimo ejemplo del modelo de inclusión y de inserción de la región, sus territorios y pobladores a la lógica económica predominante, de la gravísima incoherencia del Estado en definir entre la protección y conservación de la diver-

sidad biológica y el simple y vulgar desarrollismo y, lo es que todavía más grave, una nueva demostración de que el Estado colombiano, que ha sido incapaz de proteger los derechos de los afro colombianos, termina doblegándose ante los culpables de las violaciones de los derechos, no los castiga y de ñapa los premia.”

En el año 2000, las comunidades de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó (región del Chocó), tres años después de ser desplazadas, reciben la titulación de 101.000 hectáreas que ocupaban ancestralmente antes del desplazamiento. Pero al decidir retornar estas comunidades encuentran su territorio invadido por cultivos industriales de palma aceitera.

Ante los intentos de los verdaderos propietarios de recuperar las fincas, cundieron amenazas de muerte de tipo paramilitar y del personal vinculado con las empresas palmicultoras (URAPALMA, Palmas De Curvaradó, Palmas S.A., y Palmadó), en medio de operaciones militares que han intentado hacerlos desistir de trabajar en las tierras que el gobierno destinó a la siembra de palma aceitera.

A fines de abril de este año se intensificó la preparación de tierras para la siembra de palma aceitera, con deforestación de bosques nativos en los caseríos Caño Claro y La Cristalina dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó y por el sector de Urada en el entorno del Jiguamiandó. Por su parte, INCODER terminó afirmando que se equivocó al otorgar el título colectivo y que hay 10.162 hectáreas de propiedad privada que en consecuencia deben ser descontadas del título colectivo.

Como expresa la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz: “Es alarmante que después de más de 13 desplazamientos sufridos por las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, de más de 110 asesinatos y desapariciones y habiéndose constatado la ilegalidad de la siembra de palma aceitera en los territorios colectivos de las comunidades negras, hoy el Gobierno Nacional contradiga sus propias conclusiones para favorecer los intereses económicos de los palmicultores”.

En una visión diametralmente opuesta, el movimiento social de las comunidades de toda el área de la selva húmeda del Pacífico concibe su territorio como una “región-territorio de grupos étnicos”, es decir

una unidad ecológica y cultural amalgamada por las prácticas cotidianas de las comunidades. La región-territorio se concibe asimismo en términos de “corredores de vida” que unen a las comunidades, sus actividades y el medio ambiente natural. Los corredores de vida pueden conectar ecosistemas de manglares o extenderse desde el medio de un río hasta el interior de la selva. Algunos se constituyen en torno a actividades particulares, como la minería de oro tradicional o la recolección de conchas por las mujeres en las zonas de manglares.

La región-territorio, por otra parte, es concebida como una construcción política para la defensa de los territorios y su sustentabilidad. No se puede concebir la sustentabilidad en términos de retazos o actividades singulares, o solamente en términos económicos: debe responder al carácter multidimensional de las prácticas de apropiación efectiva del ecosistema. Así, se puede decir que la región-territorio articula el proyecto de vida de las comunidades con el proyecto político del movimiento social. Del mismo modo, la definición de biodiversidad incluye principios locales de autonomía, conocimiento, identidad y economía. La naturaleza no es “algo que está ahí afuera” sino que está profundamente arraigada en la práctica colectiva de seres humanos que se sienten conectados con ella en forma integral.

Las comunidades negras tienen la convicción de que la tierra, como ente vivo, debe ser colectiva. Y así lo expresan: “Para nosotros, la tierra es la madre y contra ella se comete un crimen del que vienen todos los males y miserias. Nuestra madre, la de todos los seres vivos, está sometida, según la ley que se impone, tiene dueños, es propiedad privada. Al someterla como propiedad para explotarla, le quitaron la libertad de engendrar vida y de proteger y enseñar el lugar, las relaciones y el tiempo de todo lo que vive... Todos los pueblos somos esclavos junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad”. (Boletín del WRM, n° 100, noviembre 2005).

- **Ecuador: palma africana y madereras en la Bio-región del Chocó**

En el Ecuador, los bosques de Esmeraldas, forman parte del último reducto de bosques tropicales de la costa del Pacífico en Améri-

ca. Estos bosques hacen parte de la región biogeográfica del Chocó, uno de los 10 “*hot spots*” del planeta, que se extiende desde el Sur de Panamá hasta el Norte de Esmeraldas. En esta zona hay unas 10.000 especies de plantas de las cuales unas 2.500 son endémicas. Este es el hogar de los pueblos Awá, Chachi y Tsachila, así como de comunidades afro ecuatorianas que mantienen formas de vida tradicional.

Sin embargo, estos bosques están siendo destruidos a un ritmo impresionante, debido a la deforestación provocada por el monocultivo de palma africana y la industria maderera, que han contado hasta ahora con la complicidad del gobierno nacional.

El 8 de agosto del 2002 el Presidente ecuatoriano Gustavo Noboa emite el decreto ejecutivo 2691, elaborado conjuntamente entre los ministerios del Ambiente, Agricultura y Relaciones Exteriores. Este decreto designa para uso agrícola, un polígono de 50.000 hectáreas, en el Cantón San Lorenzo, Provincia de Esmeraldas. De esta superficie 5.000 hás. son de Patrimonio Forestal del Estado ecuatoriano, más de 5.000 hás. son tierras ancestrales afro americanas, y más de 1.000 hás. son tierras indígenas Awá. Constitucional y legalmente, las tierras comunitarias son indivisibles e intransferibles. Este decreto tiene como objetivo no declarado legitimar la sistemática expropiación de tierras ancestrales y Patrimonio Forestal del Estado que desde hace algunos años vienen realizando las empresas palmicultoras en el norte de Esmeraldas. Las palmicultoras han ido arrebatando la tierra de las comunidades mediante compras ilegales y desplazamientos forzosos de las familias ancestrales. Este decreto va dedicado específicamente a los empresarios palmicultores, entre los cuales se encuentran familiares del presidente saliente Gustavo Noboa Bejarano.

Dentro de esta política de despojo se está aprovechando la coyuntura generada por el Plan Colombia en la frontera norte del país. Para mitigar los efectos del conflicto se crea la Unidad de Desarrollo del Norte (UDENOR), con fondos para apoyar a las comunidades ubicadas cerca de la frontera con Colombia. Estos fondos, sin embargo, al amparo del decreto mencionado, están siendo usurpados por los mismos empresarios palmicultores y no por las comunidades afectadas.

La constitucionalidad de este decreto ha sido cuestionada por la CONAIE, Acción Ecológica y otras organizaciones locales y ambien-

tales mediante la interposición de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Por otro lado, el Ministerio del Ambiente no ha cumplido con su responsabilidad de controlar el proceso de deforestación en Patrimonio Forestal del Estado, y la adjudicación ilegal de estas tierras, por parte del INDA (Instituto Nacional de Desarrollo Agrario) a las empresas madereras ENDESA y BOTROSA, parte del grupo Peña Durini, uno de los más poderosos del país. En investigaciones realizadas en el predio el Pambilar dentro del Bloque 10 de Patrimonio Forestal del Estado (uno de los muchos predios cuestionados) por el Ministerio del Ambiente en el año 2000, se identificó y comprobó que las 2.800 hás. del predio en cuestión fueron ilegalmente adjudicadas, por parte del INDA a la empresa BOTROSA. A partir de este caso, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción demostró que por lo menos otras 18.000 hás. de bosques fueron ilegalmente adjudicadas. El informe de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción provocó la intervención de la Contraloría General del Estado que, en julio del 2002, inició un examen especial al Ministerio del Ambiente y al INDA para identificar el estado de las adjudicaciones de los predios ubicados en Patrimonio Forestal, y establecer las responsabilidades administrativas civiles e indicios de responsabilidad penal, cometidos tanto por los funcionarios como por los actores directamente involucrados.

En este proceso la ministra del Ambiente, Lourdes Luque, también familiar del Presidente Noboa, ha hecho la vista gorda, y ha actuado a paso de tortuga beneficiando así a las empresas palmicultoras y madereras.

En octubre del 2002 el Tribunal Constitucional emite un fallo a favor de un amparo constitucional presentado por campesinos de la zona que fueron despojados de sus tierras, y demanda la sanción de los funcionarios involucrados en estas adjudicaciones ilegales, así como la devolución de las tierras e indemnización de los afectados por parte de las madereras ENDESA Y BOTROSA.

El bosque tropical ecuatoriano, albergue de una enorme diversidad cultural y biológica está a punto de desaparecer. No cabe en este proceso el concepto de explotación forestal certificada, como lo pre-

tenden las empresas madereras ENDESA Y BOTROSA, que han presentado ante SMARTWOOD y el FSC una solicitud para certificar su explotación. Tampoco cabe creer que plantaciones o proyectos de reforestación pueden sustituir el bosque primario original.

En este escenario el gobierno entrante del Coronel Lucio Gutiérrez enfrenta un gran desafío para conservar lo poco que queda aún de bosque primario. Quizás lo único que pueda salvar el bosque es la declaración de una moratoria indefinida a la explotación comercial del bosque. (Por: Ivonne Ramos, Boletín del WRM, n° 66, enero 2003).

- México: ¿quiénes se benefician con la palma aceitera en Chiapas?

Los intereses empresariales que giran en torno a la palma africana, o palma aceitera, encuentran en México, y más precisamente en Chiapas, un lugar ideal para su negocio, básicamente por la diversidad de climas de la zona, la disponibilidad de mano de obra barata (más aún por su condición de estado fronterizo con América Central, donde abunda la mano de obra indocumentada) y la posibilidad de acceder fácilmente a la tierra de comunidades campesinas que, empujadas y presionadas por las poderosas fuerzas del mercado expresadas en políticas agrarias, pasan a convertirse en asalariados en su propia tierra, que deja ya de ser la base de su seguridad alimentaria.

Chiapas ha sido hasta ahora una región eminentemente agrícola, y uno de los estados más afectados por la crisis que se vive en el campo con la caída de los precios del café, el maíz, el sorgo, la piña, el frijol, etc., que ha generado una constante migración de campesinos al norte del país, Estados Unidos y Canadá. Esta circunstancia fue aprovechada como argumento para promover la siembra de palma africana, que en Chiapas comenzó en el periodo 1982-88, durante la gobernación del General Absalón Castellanos Domínguez, en los municipios de Villacomaltitlán, Escuintla, Acapetahua, Mazatán, Acacoyagua, Tapachula. En la década del 90 abarcó otras regiones y municipios como Salto de Agua, Playas de Catatzajá, Chilón, Tumbalá y Palenque. El argumento utilizado para convencer a los campesinos a que dejen los cultivos tradicionales es: "ya no trae cuenta sembrar maíz y frijol porque no tienen buen precio, ahora la alternativa es la palma africana".

En 1997, tan solo en la Costa de Chiapas se habían sembrado alrededor de 3.000 hectáreas de palma africana, destinadas a proveer a las plantas extractoras de aceite ubicadas en Villacomaltitlán y Aca-petahua. En el año 2000, la Agenda Estadística de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas identifica 7.816 hectáreas sembradas tan solo en Tapachula, de las cuales 2.748 hectáreas estaban en producción.

Pero el mercado de la palma africana ha comenzado a hacer agua. Han surgido otros productos como el sorgo, el girasol, el cacahuete o maní, el maíz, la soja, etc., que también producen aceite y entran en competencia con el aceite de palma. Por otro lado, es política de las empresas transnacionales promover la plantación masiva mundial, para bajar los precios. Con ello procuran obligar a las otras empresas a bajar sus precios.

Los productores de Acapetahua reclamaban en el año 2000, que “siendo el gobierno el principal promotor”, debería ser el garante de los precios. Por otro lado, durante el gobierno de Julio César Ruiz Ferro y Roberto Albores Guillén, en la región norte de Chiapas, en Palenque, Salto de Agua y Playas de Catazajá, los grupos campesinos que se beneficiaron con los proyectos asociados a la plantación de palma africana estaban en general vinculados al oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), a pesar de lo cual también entraron en crisis pues no estaban preparados para controlar no solo las plagas que afectaron a sus cultivos, sino también la proliferación de ratas que en la mayoría de los casos se comían la planta.

La actividad agroindustrial, en su habitual modelo de monocultivo a gran escala, con utilización obligada de productos agroquímicos (plaguicidas, fertilizantes, etc.) y condiciones precarias de empleo, no mejora las condiciones de vida de los campesinos, ni constituye una opción sustentable para sacarlos de la pobreza. ¿Cómo podría serlo si arrasa con sus recursos y conocimientos tradicionales, si destruye la base de los mismos (su medio ambiente) y los despoja de su soberanía alimentaria, de su futuro? (Boletín del WRM, n° 59, junio 2002).

- Perú: la Amazonía amenazada por proyectos de plantaciones de palma aceitera

Las plantaciones de palma aceitera se expanden en América del Sur: Colombia, Ecuador, Venezuela y ahora Perú, que se suma al impulso comercial. Las empresas encuentran lucrativas oportunidades a costa de la invaluable selva amazónica y de la vida de los campesinos, quienes se ven desplazados de las tierras que trabajan para obtener su sustento.

En el año 2000 el Ministerio de Agricultura elaboró el Plan Nacional de Promoción de la Palma Aceitera 2000 - 2010. Con un enfoque de mercado, el plan busca promover “núcleos” productivos o “clusters” en los departamentos de San Martín y Loreto, hasta consolidar 50.000 hectáreas a establecerse en la región amazónica, la cual –según anunciaba el proyecto de Ley 9271– “cuenta con extensas y ricas tierras para desarrollar la industria del aceite de palma”.

En este contexto, llegan denuncias de que en plena llanura amazónica y parte de la ceja de la selva, 30.000 hectáreas de bosques tropicales comprendidos en los valles de la subcuenca de los ríos de Caynarachi y Shanusi, en el distrito de Yurimaguas, región Loreto, serán destinados al cultivo e industrialización de la palma aceitera por el grupo Romero, un poderoso conglomerado mixto al que pertenecen las empresas Industrias del Espino S.A. (INDESA) y Palmas del Espino y Subsidiarias (PALMESA). Antes de darse a conocer los resultados del estudio de impacto ambiental del proyecto, se informa que ya se ha iniciado la deforestación de 2.000 hectáreas en la zona de Shanusi.

Las autoridades estatales (el Concejo Nacional del Ambiente-Perú/ CONAM y el Instituto Nacional de Recursos Naturales/INRENA), no han puesto objeciones a este proyecto, que no solamente degradará el hábitat de miles de especies silvestres, sino que se lleva a cabo a expensas de los derechos territoriales de numerosas comunidades campesinas. Se da la situación de que, en muchos casos, comunidades que ocupan la zona de influencia del proyecto desde 1941 o 1961, no han podido realizar la titulación de sus tierras comunales por los costos que conlleva el proceso. Pero, además, la titulación, que a una

comunidad campesina o nativa le insume de uno a tres años, al Grupo Romero le requirió tan sólo tres meses y hoy en día la empresa logró apropiarse de tierras de familias campesinas.

Más de 40 familias en terrenos que ocupan desde hace seis años se sienten burladas por los organismos encargados de su titulación, ya que en un inicio les prometieron titular sus parcelas, pero ahora les argumentan que como los terrenos se encuentran dentro del área que ha solicitado la empresa del Grupo Romero, no es posible continuar con los trámites. La Asociación de Productores Agrarios “Centro San Isidro” del Alto Shanusi indica que sus integrantes iniciaron los trámites legales en 2005 y que el PETT (Proyecto Especial de Titulación de Tierras) realizó las mediciones de los terrenos, por lo que la decisión les causa gran sorpresa y malestar.

Los campesinos de la zona son conocedores de que proyectos similares de monocultivos de palma aceitera llevados a cabo en Colombia y Ecuador no solamente han implicado la destrucción del ambiente, sobre todo por el uso de agroquímicos y sus impactos en el agua, el suelo, la flora y la fauna, sino que también han desplazado a miles de campesinos. Los aspectos sociales tampoco son buenos, dicen, ya que afectarán actividades como la leña, la caza, la pesca, entre otras.

Por su parte, la Directiva de la Asociación de Productores Agropecuarios “Centro San Isidro” –APACSI del bajo Shanusi– Yurimaguas, frente a la invasión de las plantaciones de palma emitió una declaración en la que denuncian a las autoridades por haber guardado silencio ante la negativa del PETT a otorgarles los títulos de propiedad de las tierras que han ocupado y trabajado durante más de seis años, cuidando a la vez la selva virgen del sector San Isidro bajo Shanusi.

Lamentan también que un amplio sector de la prensa “no está dando cobertura a este problema que se viene agigantando día tras día y que seguramente desembocará en graves y funestas consecuencias para nuestra ecología, con la deforestación de un amplio territorio ... y con ello el aniquilamiento de miles de especies de flora y fauna, sólo con el miserable objetivo de sembrar palma aceitera para el negocio lucrativo del aceite vegetal para los nuevos motores ‘ecoló-

gicos' que seguramente la firma Romero estará pensando vender en nuestra patria. Cabe señalar que dicha palma tan solamente crece con sol y agua; es decir, toda la vegetación que para ellos no sirva será destruida y con ello los seres que la habitan; además, que no es cierto que esta inversión traerá desarrollo para la población del sector, la cual viene siendo obligada a vender sus tierras para poner en marcha este 'ecologicida' proyecto que tan solamente es un paliativo temporal al hambre y miseria de nuestros tan sufridos pueblos". (Boletín del WRM, n° 109, agosto 2006).

ASIA

- **Camboya: plantaciones de caucho y de palma africana provocan impactos en las comunidades locales**

Las plantaciones de caucho y de palma aceitera, aun cuando no están relacionadas con la industria de la celulosa y el papel, afectan a las comunidades locales de manera similar a las plantaciones de árboles de rápido crecimiento. Las plantaciones de caucho y de palma aceitera también utilizan grandes superficies de tierra, a menudo tierra que es crucial para el sustento de los pueblos del lugar.

Durante la década del 60, y especialmente en el noreste de Camboya, numerosos habitantes de las montañas fueron erradicados de sus tierras tradicionales con la finalidad de hacer lugar para las plantaciones de caucho. Las plantaciones, las políticas de asimilación del Príncipe Norodom Sihanouk en el noreste, y el bombardeo de la aviación estadounidense hicieron de esa zona un lugar primordial de reclutamiento en los primeros años del Khmer Rouge de Pol Pot.

Desde entonces muchas de esas plantaciones de caucho fueron descuidadas, y recién en los últimos años algunas de ellas fueron rehabilitadas. Actualmente, el gobierno de Camboya está promoviendo la rehabilitación de las plantaciones de caucho y la realización de nuevas plantaciones.

En agosto de 2001, el Primer Ministro Hun Sen pronunció un discurso en la provincia Kompong Thom en ocasión de la plantación de 6.200 hectáreas de la compañía Chhub Rubber Plantation Company, en el cual elogió a la compañía por “rehabilitar el equilibrio ecológico de la región, que hasta cierto punto fue degradado por el madereo”. Los pobladores locales deberán plantar cultivos comerciales entre los árboles de caucho y recibirán tres hectáreas de tierra “para realizar plantaciones de caucho o sembrar otros cultivos comerciales”. Hun Sen agregó: “De arrozeros de roza y quema, nuestro pueblo se ha convertido en trabajadores y propietarios de la familia de las plantaciones de caucho”.

No obstante, las experiencias de los pobladores locales con las plantaciones y los cultivos comerciales en toda Camboya indican que existen problemas graves cuando las plantaciones agrícolas ocupan grandes superficies de tierra. Una plantación de palma aceitera en Ratanakiri, en el noreste de Camboya, ilustra estos problemas.

En 1995, una compañía de empresa mixta ganó una concesión de 20.000 hectáreas para plantar palma aceitera en el distrito O Yadao, en la provincia de Ratanakiri. La compañía es una empresa mixta, o *joint venture*, de Globaltech Sdn. Bhd. (Malasia), Mittapheap-Men Sarun y Rama Khmer International (las últimas dos de Camboya). El proyecto desplazaría a 4.500 personas de su tierra, y a cambio ofrecería un máximo de 400 puestos de trabajo.

La compañía reclutó pobladores locales para limpiar la tierra con destino a la plantación, arrasando incluso los bosques y tierras de barbecho de los aldeanos. “La compañía hizo mensura de la tierra que la gente estaba cultivando y dijo que esa tierra ya pertenecía a la compañía, aun cuando no la vendimos”, contó uno de los pobladores locales a Sara Colm, investigadora de la ONG Natural Resources Management Project (Proyecto de Manejo de los Recursos Naturales). Sin embargo, en 1996 se realizó una plantación de prueba que resultó un fracaso total, y la tierra que la compañía ya había arrasado simplemente quedó sin utilizar. Luego la compañía comenzó a plantar café, pero en la estación siguiente la sequía liquidó a gran parte de la plantación. La compañía construyó entonces una represa para tener agua con la que irrigar el café. Para los pobladores locales que viven río abajo de la represa eso significó que sus arroyos y fuentes de agua se secaran. La compañía compró la tierra de los pobladores locales que quedó sumergida por el embalse a un precio de US\$ 52 por hectárea. Ellos la vendieron de mala gana, pero razonaron que si se negaban, la compañía se la quedaría de todos modos.

Un estudio realizado por Proyecto NTFFP (NTFFP Project), una ONG con sede en Ratanakiri, compara el ingreso potencial que hubieran recibido los pobladores locales por la plantación de árboles frutales entre 1995 y 1998, con el ingreso devengado del monocultivo a gran escala. El estudio concluye que el ingreso percibido por los árboles frutales es significativamente superior para los pobladores locales, y

“debido a que se basa en una variedad de cultivos, presenta menos riesgos y es más sustentable que los monocultivos a gran escala que se ofrecen como alternativa”.

El informe también resume los problemas de los pobladores con la agricultura por contrato en las plantaciones de monocultivos a gran escala:

“Si bien la compañía puede ofrecer oportunidades de trabajo para los pobladores locales, su sistema de aparcería o arrendamiento de terrenos agrícolas aumenta la vulnerabilidad de las poblaciones locales porque para dedicarse a cuidar el café tendrán que dejar de plantar arroz para sus familias. Su ingreso dependerá mucho de las condiciones de crecimiento estacional y la compañía dictará el precio al que los pobladores deberán vender su grano a la compañía. En realidad, se pide a los agricultores que asuman riesgos que no pueden enfrentar. Su pregunta a la compañía era (...) cómo cuidarán de sus hijos y ancianos si tienen que abandonar todo para cuidar el café”. (Boletín del WRM, n° 59, junio 2002).

- **Indonesia: ¡¡¡Buenas noticias sobre la palma aceitera!!!**

El desarrollo de la industria de palma aceitera en Indonesia está asociado con asesinatos, violaciones de derechos humanos, destrucción de comunidades y culturas locales, y pérdida de bosques. Muchas comunidades locales y ONG han luchado contra este modelo industrial destructivo durante años, tanto en el ámbito local como internacional. Esta lucha ha tenido recientemente un logro muy importante que resulta necesario compartir con todas aquellas personas comprometidas en luchas similares.

En Indonesia, el desarrollo del sector de la palma aceitera comenzó en los años 1970. Entre 1995 y 1999, el gobierno indonés aprobó proyectos de inversión nacional y extranjera, que dieron lugar al otorgamiento de préstamos de bancos extranjeros para ese sector. Entre los prestamistas extranjeros se incluían los bancos holandeses ABN AMRO, Rabobank y Fortis, que de esa forma se involucraron en la financiación de compañías de plantación de palma aceitera que causaron la destrucción de los bosques tropicales y de las formas de sustento de las comunidades locales que dependen de esos bosques.

Durante 1997 y 1998, se quemaron 10 millones de hectáreas de bosques en Indonesia. La humareda que cubrió la región durante varios meses afectó la salud de más de 70 millones de personas en el sureste de Asia. Más que exigir una mayor capacidad de combatir el fuego en Indonesia, las ONG ambientales procuraron una solución de fondo para combatir los incendios y fueron tras los patrocinadores financieros de la industria de la palma aceitera en Indonesia, el sector que tenía la responsabilidad principal por los incendios forestales.

Como resultado de esta campaña conjunta de Sawit Watch, Amigos de la Tierra/Países Bajos y Greenpeace/Países Bajos, tres de los principales bancos holandeses (ABN AMRO, Rabobank y Fortis) han decidido dejar de financiar o restringir en forma sustancial la financiación del desarrollo de plantaciones de palma aceitera que destruyan intencionalmente los bosques tropicales.

Las ONG exigieron que los bancos adoptaran criterios sustentables para la inversión en el sector de palma aceitera. Los tres bancos declararon que apoyaban los criterios de inversión presentados por las ONG. Las compañías de palma aceitera que presenten propuestas de inversión a estos bancos ahora deberán aceptar los siguientes requisitos básicos:

- No deforestar
- No incendiar los bosques
- Actuar dentro del marco legal
- Respetar los derechos y deseos de las comunidades locales.

Sawit Watch, la red de ONG indonesas que está realizando campañas contra la expansión de las plantaciones de palma aceitera en gran escala, ha exigido a todos los bancos del mundo, incluso los bancos indoneses, que adopten las medidas tomadas por esos bancos holandeses. Esperamos sinceramente que se instrumenten acciones positivas respecto a este tema, no sólo en Indonesia, sino también en el resto de los países donde se promueven las plantaciones industriales a gran escala de palma aceitera. (Boletín del WRM, nº 52, noviembre 2001).

- **Indonesia: plantaciones de palma aceitera en el centro de la destrucción de la biodiversidad**

Indonesia posee el 10% de los bosques tropicales que todavía existen en el mundo, los que albergan más de 20.000 especies de plantas (10% del total del planeta), 12% de las especies de mamíferos y 17% de las especies de pájaros, muchas de las cuales son únicas. La magnitud de esta grandiosa diversidad biológica puede apreciarse en este dato: en 25 acres de bosque húmedo de Borneo se encontraron 700 especies de árboles, el equivalente al total de especies presentes en toda América del Norte.

Sin embargo, cumpliendo con las políticas impuestas mundialmente por los poderes del Norte sobre los países ricos en biodiversidad del Sur, a través de recetas alentadas por las agencias multilaterales (Fondo Monetario Internacional-FMI, Banco Mundial), en los años 80, Indonesia aumentó la liberalización del comercio, lo que contribuyó a aumentar drásticamente la exportación de sus recursos naturales, entre los cuales el aceite de palma. El país se transformó rápidamente en el segundo productor mundial de aceite de palma.

La palma aceitera se cultiva en un sistema de monocultivo a gran escala, que por lo mismo requiere de grandes cantidades de insumos químicos (fertilizantes y plaguicidas), que producen la pérdida de biodiversidad en tierra y agua. Por otra parte, la conquista de nuevas tierras para las plantaciones implica el talado de bosques y la pérdida de hábitat. Las plantaciones de palma aceitera también son culpables de los graves incendios de bosques que asolaron al país en 1997, ya que se usaron los incendios como método para despejar tierras para las plantaciones. De los 176 titulares de concesiones acusados por el gobierno de iniciar los incendios en octubre de 1997, 133 correspondían a plantaciones. Actualmente, las plantaciones de palma aceitera cubren unos 3,4 millones de hectáreas de tierra y se han asignado 6,8 millones de hectáreas más para futuras plantaciones, en el marco de un plan quinquenal. Esto significa que entre 750.000 y un millón de hectáreas de bosque serán "convertidas" (destruidas) cada año.

Este proceso se ha transformado no sólo en una fuente de degradación ambiental sino también en un conflicto social pautado por violacio-

nes de los derechos humanos. Los derechos tradicionales y las tradiciones locales han sido arrasados por una nueva legislación que impone la propiedad estatal y niega la existencia de los habitantes de los bosques, es decir, los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Los grandes mercados para la creciente industria del aceite de palma son Europa, para el uso industrial, e India, Pakistán y China para el uso comestible, con un aumento rápido de la demanda en EE.UU. Las compañías transnacionales, incluyendo Unilever, Procter&Gamble, Henkel, Cognis y Cargill (algunas de ellas involucradas tanto en la producción como en el comercio), son elementos motores de este negocio promovido por la acción del FMI y el Banco Mundial en su afán de alentar la inversión extranjera y una mayor privatización del sector. Otros beneficiarios son, las instituciones financieras occidentales y los bancos privados; los inversores extranjeros de Malasia, Islas Vírgenes Británicas, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Hong Kong, Corea del Sur y Singapur; y la industria aceitera de Indonesia con estrechos vínculos con la familia Suharto.

Se han perdido los bosques, y con ellos los colores y las flores, el cantar de los pájaros, y los sonidos de los animales que allí habitaban, el agua clara de sus ríos, el alimento que aportaban, y el espíritu libre de sus pueblos... Se ha perdido la vida. ¿Continuarán las autoridades indonesas reemplazando la diversidad biológica de los bosques por los monocultivos de palma aceitera para el beneficio exclusivo de unas pocas compañías nacionales y transnacionales? (Boletín del WRM, n° 56, marzo 2002).

- Indonesia: informe del WWF vincula plantaciones de palma aceitera con deforestación a gran escala

Indonesia se encuentra entre los países con la tasa de deforestación más alta del mundo. La deforestación anual promedio registrada fue de hasta un millón de hectáreas durante los años 80, 1,7 millones de hectáreas durante la primera parte de la década de los 90, y actualmente se ubica entre 2,0 y 2,4 millones de hectáreas, según estadísticas del Ministerio de Medio Ambiente.

Como ya ha denunciado el WRM en boletines anteriores, las políticas mundiales impulsadas desde el Norte e impuestas por los orga-

nismos multilaterales (el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial) en los años 80, y la presión de una importante deuda externa, produjeron un aumento drástico de la exportación de recursos naturales, entre los que se incluye el aceite de palma, que se obtiene de la palma aceitera cultivada bajo un sistema de monocultivos a gran escala. La palma aceitera se convirtió en un cultivo lucrativo para los inversores en Indonesia, dado que la mano de obra y los costos de la tierra con frecuencia son bajos, los créditos se obtienen con facilidad y las condiciones climáticas y del suelo son favorables.

La demanda mundial de aceite de palma es voraz. Se pronostica que aumentará de la cifra actual de 22,5 millones de toneladas métricas anuales a 40 millones de toneladas en 2020. India, China, Holanda y Alemania son los principales importadores de aceite de palma crudo, el producto primario derivado del fruto de la palma, que se utiliza para una amplia gama de productos alimenticios y no alimenticios. La cadena comercial mundial cuenta con fondos proporcionados por instituciones financieras extranjeras de Europa, EE.UU. y Asia oriental. Sumatra, Kalimantan y Papúa Occidental son las áreas principales de Indonesia donde operan los grandes conglomerados como el Grupo Salim, el Grupo Raja Garuda Mas y el Grupo Sinar Mas. Son los mismos conglomerados que controlan las actividades de maderero y procesamiento de madera, y las industrias de producción de celulosa y papel.

Todo este negocio se ha realizado a costa de tierras que antiguamente eran bosques en las tierras bajas de Indonesia y del sustento de sus habitantes rurales. Según un informe reciente del WWF sobre “Plantaciones de palma aceitera y deforestación en Indonesia” publicado en diciembre de 2002, “en Indonesia se había aprobado la conversión de casi siete millones de hectáreas de tierras de bosques en plantaciones de cultivo de finca hasta fines de 1997, y esos territorios casi con seguridad fueron talados. Pero el área realmente convertida en plantaciones de palma aceitera desde 1985 es de aproximadamente 2,6 millones de hectáreas”, con orientación exportadora, para abastecer a las industrias de aceite de palma. “Uno de los cambios de reglamentación en el sector de palma aceitera introducido en 1998 establece que se permite a las compañías estatales dedicadas al manejo de bosques utilizar el 30% de sus áreas de concesión para cultivos de finca, tal como palma

aceitera”. Lo que resulta preocupante es que en general tienen concesiones en tierras de bosques permanentes.

Las grandes compañías de palma aceitera se han apropiado de tierras comunales sin consultar ni compensar en forma adecuada a los muchos millones de personas que viven en los bosques y que dependen de ellos para su sustento. El tema de los derechos sobre la tierra ha estado siempre en el centro del conflicto: “el desarrollo de plantaciones de palma aceitera sigue siendo una causa importante de conflicto en relación a la tierra y sus recursos. Uno de los impactos sociales de la expansión es la apropiación de grandes áreas de tierras usadas por las comunidades indígenas y campesinas que, en la mayoría de los países tropicales, no tienen la propiedad de las tierras que ocupan en forma tradicional. En los sectores en expansión, donde las apuestas económicas son altas, como el sector de la palma aceitera, las compañías de plantaciones pueden recibir concesiones de tierras o títulos de propiedad sobre esas tierras y recibir el apoyo del gobierno para reprimir a la oposición que pueda surgir de las comunidades locales”, afirma el informe del WWF.

Para completar el círculo, las plantaciones de palma aceitera a gran escala han sido la causa principal de los incendios de bosques que han assolado Indonesia desde 1997. Según el informe, “en setiembre de 2002, la información satelital reveló que más del 75% de los puntos calientes registrados en Kalimantan occidental y central durante el mes de agosto se produjeron en plantaciones de palma aceitera, plantaciones de árboles y concesiones de bosques. Esto indica que el mismo proceso que se tornó evidente en años anteriores se está repitiendo en 2002: las compañías madereras y las fincas desmontan y limpian las tierras de sus concesiones incendiando los bosques naturales, después de extraer la madera valiosa y dejar residuos de la tala que se incendian con facilidad”.

Un proyecto bilateral entre Indonesia y la Unión Europea (el Proyecto de Prevención y Control de Incendios de Bosques), “concluyó que la solución permanente más importante para el problema de los incendios en Indonesia radica en mejorar en gran medida la planificación del uso de la tierra en el ámbito local y en fortalecer el manejo local; este último punto incluye la prevención de incendios. El proyec-

to estableció que los puntos de vista locales sobre el manejo de los recursos naturales varían de un lugar a otro, pero que en general coinciden con el ‘uso racional’.

La conclusión anterior no es nueva, y hace muchos años que las organizaciones indonesas están insistiendo en la necesidad de asegurar el control de las comunidades sobre los bosques, como forma de garantizar tanto la conservación de los bosques como el sustento de los pobladores locales. El elemento nuevo es el reconocimiento oficial de que “los puntos de vista locales sobre el manejo de los recursos naturales varían de un lugar a otro, pero que en general coinciden con el ‘uso racional’”. Al menos es un pequeño avance en la dirección correcta. Pero todavía quedan varias preguntas por plantear: ¿Tiene el gobierno la voluntad de cambiar su curso de acción y fortalecer el manejo local de los recursos a costa de las corporaciones nacionales y transnacionales que operan en el sector de la palma aceitera? ¿Apoyarán el FMI y el Banco Mundial este enfoque, que de hecho significaría detener la expansión de la palma aceitera (y de las exportaciones de aceite de palma)? ¿Prevalecerán finalmente los intereses de los bosques y de los pueblos sobre las ganancias empresariales y las políticas macroeconómicas orientadas a la exportación? (Boletín del WRM, n° 66, enero 2003).

- Indonesia: la palma aceitera hace desaparecer los bosques

Entre 1990 y 2002, el área de palma aceitera plantada mundialmente aumentó en un 43%. La mayor parte de este crecimiento tuvo lugar en Indonesia y Malasia. En Indonesia, entre 1990 y 2000, la superficie total plantada con palma aceitera prácticamente se triplicó, pasando de 1,1 a 3 millones de hectáreas. En 2002, al superarse la crisis financiera de 1997-1999, el área de plantaciones maduras de palma aceitera llegó a los 3,5 millones de hectáreas. Asumiendo un ritmo de plantación como el de los últimos años, se pretende que para 2020 la superficie total ocupada por las plantaciones de palma aceitera en Indonesia llegue a 11,2 millones de hectáreas.

La superficie total destinada a la palma aceitera constituye un objetivo a expandir más que un techo a la expansión (a comienzos de la

década de 1990 se fijó una meta similar de 5,5 millones de hectáreas, que después se sustituyó por 9,13 millones de hectáreas). Es muy probable que el gobierno indonesio, sea a escala local o nacional, ceda ante el poderoso interés del sector privado de involucrarse en el negocio de la palma aceitera y ante las ambiciones de los gobiernos locales que, en 2001, en el marco de las políticas de descentralización, fueron dotados de un gran poder de decisión sobre el uso de grandes extensiones de tierra.

El hábitat original de la mayor parte de las áreas aptas para la palma aceitera es el bosque húmedo tropical perenne de tierras bajas. De acuerdo con los últimos estudios de las áreas de bosques permanentes –aún no publicadas en forma oficial– la superficie de bosque autorizada por el gobierno para dedicarla a actividades agrícolas aumentó de 8 millones de hectáreas en 2000 a 14 millones en 2002. El Instituto Indonesio de Investigación de la Palma Aceitera (Indonesian Palm Oil Research Institute - IOPRI) estima que un 3% de las plantaciones de palma aceitera están establecidas en bosques primarios y el 63% en bosques secundarios y formaciones arbustivas. Por tanto, de acuerdo con los datos de la industria, el 66% de todas las plantaciones de palma aceitera actualmente productivas implicaron la sustitución de bosques.

Sin embargo, el ritmo de plantación efectivo de Indonesia está muy rezagado en relación con las adjudicaciones del gobierno. De los 7,2 millones de hectáreas autorizadas en la década de 1990, solo se plantaron efectivamente 530.000 hectáreas (7,5%) en 2002. Esto es en parte resultado de la crisis monetaria de 1997-2002, durante la cual pocas compañías pudieron acceder a créditos para comenzar sus programas de plantación. Otro factor es que muchas compañías de “palma aceitera” están más interesadas en la de madera en pie que en instrumentar sus proyectos de plantación. Entre el 70 y 80% de los proyectos de palma aceitera nuevos son asignados en bosques que cuentan con importantes cantidades de árboles, lo que proporciona la ventaja inicial de obtener ingresos por la venta de la madera allí existente. Después de extraer la madera, muchas compañías abandonan el proyecto. En la provincia de Jambi, cerca de 800.000 hectáreas de bosque talado para establecer plantaciones de palma aceitera están ahora abandonadas, y en el distrito de Landak, en Kalimantan Occidental, hay otras 300.000 hectáreas.

Las observaciones de campo indican que varias plantaciones de palma aceitera en Indonesia se establecieron en zonas que obviamente estaban cubiertas por bosques inmediatamente antes de ser sustituidas por plantaciones.

En Sembuluh, Kalimantan Central, la empresa PT Kerry Sawit Indonesia (subsidiaria de la compañía de plantaciones Perlis Palm Oils Berhad, con sede en Sabah) está por iniciar actividades para plantar 17.200 hectáreas. Dentro de la zona todavía hay 7.500 hectáreas de bosque y huertos forestales que los miembros de las comunidades locales desean desesperadamente proteger. Esa área de bosque es una de las últimas en la zona del Lago Sembuluh, que está completamente rodeado por fincas de palma aceitera.

En Muara Wahau, Kalimantan Oriental, una subsidiaria de PT SMART (Sinar Mas) convirtió unas 2.500 hectáreas de bosque primario en plantaciones de palma aceitera. El bosque de tierras bajas en el área de la compañía PT Matrasawit solía ser hábitat del orangután, una especie en peligro y protegida en Indonesia.

En Riau, Sumatra, una subsidiaria del grupo indonesio Indofood Sukses Makmur (PT Gunung Mas Raya) está trabajando en la tala de un bosque de pantano de turba, parte del cual puede estar fuera de los límites de la concesión. Si así fuera, estaría contraviniendo la política de riesgo de uno de los principales inversionistas del grupo, ING de Holanda, que se plantea no financiar la sustitución ilegal de bosques.

El análisis del mapa satelital efectuado por las ONG indonesas Sawit Watch y Amigos de la Tierra Indonesia (Walhi) reveló que en los alrededores del Parque Nacional del lago Sentarum en Kalimantan Occidental, la superficie plantada con palma aceitera aumentó de 3.000 hectáreas en 1994 a 94.000 hectáreas en 2000. Mientras tanto, según los informes de la prensa, la superficie total de bosque se redujo de 528.300 a 323.000 hectáreas.

En los alrededores del Monte Seratus en Kalimantan Sur, se han sustituido unas 43.000 hectáreas de bosque por plantaciones desde 1994, aumentando la superficie total de plantaciones de 86.000 a 129.000 hectáreas. Las zonas de bosque que rodean el Monte Meratus se redujeron, pasando de 1.337.000 a 987.000 hectáreas.

Las pruebas que surgen tanto de los mapas como de los relatos sugieren que también se han establecido plantaciones de palma aceitera en varias zonas de amortiguación (uso de baja intensidad) de otros parques nacionales, entre ellos el Parque Nacional Tanjung Puting, el Parque Nacional Bukit Tiga Puluh y el Parque Nacional Gunung Leuser.

Además de provocar la deforestación generalizada, las plantaciones de palma aceitera han ocasionado la muerte de decenas de personas asesinadas en conflictos laborales o relacionados con la tenencia de la tierra, además de cientos de muertes que pueden atribuirse a los impactos ambientales de la expansión de la palma aceitera.

Esta expansión destruye los ecosistemas y la vida silvestre en una de las regiones de mayor biodiversidad del mundo. También destruye la forma de vida de los pueblos indígenas, su autodeterminación y su cultura.

El trabajo en las plantaciones en general se paga mal, genera una gran dependencia del empleador en todos los aspectos de la vida y regularmente es insalubre y peligroso. Se han denunciado las desigualdades existentes entre los diversos tipos de trabajo (trabajadores zafrales con respecto a trabajadores permanentes, hombres con respecto a mujeres). El uso de plaguicidas representa un verdadero riesgo para la salud de la mano de obra de las plantaciones (predominantemente femenina) en toda la región. El sector de las plantaciones es el sector económico de Indonesia que presenta mayores conflictos, en su gran mayoría resultado de problemas de tenencia de la tierra y de la escasa protección legal con la que cuentan las comunidades.

En resumen, las plantaciones de palma aceitera de Indonesia tienen costos sociales y ecológicos muy altos. Entre esos costos, que a menudo no son fáciles de expresar en términos monetarios, está la destrucción del bosque tropical, la pérdida de biodiversidad, las prácticas ilegales, los conflictos por los derechos sobre la tierra, violaciones de los derechos humanos, disputas laborales, tratamiento injusto de los pequeños propietarios de tierras, el colapso de las prácticas culturales indígenas y la exposición de economías locales vulnerables a las caprichosas fuerzas del mercado mundial. (Boletín del WRM, n° 85, agosto 2004).

- **Indonesia: invirtiendo para el desastre; la CFI y las plantaciones de palma aceitera**

Indonesia ocupa el tercer puesto en cuanto a la mayor superficie de bosque tropical en el mundo, y es uno de los centros de diversidad biológica más ricos. Es también el segundo productor mundial de aceite de palma; en 2004 tuvo una producción de más de 11 millones de toneladas de aceite de palma crudo. Los bosques de Indonesia desaparecen a un ritmo de 3,8 millones de hectáreas por año, y la tierra convertida a plantaciones de palma aceitera se ha duplicado durante la última década a casi 5 millones de hectáreas —una superficie equivalente a la de Costa Rica. La mayoría de las plantaciones de palma aceitera en Indonesia están establecidas en tierras que fueron, hasta hace muy poco, bosques tropicales húmedos primarios. Según un informe encomendado por el Banco Mundial, en Indonesia alrededor de 50 millones de personas viven en bosques que son tierras estatales y 20 millones más viven en aldeas próximas a los bosques, de los cuales cerca de 6 millones perciben gran parte de sus ingresos monetarios a partir de los bosques. No debería causar sorpresa, pues, que la expansión de las plantaciones en gran escala de palma aceitera haya traído consigo destrucción ambiental y conflictos sociales generalizados. Las instituciones financieras que las propiciaron, incluido el Grupo Banco Mundial, deben compartir la responsabilidad por esos impactos adversos.

El Grupo Banco Mundial ha ayudado directa e indirectamente al desarrollo de plantaciones en gran escala de palma aceitera en Indonesia. El Banco Mundial estuvo muy implicado en proyectos de “desarrollo” durante los treinta años del régimen de Suharto. Los programas de explotación forestal de fines de la década de 1980 y principios de la de 1990, apoyaron la política forestal oficial por la cual más de un tercio de los bosques del país fue entregado a compañías madereras comerciales, y otro tercio destinado a “conversión” para plantaciones. Como de costumbre, los mismos conglomerados dueños de las compañías que destruyeron los bosques por el madereo excesivo son dueños también de las compañías plantadoras que se benefician de la tala de los bosques. Durante el mismo período, el Banco Mundial ayudó a financiar el programa de trasmigración de Indonesia. Los transmigrantes auspiciados por el gobierno y otros colonos alentados por

la política de reasentamiento de Indonesia, fueron una mano de obra barata y de fácil acceso para el sistema de plantación núcleo (PIR, por su sigla en indonesio). Las plantaciones también se beneficiaron de proyectos de infraestructura financiados por el Banco Mundial. La Corporación Financiera Internacional (CFI), ofreció por lo menos un préstamo a una compañía indonesia durante la década de 1990 para promover plantaciones de palma aceitera y fábricas de aceite de palma crudo.

Cuando la economía indonesia colapsó en 1998, el FMI y el Banco Mundial impusieron como condicionamiento la aplicación de un “programa de rescate” financiero. En ese programa estaban incluidas medidas para promover el sector del aceite de palma, entre ellas reducciones de los impuestos a la exportación de aceite de palma crudo y el levantamiento de la prohibición a la inversión extranjera en empresas conjuntas de aceite de palma de Indonesia. El acuerdo FMI/Banco Mundial también ayudó a reestructurar el sector bancario del país. Como los conglomerados en bancarrota tenían intereses en la explotación forestal y en la banca, más de 100 compañías endeudadas vinculadas al sector forestal obtuvieron beneficios del orden de por lo menos 2.000 millones de dólares, cuando el Estado asumió algunas de sus deudas privadas. Una evaluación interna de las políticas y prácticas del Banco Mundial en materia forestal, que incluía a Indonesia, llegó a la conclusión terminante de que tanto la deforestación como la pobreza aumentaron durante la década de 1990.

Indonesia continúa extendiendo sus plantaciones. Una de las razones es la de satisfacer las demandas de los gobiernos locales, a los que en 2001 se les dio considerable poder sobre las decisiones en materia de utilización de la tierra y generación de ingreso, cuando se aprobó la autonomía regional. Ya se han destinado grandes superficies para la palma aceitera: 1 millón de hectáreas en Jambi; 1 millón de hectáreas en Kalimantan este; 3 millones de hectáreas en Kalimantan oeste—con objetivos generales de más de 9 millones de hectáreas. Los gobiernos locales y el gobierno central consideran ahora al sector plantador como el motor del desarrollo y un actor importante de generación de ingresos para la economía. Irónicamente, esto reemplaza al sector procesador de la madera—relegado a una industria decadente a medida que los bosques fuera de las áreas protegidas en

la parte occidental del archipiélago han sido talados a tal grado que han dejado de interesar desde el punto de vista comercial.

La rama del Grupo Banco Mundial encargada de los préstamos al sector privado, la Corporación Financiera Internacional, se ha vuelto crecientemente activa en Indonesia. La misión de la CFI es promover la inversión privada sustentable en países en desarrollo movilizándolo capital en mercados internacionales y brindando asesoramiento técnico para grupos comerciales y gobiernos. En el contexto indonesio, la CFI desea promover exportaciones –en especial de la agroindustria– y mejorar el clima para las inversiones. Sin embargo, la CFI no tiene una política en materia de palma aceitera como para definir las condiciones según las cuales las compañías plantadoras y sus garantes financieros puedan recibir su apoyo.

Como otras ramas del Grupo Banco Mundial, la CFI comparte el deber de ayudar a mitigar la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la gente, de conformidad con los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio. Se supone que debería entonces estar tratando de ayudar a las pequeñas y medianas empresas indonesas, a pequeños titulares independientes, para atraer financiamiento, de manera que puedan mejorar la productividad y el manejo de las plantaciones existentes. Pero en lugar de eso, la CFI ofrece apoyo a algunos de los mayores actores del sector de palma aceitera de Indonesia, entre ellos inversionistas y compañías extranjeras con un historial ambiental y social nefasto, que ahora se están expandiendo a nuevos sectores.

Según las Directrices Ambientales y Sociales de la CFI, los proyectos se clasifican de tres formas:

- Categoría A: Grandes impactos sociales y económicos.
- Categoría B: “Puede provocar una cantidad limitada de impactos ambientales y sociales específicos que pueden ser evitados o mitigados adhiriendo a las normas de desempeño, directrices o criterios de diseño reconocidos generalmente”.
- Categoría C: Impactos mínimos o ningún impacto ambiental adverso.

No queda claro qué sanciones impondrá la CFI –si es que impone alguna– en caso de que se ignoren las Directrices Ambientales y Sociales.

El capital y los préstamos destinados directamente a las plantaciones indonesas de palma aceitera generalmente están calificados dentro de la Categoría B, de manera que es necesario realizar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). En la práctica esto ofrece poca protección. Las EIA en Indonesia a menudo son ejercicios mecánicos y no es poco común que el estudio sea realizado varios años después que se haya establecido una plantación. Además, el cumplimiento de las leyes y las reglamentaciones locales del país receptor implica que es posible ignorar impunemente los derechos de los pueblos indígenas y que haya una aplicación débil de las normas ambientales y laborales.

La situación es aún peor para el financiamiento de la CFI relacionado con el comercio, que es clasificado como Categoría C. En este caso existe la presunción de que no habrá impactos ambientales adversos, si bien ni siquiera se consideran los impactos sociales y mucho menos se verifican en el terreno. Esto significa que la CFI no puede obtener la información necesaria para asegurar el cumplimiento de sus propias normas.

Al respecto, un caso ilustrativo es el apoyo financiero previo a la exportación brindado por la CFI a la compañía Filmar Trading. El Grupo Filmar es el mayor procesador y exportador de aceite crudo de palma de Indonesia. Posee cuatro refinerías en Indonesia y otra en Malasia, con una producción total de 3,3 millones de toneladas de aceite crudo de palma por año. Tiene inversiones en, como mínimo, 85.000 hectáreas de plantaciones de palma aceitera, pero compra aproximadamente el 90% de sus suministros a productores indonesios que pertenecen a otros conglomerados.

La CFI describe que este proyecto “permite a Wilmar cumplir con los requisitos de su capital circulante para comprar aceite crudo de palma de plantaciones en Indonesia y procesarlas en aceite refinado para la exportación”. En otras palabras, la CFI ofrece una garantía de 33,3 millones de dólares, renovable anualmente por tres años, de

manera que Wilmar pueda pedir dinero prestado fácilmente a los bancos comerciales para comprar suministros de aceite de palma. Los préstamos son reembolsados después de haber enviado el aceite crudo de palma a los compradores en el exterior, tales como compañías de detergentes o procesadoras de alimentos. Unilever es uno de los clientes de Wilmar.

No queda claro por qué se considera que este proyecto merece el apoyo de la CFI. Wilmar es el segundo comerciante de aceites comestibles del mundo. En 2002, Wilmar Holdings tenía un giro anual de 3.530 millones de dólares y obtuvo una ganancia neta de 52,2 millones de dólares. La CFI justifica su acción diciendo que a los bancos comerciales los pone nerviosos invertir en Indonesia. Sin embargo Wilmar obtuvo préstamos de varias fuentes internacionales, por sí solo y a través de los servicios de Rabobank, el banco internacional con sede en Holanda. Rabobank puede incluso ser un inversionista de Wilmar.

No hay dudas que la garantía del crédito de la CFI facilitará las exportaciones del aceite de palma de Indonesia y beneficiará al grupo Wilmar y sus filiales indonesias. Lo que resulta menos claro es si pueden justificarse los argumentos de la CFI acerca de los beneficios positivos para los agricultores locales. En efecto, la CFI no tiene formas de medir el impacto en los aparceros a pequeña escala o en las economías locales, ya que el negocio de Wilmar está calificado como Categoría C.

La CFI nunca dio información básica al público sobre las filiales de Wilmar –incluidas las plantaciones, los molinos de aceite crudo de palma y otras inversiones en Indonesia. Si bien aparentemente Wilmar mantiene esa lista en su sitio web, la misma siempre permanece inaccesible. Por lo tanto, es muy difícil evaluar la extensión total de la responsabilidad de la CFI. Ni la CFI ni Wilmar asistieron a las reuniones de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sustentable. Aun así, ONG holandesas e indonesas que intentan seguir los pasos de las conexiones de Wilmar, plantearon su preocupación sobre una serie de cuestiones en materia ambiental, social y de derechos humanos.

Entre esas cuestiones se incluyen las siguientes:

- La filial de Wilmar, PT Jatim Perkasa Jaya, en la provincia de Riau, posee una plantación en un área de bosques pantanosos de turba. Ha habido reiterados incendios forestales que quemaron esa parte del distrito de Rokan Hilar. Las autoridades locales y ONG ambientales están convencidas de que la compañía está implicada en este desmonte ilegal, pero eso todavía no ha sido demostrado ante los tribunales.
- El desarrollo de las plantaciones de palma aceitera en el oeste de Sumatra ha sido el foco de violentos conflictos desde abril de 2000, cuando la policía armada intentó intimidar por la fuerza a la población local para que abandonara sus tierras y las dejara a la filial de Wilmar, PT Permata Hijau Pasaman. Una ONG local supervisó las instancias de intimidación, *razzias*, secuestros, arrestos y tortura por parte de las fuerzas de seguridad.
- Hay pruebas de que empresas abastecedoras de Wilmar, pertenecientes a los grupos Salim, London Sumatra, Sinar Mas y Surya Dubai, también han participado en la destrucción de bosques, desmonte ilegal por quema, apropiación de tierras y violaciones de los derechos humanos.
- Nuevas investigaciones han revelado que algunas cooperativas dirigidas por compañías comerciales dejaron a los pequeños titulares esperando la asignación de predios. También identificaron casos graves de contaminación de agua por desechos de palma y por lo menos un molino de aceite crudo de palma que ha estado funcionando durante 4 años sin una EIA.

La reacción inmediata de la CFI al estudio de las ONG fue negar que estuviera apoyando la expansión de las plantaciones de palma aceitera o que hubiera problemas sociales y ambientales asociados con las filiales de Wilmar. Rechazó los informes de las disputas en torno a la tierra diciendo que Wilmar no era responsable de la adquisición inicial de tierras para las plantaciones. Wilmar también criticó el documento por considerarlo “incompleto e inexacto” y dijo a Rabobank que PT Jatim fue vendida a fines de 2003. Más tarde Wilmar aceptó contratar un consultor para realizar un estudio independiente de su desempeño social y ambiental. Antes de que fuera llevado a

cabo, el Directorio de la CFI anunció en mayo de 2004 que se había aprobado la garantía de 33,3 millones de dólares para Wilmar.

Wilmar Trading es tan solo uno de los numerosos negocios en Indonesia que plantean interrogantes acerca del compromiso de la CFI para promover la sustentabilidad ambiental, la justicia social y la erradicación de la pobreza. Desde 2002, la CFI ha invertido aproximadamente 3,5 millones de dólares y ofrecido compromisos contingentes de participación en el capital social de hasta 16,5 millones de dólares para PT Astra Internacional para la reestructura de la deuda con el fin de apoyar las operaciones actuales y futuras de la compañía. Astra es uno de los mayores conglomerados de Indonesia; además de las plantaciones de palma aceitera, abarca rubros como automotores y negocios bancarios e inmobiliarios. La CFI también hizo un préstamo de 40 millones de dólares a Verdaine —una compañía con sede en Islas Mauricio, creada como vehículo para adquirir y manejar las plantaciones de palma aceitera en Indonesia. Actualmente controla una plantación de 9.100 hectáreas en el distrito Tapanuli Selatan, de Sumatra del Norte, y una concesión de 5.000 hectáreas en la isla de Belitung, al este de la costa de Sumatra. Uno de sus fundadores es Austindo Nusantara Jaya, otro conglomerado indonesio con intereses en la agroindustria, la generación de energía eléctrica, la minería y los servicios financieros. La CFI ya compró un 7% de acciones de una plantación de palma aceitera en Bengkulu, de la empresa PT Agro Muko, filial de Austindo. La CFI también ayuda al Grupo indonesio Wings a incursionar en el lucrativo mercado de aceite culinario, además de los negocios que ya tiene entre manos en el rubro de productos de tocador, materiales de construcción, cerámica, cemento, amianto, banca y propiedades. Ofreció un préstamo de 10 millones de dólares y ayudó a organizar el préstamo de un consorcio de 11 millones de dólares para tres fincas de palma aceitera en Kalimantan sur, que opera con el nombre de PT Gawi.

La CFI aún sostiene que su participación puede tener un impacto, tanto en términos de impactos económicos generales positivos como en cuanto a mejoras en el desempeño ambiental y social. “La renovada participación de la CFI en la financiación de proyectos en Indonesia envía un mensaje muy positivo a las compañías con un compromiso de buena gestión empresarial, desarrollo sustentable y la creación de

oportunidades de empleo para el pueblo indonesio”, dijo uno de los directores de Verdaine. Sin embargo, la cuestión importante aquí es que la CFI niega completamente cualquier responsabilidad de sus inversiones en otros niveles de la cadena productiva. Pero las comunidades locales cuentan una historia muy distinta a la historia color de rosa que pintan los representantes de la CFI. (Por: Liz Chidley, Boletín del WRM, n° 93, abril 2005).

- **Indonesia: el FMI y la deforestación**

Debido a la prolongada crisis económica y la devaluación de la rupia indonesia a comienzos de 1997, el país se vio forzado a buscar la asistencia del FMI. A fines de octubre de ese año se acordó el primer paquete de asistencia. Los US\$ 43 mil millones del paquete del rescate financiero incluían algunos ajustes o reformas estructurales estipuladas en la Carta de Intención, a los que se obligaba el gobierno de Indonesia. El entonces Presidente Suharto firmó la primera carta de intención con el FMI en octubre de 1997, que planteaba fundamentalmente reformas en el sector financiero, pero no incluía ninguna referencia al sector de bosques ni al medio ambiente.

A comienzos de enero de 1998, el gobierno indonesio no había logrado implementar los compromisos de la primera carta de intención y el país se hundía en una crisis económica aún más aguda. A pesar de no haber cumplido con los compromisos de la primera carta, se negoció una segunda carta de intención que se firmó el 15 de enero de 1998. El FMI anunció que esta segunda carta de intención aceleraría y ampliaría los compromisos de reforma ya asumidos.

El primer conjunto importante de reformas que afectó los bosques fue parte de las condiciones de la carta de intención firmada por el gobierno indonesio con el FMI en enero de 1998 –donde se establecían las condiciones que debía aceptar Indonesia para asegurarse US\$1 mil millones como parte de un paquete de rescate de US\$43 mil millones. Un agregado impactante, ausente en la primera carta firmada por Indonesia, fueron las disposiciones relativas a los bosques (6 puntos) y al medio ambiente (4 puntos). Estos puntos incluyen importantes compromisos de “reducir los impuestos a la exportación de rollizos (madera sin procesar), madera aserrada y caña, e imponer

impuestos adecuados a la renta de los recursos” (punto 37) y “eliminar las restricciones a la inversión extranjera en las plantaciones de palma aceitera” (punto 39).

Irónicamente, mientras las cartas de intención exigían mayor transparencia y consulta con la sociedad civil, el proceso de redacción de los acuerdos mismos fue en realidad todo menos transparente. Los contenidos de las cartas de intención todavía no se hacen públicos antes de que éstas se firmen. No existe ninguna participación importante de las ONG, ni en particular de las personas más afectadas por las condiciones que establecen las cartas.

A través de los paquetes de las cartas de intención del FMI, el Banco Mundial ha llevado al gobierno indonesio a implementar las recetas del FMI de sus préstamos de ajuste estructural. Las cartas de intención se transformaron en la “santa biblia” que guía la economía del país y las políticas de manejo de recursos.

En 2002, WALHI/AT-Indonesia encargó un estudio independiente para evaluar el impacto de la implementación de las Cartas de intención sobre los bosques y el medio ambiente. El estudio fue realizado por un equipo liderado por un eminente experto en economía de bosques del Instituto de Agricultura de Bogor. Según las conclusiones de estudio, el presupuesto estatal de gastos públicos en el manejo ambiental disminuyó y la liberalización del comercio y la economía determinó el aumento de la explotación de los recursos naturales. Algunas conclusiones del estudio se resumen más adelante.

La liberalización de las exportaciones de rollizos (punto 37, Carta de intención de 1998) estableció incentivos financieros para la exportación de madera. Aunque la reducción de los impuestos a la exportación de madera puede haber mejorado el precio de la madera subvaluada en Indonesia, lo que podría implicar la mejora de la eficiencia en la extracción de la materia prima y servir de incentivo a los esfuerzos de conservación, esta política ha sido, por el contrario, catastrófica.

A la vez que se alentó la exportación de rollizos aumentó el déficit en la oferta de madera para las industrias nacionales procesadoras de madera. Irónicamente, a pesar de la escasez de madera en el merca-

do local, la industria basada en la madera incluso aumentó su producción, en particular, de celulosa y papel. La madera utilizada por la industria provino entonces de fuentes ilegales no registradas. Más aún, en la medida que la oferta de madera de las concesiones madereras disminuyó, aumentó la demanda de madera proveniente de la conversión de bosques.

Básicamente la misma tendencia mostró la política de liberalización de inversiones en el sector de plantaciones de palma aceitera (punto 39). Esta política había sido controvertida desde sus inicios, ya que contravenía absolutamente el compromiso asumido con el Banco y el FMI de reducir la conversión de bosque en Indonesia. La eliminación de las restricciones a las inversiones extranjeras en aceite de palma significó un importante aliciente para la expansión de las plantaciones de palma aceitera a expensas de los bosques. Conjuntamente con la política previa del gobierno indonesio, esta condición abrió las puertas a una mayor conversión de bosques. De acuerdo al estudio, el 80% de plantaciones de palma aceitera se estableció a partir de la conversión de bosques naturales.

Aunque las mejoras en algunos aspectos de gobernanza y transparencia (por ejemplo, la solicitud de reformas en la reglamentación de las concesiones, la introducción de normas de desempeño y el desmantelamiento de los cárteles) podrían ser evidentemente beneficiosas para los bosques y las arcas del Estado, otros objetivos planteados, como la reducción de impuestos a la exportación de madera, resultaron claramente negativos, contrapesando estos aspectos positivos. El compromiso de terminar con la conversión de los bosques, resultó totalmente inconsistente con la eliminación de las restricciones a la exportación de aceite de palma y a la inversión extranjera en el sector (una medida cuyo resultado probable era acelerar la conversión de bosques en plantaciones). Entre las medidas no se incluyó ninguna referida a las causas estructurales subyacentes de la deforestación y degradación de los bosques.

Desde el colapso económico de 1997, el Banco Mundial y el FMI han jugado un rol directo en la toma de decisiones que afectan a los bosques y los pueblos de los bosques, mientras presionan a Indonesia a mantenerse al día en el repago de la deuda. Estas instituciones

deben aceptar su responsabilidad por la destrucción de los bosques y la marginalización de las comunidades que conlleva, y comenzar a priorizar las necesidades de los pobres por sobre los intereses de las finanzas internacionales. (Por: Longgena Ginting, Boletín del WRM, n° 95, junio 2005).

- **Indonesia: el insalubre olor del dinero en los incendios forestales**

Una vez más, los bosques de Indonesia están ardiendo. El humo de los incendios en Sumatra ha causado las peores condiciones de niebla en Malasia desde 1997. Una niebla de humo insalubre, mezcla de polvo, ceniza, dióxido de azufre y dióxido de carbono, ha cubierto Kuala Lumpur, la principal ciudad malaya, y otras 32 poblaciones. Las escuelas fueron cerradas y los hospitales se han visto desbordados de pacientes quejándose de malestares respiratorios. Según datos provenientes del Servicio de Salud indonesio de Riau, unas 2.000 personas han sufrido infecciones de las vías respiratorias superiores y problemas oculares. El 11 de agosto, el estado de emergencia fue declarado en Malasia, cuando el índice de contaminación del aire alcanzó niveles extremadamente peligrosos en la costa oeste. El 12 de agosto la lluvia y la brisa dispersaron el *smog*, llevándolo hacia el norte.

Desde los grandes incendios de 1982-83 en Indonesia, que fueron registrados como los mayores incendios forestales del siglo XX, el fuego ha sido un evento recurrente en el país, causando un daño masivo no sólo dentro de sus fronteras sino también en los países vecinos, como Malasia y Singapur.

En 1982-83, 1997-98 y 2002, millones de hectáreas de bosques de montaña y de llanura, de turbera y de pantano ardieron mientras los animales y la población en masa huían del fuego. La niebla, que cubrió un área casi tan grande como Europa, interrumpió la aviación y la navegación por meses y causó serios problemas de salud. Incluso ciudades muy distantes fueron sofocadas por el humo, a tal punto que hubo que cerrar escuelas y aeropuertos; el tránsito se enlenteció en extremo, ya que nada se veía más allá de una corta distancia. El olor acre de la vegetación en llamas llenaba el aire.

Si bien el fenómeno del Niño provocó en 1997 una gran sequía, los incendios se intensificaron además porque muchos bosques de Indonesia han sido gravemente dañados por la explotación forestal, tanto legal como ilegal. La sobreexplotación abrió la cubierta del bosque y, a falta de lluvia, éste se convirtió en yesca.

Por otro lado, la política de conversión generalizada del bosque está en la raíz del problema de los incendios forestales. El gobierno de Indonesia planea convertir millones de hectáreas de bosques en plantaciones agrícolas, de palma aceitera y de árboles maderables. Cada año, las empresas de plantación queman en sus concesiones de 1 a 2 mil millones de toneladas métricas de biomasa, como la forma más barata de limpiar sus tierras para la plantación de palma aceitera y árboles para madera. En estas prácticas se origina un gran porcentaje de los incendios forestales. En 1997, PT Torus Ganda, una empresa plantadora que operaba en Riau, Sumatra, fue la primera de una larga lista de 176 compañías acusadas públicamente de provocar incendios para despejar la tierra.

Además de su fuerte impacto sobre las economías locales, los incendios forestales son grandes generadores de gases tóxicos y partículas que contaminan el aire al esparcirse en la atmósfera. Son asimismo una fuente de gases que provocan el efecto invernadero y de gases reactivos, los cuales inciden directamente en el recalentamiento global y en las tendencias climáticas inmediatas.

En 1997-98, los incendios forestales en el Sudeste Asiático afectaron a unos 200 millones de personas en Brunei Darussalam, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. En Indonesia, 41.000 personas tuvieron diarrea y 24.000 sufrieron infecciones respiratorias; en Papúa Occidental, 200.000 personas se vieron afectadas por la escasez de alimentos, mientras que 413 personas murieron de inanición y de cólera. Los medios de subsistencia de los pueblos del bosque quedaron destruidos y, como consecuencia, algunas zonas sufrieron escasez de alimentos.

Las advertencias de la Organización Mundial para la Salud sobre los impactos del humo sobre la salud mencionan los riesgos de cáncer a corto y largo plazo. Los incendios aumentan el peligro de con-

traer infecciones respiratorias agudas, una de las principales causas de mortandad entre los niños pequeños. De la comparación de los datos médicos obtenidos durante los incendios forestales de 1997/1998 en el sudeste Asiático con los datos correspondientes al período 1995/1996, se desprenden las siguientes conclusiones sobre los efectos del humo en la salud humana: el número de casos de neumonía aumentó de 5 a 25 veces en el sudeste de Kalimantan (Borneo), y de 1,5 a 5 veces en el sur de Sumatra. En Malasia, el número de consultas externas por enfermedades respiratorias se multiplicó por 2 y por 3. En setiembre de 1997, en Jambi (Sumatra), el número de casos de infección del aparato respiratorio superior fue un 50% mayor que en el mes anterior. En los incendios forestales del año 2002, la salud y las vidas de unos 4 millones de indonesios fueron afectadas en Kalimantan central. De aquí a treinta años, esas personas sufrirán los efectos de la inhalación de humo, bajo la forma de enfermedades respiratorias serias, incluido el cáncer de pulmón.

Algunos culpan de los incendios actuales tanto a los agricultores locales como a las grandes empresas plantadoras. Por miles de años, los pueblos indígenas Dayak de Kalimantan han practicado tradicionalmente el cultivo itinerante (la así llamada agricultura de "tala y quema") en sintonía con su medio ambiente natural. Ellos tienen experiencia y estrictas reglas tradicionales sobre la utilización del fuego para la limpieza de pequeñas parcelas de tierra agrícola. Aquellas prácticas tradicionales y de bajo impacto no pueden ser comparadas con el desmonte a gran escala realizado por las empresas de plantación por medio de incendios igualmente vastos, que destruyen inmensas áreas boscosas.

De acuerdo a la experiencia de incendios anteriores, la gente que está ahora siendo afectada por el incendio deberá enfrentarse en el futuro a serios quebrantos de salud. En línea también con experiencias pasadas, empresas de plantación de palma aceitera, mayormente de origen malayo, han sido identificadas por el gobierno indonesio como responsables de los incendios actuales. Como de costumbre, las ganancias de las grandes compañías de plantación están en el origen de esta tragedia. Sus incendios tienen un insalubre olor a dineo. (Por: Raquel Núñez, Boletín del WRM, nº 97, agosto 2005).

- **Indonesia: pedido de cancelación del plan para establecer tres millones de hectáreas de plantaciones de palma aceitera**

El 12 de abril de 2006 se publicó el informe “The Kalimantan Border Oil Palm Mega-project”, que revela los planes del gobierno de Indonesia de establecer hasta tres millones de hectáreas de plantaciones de palma aceitera en la isla de Borneo. Dos millones de hectáreas se situarían a lo largo de la frontera entre Malasia y Kalimantan y un millón de hectáreas en otros lugares, en zonas que aún permanecen cubiertas por bosques y habitadas por comunidades indígenas. Las plantaciones apuntarían a abastecer la demanda internacional de aceite de palma barato y con ello la demanda nacional y mundial de biocombustibles.

En Indonesia ya se había lanzado un plan anterior para establecer la mayor plantación de palma aceitera del mundo, de dos millones de hectáreas, en una franja de entre cinco y diez kilómetros a lo largo de la frontera entre Kalimantan y Malasia. El megaproyecto de palma aceitera, que se presentó con la promesa de “llevar prosperidad, seguridad y protección ambiental a la zona fronteriza de Kalimantan”, resultó amargo cuando empezó a circular un plan comercial elaborado por la Corporación de Plantaciones del Estado Indonesio (PTPN). Este documento incluía un mapa que demostraba, sin dejar lugar a dudas, que el proyecto de palma aceitera de 1,8 millones de hectáreas acabaría con los bosques primarios de tres parques nacionales, atravesaría pendientes escarpadas y montañas completamente inadecuadas para el cultivo de palma aceitera y aniquilaría los derechos consuetudinarios a la tierra de las comunidades indígenas Dayak en las zonas fronterizas.

Contra estos planes surgieron varias campañas y presiones por parte de la sociedad civil indonesa, así como protestas internacionales, que obligaron al gobierno de Indonesia a revisar su postura y hacer cambios reconociendo que había consideraciones que tener en cuenta relativas a la conservación. Sin embargo, el nuevo informe revela que los planes iniciales todavía están sobre la mesa y que la expansión de la palma aceitera continúa. Las empresas de la palma aceitera ya se han trasladado a varios puntos del área limítrofe y los

planes de continuar la expansión hacia la zona de la frontera de Kalimantan gozan de buena salud. Los encargados de planificación de la Agencia Nacional de Planificación para el Desarrollo (Bappenas) encontraron una solución al problema de que los nuevos planes de expansión no caben en la zona fronteriza inmediata, donde la superficie total adecuada para el cultivo de palma aceitera es despreciable: simplemente cambiaron la definición de “zona fronteriza”, aumentando su ancho de entre cinco y diez kilómetros a 100 kilómetros.

La zona que se considera apropiada para la palma aceitera incluye bosques utilizados por miles de personas que dependen de ellos para su sustento y donde habitan comunidades indígenas. En la nueva zona fronteriza ampliada, una reglamentación especial (el Decreto Presidencial N° 36/2005) permitiría al gobierno quitar las tierras a aquellas comunidades que no deseen plantaciones de palma aceitera, en nombre del “interés público”.

Tanto en la zona fronteriza inmediata como en la ampliada, son pocas las comunidades indígenas que conocen los planes de desarrollo del gobierno. Las declaraciones de las comunidades y aldeas locales y sus dirigentes indican que quienes están familiarizados con los planes se oponen vigorosa y unánimemente al desarrollo de la palma aceitera en sus zonas. Un problema especial que afecta a los derechos consuetudinarios a la tierra es la reglamentación presidencial (Pepres N° 36/2005) que permite al gobierno forzar la entrega de tierras en vista del “interés público”. Dado que el proyecto fronterizo se justifica en función de razones de interés público (seguridad, prosperidad y protección ambiental) y en él participan las Fuerzas Armadas de Indonesia, el gobierno puede optar por servirse de esta reglamentación para imponer las plantaciones de palma aceitera en la zona fronteriza. Los planes de los ministerios Forestal y de Agricultura para promover otros cultivos comerciales aparte de la palma aceitera (como caucho, café, té, cacao, pimienta, etc.) en la zona fronteriza podrían rendir beneficios, pero se enfrentarán a la resistencia de las comunidades locales en caso de que el gobierno pretenda traer grandes inversores externos para establecer dichos cultivos en tierras sobre las que aquéllas tengan derechos consuetudinarios.

Amigos de la Tierra Indonesia (WALHI) y la organización local Sawit Watch (“Observatorio de la palma aceitera”) exhortan al gobierno de

Indonesia a cancelar oficialmente el proyecto de mega plantaciones fronterizas. (Boletín del WRM, n° 107, junio 2006).

- Indonesia: las plantaciones de palma aceitera vienen con represión...

Los cultivos intensivos de palma aceitera y la extracción de los aceites resultantes para exportación siempre han estado vinculados a la represión. El cultivo en plantaciones fue originalmente establecido por los regímenes coloniales. Una rápida expansión de las plantaciones en Asia, después de la Segunda Guerra Mundial, fue estimulada en conexión con la limpieza de las selvas, utilizada ésta como un arma para combatir a los rebeldes malayos.

El crecimiento de las plantaciones no ha acompañado la ampliación de los derechos para los trabajadores/as de las plantaciones de palma. El trabajo sigue siendo duro y peligroso. Las técnicas de la producción apenas han cambiado en el curso de los últimos 150 años. El gancho de madera antes utilizado para cosechar la fruta ha sido sustituido en algunas plantaciones por un gancho de una aleación de metal aún más afilado. Y actualmente se aplican copiosas cantidades de herbicidas tóxicos por parte de los trabajadores/as sin su debida protección, quienes fumigan con latas que gotean colocadas en sus espaldas. Son comunes los accidentes y la expectativa de vida es corta. Las organizaciones sindicales son, a menudo, reprimidas brutalmente.

Con el fin de desmantelar un sindicato recientemente creado, Mu-sim Mas –la mayor refinería de aceite de palma del mundo, con sede en Sumatra, Indonesia– el año pasado despidió más de 1.000 miembros sindicales de un plumazo en represalia por una huelga. La compañía expulsó a los trabajadores/as de sus hogares y a sus niños de sus escuelas, como también maniobró el arresto y enjuiciamiento de 6 dirigentes sindicales. Actualmente estos 6 hombres jóvenes están cumpliendo condenas desde 14 meses a 2 años por el “crimen” de tratar de ejercer sus derechos colectivos como trabajadores.

La UITA (Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación ... y Afines) ha venido consolidando el apoyo sindical mundial para un

considerable grupo de estos trabajadores/as, quienes habían resistido los esfuerzos de la compañía de hacerlos renunciar por escrito a sus derechos y a su afiliación sindical mediante la aceptación de indemnizaciones por sus despidos. Esta fase de la lucha llegó a su fin cuando el sindicato nos informó que unos 200 trabajadores/as, quienes mantenían su resistencia, aceptaron el día 7 de junio la indemnización financiera por la pérdida de sus puestos de trabajo. A cambio de ello, fueron presionados a deponer todos los reclamos jurídicos contra la compañía, o sea que los despidos colectivos no pueden ser impugnados mediante el proceso de apelación. La indemnización asciende a unos 123 dólares por trabajador/a —el equivalente al salario de 6 semanas. Los seis prisioneros fueron también obligados a renunciar a su derecho a apelar contra sus absurdas condenas criminales, las cuales han sido denunciadas por Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos por haber sido incriminada la actividad sindical. El hambre es un arma poderosa en las manos de una gran compañía despiadada.

La compañía elogió al “acuerdo mutuo” anunciando que “este asunto fue resuelto de acuerdo a las leyes laborales de Indonesia y conforme a todas las reglamentaciones del país. Estamos abocados a comprometer proactivamente a nuestros accionistas, tanto en Indonesia como en el extranjero, para promover una industria sustentable del aceite de palma”.

El gobierno, acusado en la OIT de las Naciones Unidas debido a violaciones sucesivas de los Convenios internacionales sobre derechos sindicales, encomió el acuerdo, el cual “ha de contribuir hacia relaciones laborales más positivas en la industria del aceite de palma”.

Aquí podemos observar la situación de Indonesia en pocas palabras: fueron destituidos mil trabajadores/as y expulsados de sus hogares, se desbarató un sindicato y 6 dirigentes sindicales están presos, pero el acatamiento de la legislación nacional fue alcanzado pagando 123 dólares y extrayendo de los prisioneros un “acuerdo de paz”, en el cual ellos renuncian a sus derechos.

Las afiliadas de la UITA en todo el mundo respondieron a nuestros llamados con mensajes a la compañía y al gobierno y con un genero-

so apoyo financiero (que actualmente asistirá a las familias de los militantes sindicales presos). El hecho que nuestra campaña estaba comenzando a ganar terreno queda demostrado por la nueva voluntad de la compañía de reunirse con una organización a la cual anteriormente había rehusado reconocer y trató de destruir. En un número de compañías clave, los sindicatos vinculados a la elaboración de alimentos instaron a sus gerencias empresariales a examinar sus abastecimientos de aceite de palma y, en particular, sus relaciones con Musim Mas. En un caso, la intervención de la UITA logró que un minorista transnacional suspendiera temporalmente su utilización de Musim Mas como un elaborador de productos de su propia marca. En Holanda, la FNV exhortó al gobierno a cesar su apoyo financiero a la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sustentable (RSPO, por su sigla en inglés), el mecanismo de relaciones públicas “socialmente responsable” de la industria, integrado por “múltiples partes interesadas”, comprendiendo a Musim Mas como un miembro del Directorio Ejecutivo, junto al Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por su sigla en inglés) y Oxfam. La investigación pública de las condiciones sociales subyacentes en la producción de aceite de palma continúa y no será fácilmente anulada.

La campaña estaba dando buenos resultados y no habrán de olvidarse las lecciones aprendidas, puesto que el aceite de palma sigue siendo un sector en auge fundado sobre una explotación atroz. Musim Mas es difícilmente la excepción entre los productores de aceite de palma en su afán de aplastar los derechos para lograr ganancias. El uso del aceite de palma como un biocombustible significa que su precio actualmente está vinculado al costo en alza de los hidrocarburos, estimulando aún una mayor avidez. Se le impulsa como una alternativa al banano en América Latina y se le promueve como una alternativa saludable (lo cual no es) a los aceites poli saturados en los alimentos elaborados. Las zonas de cultivo están creciendo impetuosamente, representando una amenaza para el medio ambiente y para los trabajadores/as.

La UITA ya no mantiene más un conflicto laboral con Musim Mas. Sin embargo, continúa existiendo un problema aún mayor con la compañía y con la ilegitimidad y la barbarie del sector en su conjunto. El Banco Mundial, mediante su entidad de financiamiento del sector pri-

vado, la Corporación Financiera Internacional (CFI), está incrementando su apoyo para expandir los cultivos. La RSPO, a través de su relación privilegiada con el Banco Mundial, le brinda una cobertura “sustentable” para financiar la clase de destrucción social que Musim Mas asestó a quienes generan sus dividendos.

Las organizaciones sindicales vinculadas a la elaboración de alimentos deben continuar cuestionando a sus compañías acerca de las fuentes de aceite de palma y otros insumos derivados de prácticas indefendibles. Los partidarios de la justicia para los trabajadores/as del aceite de palma deben examinar más estrictamente cómo las ONG arriesgan —aun con buena fe— servir de pantalla a compañías como Musim Mas. Es necesario que WWF y Oxfam, a la vez que ejercen sus roles en el Directorio Ejecutivo de la RSPO, analicen minuciosamente sus propias posiciones en relación con los derechos de los trabajadores/as del aceite de palma. Las organizaciones sindicales holandesas están en lo cierto: el apoyo del gobierno a la RSPO y a las actividades de las ONG en materia del aceite de palma, que nos alejan de las soluciones requeridas con urgencia, es un escándalo que debe ser suspendido. Asimismo, la RSPO debe ser impugnada para que explique la participación de Syngenta en la Mesa Redonda. Syngenta fabrica el Paraquat, el herbicida más tóxico del planeta. El Paraquat es responsable por la muerte de decenas de miles de trabajadores/as rurales todos los años y se utiliza liberalmente en las plantaciones de aceite de palma. El sindicato de Musim Mas trató de negociar una aplicación más segura de los compuestos químicos tóxicos y fue aplastado. La compañía, cuyo producto mata a los trabajadores/as del aceite de palma, actualmente ha solicitado ser miembro de la RSPO con plenos derechos de voto.

Las relaciones públicas no redundarán en la sustentabilidad de una industria fundada sobre la supresión de los derechos humanos. La única alternativa es la organización sindical e instrumentos obligatorios y exigibles para garantizar el respeto de los derechos. La brutalidad y el rechazo de los derechos apuntalan la cadena del aceite de palma. Es evidente por sí misma la causa en favor de sindicalizar a los trabajadores/as de este sector. La UITA está comprometida en asegurar dicha organización. (Boletín del WRM, n° 109, agosto 2006).

- **Indonesia: plantaciones de palma aceitera invaden las tierras tradicionales de las comunidades**

El ambiente de Kalimantan occidental ha cambiado radicalmente en los últimos 25 años. Gran parte del bosque que servía de sustento a las comunidades fue talado por las empresas adjudicatarias de esas tierras para instalar allí plantaciones de palma aceitera. Incluso los bosques que tradicionalmente se mantenían en reserva para las generaciones futuras (hutan cadangan) son víctimas de la “conversión forestal”, pues el gobierno considera que la tierra que se deja en barbecho, como recomiendan los sistemas tradicionales de cultivo, está “descuidada” o “en estado crítico”.

Los indígenas perdieron la base de su sustento y ya no tienen madera o pescado a su disposición ni pueden seguir cultivando su propio arroz, verduras u otros cultivos; ahora tienen que comprar alimentos. De este modo la introducción de las plantaciones de palma aceitera ha empobrecido a las comunidades.

Las plantaciones confunden también los límites naturales entre las unidades consuetudinarias (kampong), lo que lleva a que existan más conflictos entre las comunidades. En virtud del sistema “plasma”, como se llama comúnmente a la zona cultivada por pequeños propietarios que provee a la planta procesadora “núcleo”, puede ocurrir que se otorgue a las personas parcelas de palma aceitera en tierras consuetudinarias (adat) pertenecientes a otra comunidad o incluso en otro subdistrito. De modo que las personas ya no controlan sus tierras consuetudinarias, lo que debilita al sistema adat en su totalidad.

Cuando se incorporan tierras adat a una plantación de palma aceitera como parte del cuerpo principal de una finca, es muy probable que la familia termine convirtiéndose en esclava asalariada en sus propias tierras tradicionales.

La autonomía regional ha empeorado las cosas, según denuncia Pak Cion Alexander, campesino de Sanggau, Kalimantan occidental, que además es diplomado en Derecho y activista comunitario de la organización Gerakan Rakyat Pemberdayaan Kampung (GRPK). Las autoridades locales desean atraer plantaciones de palma aceitera a

sus regiones, alegando que aumentarán los ingresos locales, generarán empleos, se construirán carreteras y mejorarán las condiciones económicas de las comunidades. Solamente en Sanggau hay casi 40 empresas de plantaciones.

Como dice Pak Cion Alexander: “Es cierto que la asamblea de distrito de Sanggau aprobó un reglamento local relativo al gobierno de las aldeas (Perda N° 4/2002) que nos brinda la oportunidad de volver a nuestro sistema tradicional, que se funda en los kampong. Por generaciones los adat han sido la base de comunidades independientes muy democráticas que tenían el control de los recursos naturales en sus tierras consuetudinarias. La comunidad entera, no una élite, tomaba las decisiones. El sistema normalizado de gobierno de las aldeas implantado por el régimen de Suharto en 1979 cambió todo eso. Pero queríamos que se reconociera nuestro sistema de adat, así que en cuanto se introdujo la autonomía regional hicimos presión a favor de la nueva reglamentación”.

No obstante, el problema es que “las empresas usan mal los sistemas tradicionales de gestión. El gobierno [nacional] es cómplice, pues crea sus propias organizaciones adat oficiales y designa a los dirigentes. Es a estas personas que se acercan las empresas cuando buscan una firma que avale el desposeimiento de los derechos comunitarios”.

“Es de vital importancia que se reconozcan los derechos indígenas en la legislación nacional y se fortalezcan mediante reglamentaciones locales. Parte de ello es el derecho al consentimiento previo, libre e informado, para que podamos elegir entre aceptar o rechazar una plantación en nuestras tierras. También necesitamos relevar la extensión de nuestras tierras consuetudinarias, para que las empresas no puedan quitárnoslas tan fácilmente. Las plantaciones de Parindu, Kembayan, Tayan Hulu, Tayan Holir y Kapuas deben devolver las tierras consuetudinarias a los pueblos indígenas, pues los procedimientos de adquisición de las tierras violaron la legislación nacional y las leyes adat.” (Boletín del WRM, n° 109, agosto 2006).

- **Malasia: la difícil situación de las trabajadoras en las plantaciones de palma aceitera**

Las mujeres constituyen más de la mitad de la mano de obra de las plantaciones malayas (aproximadamente 30.000 operarias). Históricamente han sido contratadas como trabajadoras temporarias para realizar las tareas menos calificadas y peor remuneradas. La urbanización y la industrialización han empujado a hombres y jóvenes a trabajar en las nuevas zonas industriales, mientras que las mujeres se quedan y siguen tomando cualquier trabajo que les permita acceder a una vivienda y a los servicios básicos que proporciona la empresa de la plantación, que de otra forma estarían fuera de sus posibilidades. De esta forma las mujeres han desempeñado el doble papel de suministrar mano de obra barata y de aportar estabilidad social.

A principios de la década de los sesenta, cuando el consumo de caucho sintético controlado por los países industrializados aumentó más de 60% a nivel mundial, los precios del caucho cayeron drásticamente. Las plantaciones de caucho malayas no pudieron competir y por lo tanto el sector fue forzado a diversificarse e introdujo la palma aceitera como cultivo alternativo. Posteriormente el país se convirtió en el primer productor y exportador de aceite de palma, en un impulso que provocó (y sigue provocando) la fuerte oposición de los pueblos indígenas, como los de Sarawak, que defienden sus tierras y bosques tradicionales de los programas de monocultivo devastadores que le permiten al país insertarse en la economía mundial, pero al costo de privar al pueblo de sus medios de sustento.

El cultivo de palma aceitera requiere un “cuidado” más intensivo para evitar plagas, por lo que el uso de plaguicidas se convirtió en un requisito esencial. Las mujeres fueron contratadas como rociadoras de plaguicidas y fertilizantes; se estima que unas 30.000 mujeres realizan esta tarea en el país, la mayoría de ellas indígenas. La organización Tenaganita (Fuerza de las Mujeres) trabaja con las trabajadoras de las plantaciones desde 1991. La información recopilada sobre el trabajo y la vida de las trabajadoras de las plantaciones y los estudios de caso de su explotación como mujeres y como trabajadoras han permitido a la organización dar a conocer el calvario de estas mujeres “envenenadas y silenciadas”, en un informe elaborado en con-

junto con la Red de Acción en Plaguicidas (Pesticide Action Network) de Asia y el Pacífico.

El estudio revela que los equipos rociadores tienen pérdidas y que su mantenimiento es malo, la atención médica y la infraestructura de primeros auxilios en las plantaciones son escasas y en algunos casos no existen equipos de protección. Especialmente para las mujeres, la falta de control médico y la falta total de comprensión sobre la forma en que son afectadas por estos productos químicos, hace difícil evaluar la medida de su impacto sobre ellas, su salud reproductiva y sus embarazos. Pero los impactos son muy reales.

La piel es el órgano más extenso del cuerpo; el 90% de la exposición a los plaguicidas se produce a través de la piel y la piel de las mujeres es delgada, lo que favorece un nivel alto de absorción corporal de los productos químicos. Muy pocas mujeres saben que el punto de absorción más importante es la zona genital. Experimentan sensaciones severas de quemadura genital después de rociar, pero sufren en silencio porque les avergüenza hablar de este problema con los asistentes del hospital que en general son hombres, y el problema no es detectado. Los síntomas comunes de fatiga, dolor de espalda, dolores de cabeza muy fuertes, náuseas, mareos, opresión y dolor en el pecho, inflamación de los senos, son indicadores de exposición a plaguicidas del tipo de los organofosforados y carbamatos.

Señalando a los actores responsables, el informe destaca que los propietarios y los administradores de las plantaciones toman las decisiones sobre las tareas, el método de rociado, el tipo de plaguicidas que se utilizan, los servicios de atención de salud y las medidas a instrumentar cuando se presenta una queja. La industria de las plantaciones no ha formado comisiones de seguridad ni cumple con las disposiciones de la Ley de Seguridad Laboral. Y lo que es peor, no proporciona a las trabajadoras la información adecuada sobre los venenos que manipulan y utilizan en su trabajo. Aunque saben los peligros que involucran, siguen utilizando los plaguicidas más tóxicos. Sin embargo, la industria ha desarrollado estrategias para no tener que rendir cuentas; la tarea de rociado ha sido incluida en la categoría de “trabajo subcontratado”. En consecuencia, las trabajadoras están bajo la supervisión directa del sub-contratista. Muchas permanecen

en calidad de trabajadoras temporales, y de esa forma la industria abdica de su responsabilidad. Su única preocupación consiste en sus ganancias y no incluye las vidas de las trabajadoras que son quienes generan la riqueza de la industria.

En cuanto a la industria de plaguicidas, si bien trabaja en estrecha relación con la industria de las plantaciones sin entrar en contacto directo con las trabajadoras, es responsable de garantizar que los plaguicidas que fabrica y distribuye no envenenen a las trabajadoras, a la población en general ni al medio ambiente. No obstante, no ha tomado medidas, o en todo caso ha sido muy lenta al hacerlo, para abordar estos problemas, y con frecuencia ha sido mucho más enérgica en negar que algún envenenamiento haya tenido lugar.

La Oficina de Plaguicidas y el Departamento de Salud y Seguridad Laboral tienen la responsabilidad de garantizar la protección y la seguridad de las trabajadoras contra la acción de estos productos tóxicos. Existe, en general, falta de controles en cuanto a la venta, utilización e impacto de los venenos en las plantaciones. La escasa instrumentación de las reglamentaciones en el sector ha llevado al envenenamiento diario de las trabajadoras. Además, el personal médico o de atención de salud no está debidamente capacitado para tratar envenenamiento por plaguicidas. De esta forma, también el gobierno es responsable de la actual crisis de salud de las trabajadoras rociadoras de las plantaciones.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Plantaciones (National Union of Plantation Workers - NUPW) si bien está integrado en un 60% por mujeres, no ha logrado abordar la aterradora realidad de las trabajadoras y su exposición cotidiana a los venenos. La dirección ha negociado salarios ligeramente más altos para las rociadoras, en tanto se trata de un trabajo "de alto riesgo". La falta de perspectiva de género se refleja en la falta de programas para la mujer y en la falta de dirigentes mujeres en el propio Sindicato.

La contratación de trabajadores migrantes, la mayoría empleados bajo la modalidad de mano de obra con contrato a término, es un tema emergente. A menudo las actividades se subcontratan a través de compañías o agentes que son quienes proporcionan la mano de obra

contratada que realiza distintos trabajos en las plantaciones pero no se convierten en empleados de las mismas. No cuentan con la protección de las leyes laborales, son altamente móviles y se enfrentan al riesgo de ser arrestados, detenidos y deportados. De esta forma también estos trabajadores son altamente vulnerables y se enfrentan a riesgos de salud graves sin contar con acceso a tratamiento ni atención médica.

En definitiva, la reducción o la prevención de la toxicidad relacionada con el uso de plaguicidas en el país implicaría, entre otras acciones, la prohibición y/o restricción estricta del uso de compuestos peligrosos como los plaguicidas, la promoción de alternativas al control químico de plagas en el país, y la integración de la perspectiva de género al análisis de los peligros laborales de los plaguicidas.

Una organización de mujeres se ha expresado con fuerza. Ha dado voz a las “silenciadas” en un esfuerzo por compensar los efectos nocivos de un modelo de producción equivocado de plantaciones de monocultivos en gran escala que es artificial, inseguro y que refuerza la exclusión de la mujer sin beneficio para el pueblo en general. (Boletín del WRM, nº 69, abril 2003).

- Malasia: trabajadoras de las plantaciones envenenadas y silenciadas

En 2002, la organización malaya Tenaganita, conjuntamente con Pesticide Action Network-Asia Pacific, iniciaron un estudio que confirmó que las mujeres que trabajan en las plantaciones estaban siendo envenenadas por el uso de plaguicidas altamente tóxicos, en especial Paraquat.

En la presentación del “Estudio de los plaguicidas tóxicos en las plantaciones”, la Directora de Tenaganita, Dra. Irene Fernández afirmó: “Si el gobierno malayo hubiera instrumentado realmente las leyes a través de sus organismos de contralor y aplicación (el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional y la Dirección de Plaguicidas), las mujeres no habrían sido víctimas de estos sufrimientos”.

Lo que sí hizo el Estado malayo en octubre de 2003 fue encarcelar a Irene Fernández en relación con un estudio anterior realizado por su

organización: “Abuso, tortura y tratamiento inhumano de los trabajadores inmigrantes en campos de detención”. Acusada de “publicar noticias falsas con intención maliciosa”, Irene continúa presa cumpliendo una sentencia de 12 meses.

Cuando finalmente sea liberada, ¿será acusada nuevamente de “publicar noticias falsas con intención maliciosa” en relación con el estudio más reciente sobre la situación de las trabajadoras de las plantaciones que son “envenenadas y silenciadas” por la industria de la palma aceitera? La posibilidad es muy real, teniendo en cuenta los poderosos intereses económicos involucrados en el sector de la palma aceitera malaya.

Sin embargo, los hallazgos del estudio no pueden de ninguna manera ser considerados “falsos”, y coinciden totalmente con la información sobre las condiciones de trabajo en las plantaciones de palma aceitera, tanto en Malasia como en el resto del mundo. La peculiaridad de este caso es la fuerte presencia de mujeres afectadas por las actividades habituales de estas compañías con relación al uso de plaguicidas.

El estudio demuestra que las mujeres que trabajan en las plantaciones de Malasia rociando plaguicidas son envenenadas por esos productos que utilizan a diario. También reafirma que las condiciones de vida en las plantaciones son malas, la atención médica inadecuada y el manejo de las fincas negligente y a menudo no tiene en cuenta los problemas sociales y de salud que sufren los trabajadores.

Los síntomas comunes percibidos entre las trabajadoras de las plantaciones fueron fatiga, vómitos, dolor de espalda, mareos, dificultad para respirar, problemas cutáneos, náuseas, irritación ocular, dolores de cabeza, sensación de opresión en el pecho e inflamaciones, síntomas que indican exposición a plaguicidas de tipo organofosforados y carbamatos. Las pruebas de sangre revelaron una disminución de la actividad de la enzima acetil-colinesterasa, que es la confirmación del envenenamiento por plaguicidas. El estudio también confirmó que la población de la muestra del estudio trabajaba rociando plaguicidas tipo organofosforado, indicado por una reducción de los niveles de acetil-colinesterasa en plasma y sangre. Después de un mes de pau-

sa en la actividad de rociado, los niveles enzimáticos de las rociadoras seleccionadas se elevaron, reconfirmando que al momento del análisis –un mes antes– sufrían de envenenamiento con organofosforado.

El estudio confirmó que un plaguicida importante utilizado en las plantaciones es Paraquat (un herbicida). El envenenamiento por Paraquat quedó claramente demostrado en las entrevistas y encuestas realizadas con las trabajadoras, e indicado en los exámenes médicos. Las mujeres sufrían de hemorragias nasales, lagrimeo excesivo de los ojos, dermatitis de contacto, llagas e irritación de la piel, decoloración y caída de las uñas, inflamación de articulaciones y úlceras abdominales. Esto a pesar de que Malasia ha clasificado al Paraquat como plaguicida Clase I (extremadamente peligroso). Para empeorar la situación, el estudio destaca que se pronostica que el área plantada con palma aceitera aumentará de 2,7 millones de hectáreas (1998) a 4,3 millones de hectáreas en 2020, con el consiguiente aumento del uso de agroquímicos. Se calcula que el uso de Paraquat aumentará de 5 millones de litros (2000) a 7,4 millones de litros en 2020.

Otro hallazgo del estudio fue que las trabajadoras de las plantaciones no podían leer las etiquetas en inglés y en malayo, ni las etiquetas en los envases de plaguicida si es que accedían a ellos. En la mayoría de los casos las etiquetas son retiradas. Se observó que es una práctica común utilizar plaguicidas en concentraciones mayores que las permitidas, en “cócteles” cuyos ingredientes no se conocen; y a menudo la administración de las fincas opta por no divulgar a las trabajadoras los nombres de los plaguicidas utilizados.

Además, a veces los equipos de rociado tenían pérdidas y planteaban peligros adicionales de derrame y toxicidad para las rociadoras. Por otra parte, estos equipos se almacenaban en los hogares de las trabajadoras, aumentando el riesgo para toda la familia.

El estudio también determinó que la administración de las fincas no proporcionó capacitación sobre las medidas precautorias y los procedimientos de seguridad a aplicar en la manipulación de plaguicidas. No había material de capacitación disponible en los idiomas locales para l@s trabajadores ni l@s profesionales médicos. Los implemen-

tos de protección, cuando se suministraron, eran inadecuados para las condiciones locales de calor y humedad, y por lo tanto la mayoría de las rociadoras no los usaban. Estos factores agravaron el factor de riesgo del trabajo en las plantaciones.

Para empeorar la situación, el estudio destaca que los profesionales de la salud no contaban con capacitación adecuada para reconocer los síntomas de la exposición a plaguicidas y a menudo los ignoraron, tratándolos como problemas menores de tos, dolores de cabeza, etc. Esto significó una subestimación aún mayor de la situación real de envenenamiento atribuible a la exposición a plaguicidas. Se constató una falta alarmante de sensibilidad entre el personal médico, paramédicos y personal de enfermería, factor que exacerbó su incapacidad para tratar los problemas de las mujeres. Como la mayor parte del personal médico era masculino, las mujeres no pudieron expresar ni explicar su situación y sus dolencias.

¿Se considerará todo esto “publicación de noticias falsas con intención maliciosa”? ¿No deberían por el contrario ser acusados el gobierno malayo y sus organismos de contralor y aplicación de la ley (el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional y la Dirección de Plaguicidas) de “silenciar con intención maliciosa acusaciones ciertas?” (Boletín del WRM, n° 79, febrero 2004).

- Malasia: la lucha de las comunidades indígenas de Sabah contra el madereo y las plantaciones de palma aceitera

Representantes de los Murut, los Kadazandusun, los Rungus y de otras 30 tribus procedentes de la región remota de Tongod, atravesaron en julio de 2004 el norte de Borneo para llegar hasta la flamante oficina del Ministro interino de Ordenamiento Territorial de Sabah, Datuk Lajim Haji Ukin, en la ciudad capital de Kota Kinabalu.

El objetivo del grupo era exigir al gobierno que cumpla sus propias leyes, que reconozca los derechos de los nativos de proteger y manejar sus recursos naturales y que detenga la reasignación de tierras a las empresas madereras y de plantaciones.

En Tongod y en todo Sabah, poblados enteros han sido reubicados contra su voluntad. Se han talado vastas zonas de bosques tropicales

y de fincas, y se han destruido tumbas y huertos frutales. La replantación de monocultivos de palma aceitera está ocasionando una erosión en gran escala, desprendimientos de tierras, la sedimentación del río y la contaminación generada por plaguicidas, herbicidas y fertilizantes. La pérdida de alimentos silvestres, de refugio, de materiales de construcción y plantas medicinales, causa a los pueblos indígenas un perjuicio económico sin precedentes hasta el momento. El gobierno ha respondido a las protestas pacíficas algunas veces con el silencio y otras con represión policial.

Wilster L., jefe de poblado, pronunció un discurso apasionado para el que no hubo oídos receptivos. La respuesta del Ministro interino fue: “Necesitamos este tipo de desarrollo para que la infraestructura de la zona, como las carreteras, resulte más práctica.”

La frustración y la desesperanza cunden en Tongod. Tal como reflexionara Naomi, una mujer del poblado de Wilster, la pérdida de los bosques es también la pérdida de su hogar y su identidad. “¿Cómo pueden venir y llevarse nuestra tierra y talar los árboles que plantó el padre de mi padre? Eso tiene que ser ilegal. No pueden tratarnos de esta forma.”

Con la ayuda de organizaciones de apoyo a la comunidad, Wilster y otros pobladores de Tongod intentan actualmente una nueva estrategia: han presentado ante los tribunales una demanda contra el Estado y dos compañías plantadoras, Hup Seng Consolidated Berhad y Asiatic Development Berhad. Este caso es la primera prueba deliberada de las leyes de tenencia de tierras de Sabah respecto de los pueblos indígenas.

Los residentes de Tongod fueron alentados por un caso que marcó un precedente en el vecino Sarawak, en el cual el Juez malayo Ian Chan amplió la definición de tierras nativas tradicionales para incluir no solo a las tierras agrícolas cultivadas activamente por los pobladores, sino también las corrientes de agua, los bosques y las tierras de caza tradicional utilizadas por la comunidad. De esa forma sostuvo en su sentencia que los pobladores indígenas de la aldea de Rumah Nor tenían derechos consuetudinarios que debían prevalecer por sobre las concesiones otorgadas por el gobierno. Esta decisión paró en seco

las máquinas excavadoras de la empresa Borneo Pulp and Paper Company.

A partir de la victoria legal obtenida en Rumah Nor, decenas de comunidades indígenas de Sarawak han inundado los tribunales con casos similares contra las compañías plantadoras que han invadido sus tierras. Sin embargo, se enfrentan a algunas dificultades: los procesos legales en otros estados de Malasia son penosamente lentos, y también existe el riesgo de que pierdan sus derechos en caso de que los tribunales se pronuncien en su contra.

Una vez más, la concepción de desarrollo dominante se opone al bienestar de los pueblos y del medio ambiente. (Boletín del WRM, n° 86, setiembre 2004).

- Malasia: las condiciones laborales de las trabajadoras en las plantaciones de palma aceitera

En Malasia, las trabajadoras de las plantaciones fueron dejadas de lado por los planes del gobierno para erradicar la pobreza y mejorar la situación de la mujer. Los avances realizados hasta la fecha en el empoderamiento de la mujer han sido desiguales. Las trabajadoras de las plantaciones siguen rezagadas, ya que no pueden liberarse del círculo vicioso de la pobreza en el que se encuentran.

La industria de las plantaciones es una parte fundamental del desarrollo del país. Malasia es líder mundial en la producción de aceite de palma y de caucho natural, y su cultivo es una importante actividad agrícola del país. Aparte de los minifundistas (cuyo sustento depende de estas materias primas), también existen trabajadores asalariados empleados por las empresas de las plantaciones. Se calcula que en 2005 trabajaban 1.268.500 personas en el sector de la agricultura y la pesca, que incluye a los trabajadores agrícolas, de las plantaciones y forestales. Grandes segmentos de la población dedicada a los sectores de la agricultura y las plantaciones son pobres.

En años recientes, la Asociación de Consumidores de Penang (CAP, por sus siglas en inglés) ha trabajado con los trabajadores de las plantaciones de aceite de palma y caucho en la península y se ha

dedicado a los temas de salud y seguridad en el trabajo, la lucha por mejores salarios, necesidades básicas como la vivienda, la salud y el saneamiento, y demás problemas sociales como la violencia doméstica y el abuso del alcohol. En el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo, la principal preocupación es el uso de herbicidas sumamente peligrosos como el Paraquat, de muy reciente prohibición en Malasia.

En la actualidad las mujeres son casi la mitad de la mano de obra de las plantaciones donde se fumigan diversos herbicidas como parte integral del trabajo en las mismas. El motivo por el cual las empresas de las plantaciones emplean mujeres para fumigar los herbicidas se debe a que hay muchas mujeres disponibles porque no pueden encontrar otros empleos. También se las considera trabajadoras tímidas, dóciles y obedientes, ya que no cuestionan a sus superiores y son fáciles de manipular.

La mayoría de las mujeres de las plantaciones nacieron y se criaron en ellas, al igual que sus padres y abuelos. El entorno de la plantación es poco propicio para alcanzar una buena educación o adquirir la capacitación fundamental que requieren sectores más especializados de la economía. Los estudios muestran que las mujeres de las familias pobres y rurales adquieren un grado menor de enseñanza. Este hecho, sumado a la pobreza imperante, coloca a las mujeres de las plantaciones en una posición muy vulnerable.

La falta de enseñanza y la exclusión social disminuyen las oportunidades de las mujeres y limitan sus posibilidades para acceder a empleos en los sectores industriales y de servicios. Como la mayoría de las empresas proporcionan viviendas a sus trabajadores, este es otro incentivo para que las mujeres sigan residiendo en las plantaciones.

En 2004 CAP realizó un estudio de 11 plantaciones de aceite de palma en los estados septentrionales del país. El estudio se concentró en las mujeres fumigadoras de herbicidas, sus condiciones de trabajo y el consiguiente impacto para su salud.

El trabajo en una plantación de aceite de palma es agotador y peligroso. Las fumigadoras de herbicidas deben cargar con un bidón de 18 litros de herbicida y realizar de 14 a 16 rondas de fumigación por

día. En algunas plantaciones también se fumiga en tractores, y los bidones de herbicida se colocan a ambos lados del tractor. Dos mujeres llevan las bombas y fumigan a medida que se desplaza el tractor.

En ambos casos, las fumigadoras quedan inmersas en la fina niebla de los herbicidas. Rara vez se aplican las medidas de seguridad recomendadas. El uso de máscaras, guantes y botas protectoras es poco práctico debido al tórrido y húmedo clima tropical. La falta de conciencia generalizada sobre los peligros de los herbicidas, la inhalación y la absorción por la piel son las principales causas de casos de envenenamiento laboral entre las mujeres fumigadoras.

La dirección de las plantaciones decide cuáles pesticidas o herbicidas se utilizan, así como la frecuencia de su aplicación. La mayoría de las trabajadoras entrevistadas ni siquiera sabía cuáles herbicidas utilizaban, y otras solo los identificaban por su color u olor. Las mujeres cumplían las instrucciones de sus supervisores relativas a las proporciones y la mezcla de los herbicidas. La mayoría de las mujeres ni siquiera sabía acerca de la toxicidad de los químicos y los peligros a los que estaban expuestas.

La única protección que utilizan es botas de seguridad y ocasionalmente un pañuelo o toalla para cubrirse la boca y la nariz. Las mujeres se quejan de que la gerencia se muestra poco dispuesta a reemplazar el equipo protector personal y que les exigen que muestren el equipo dañado. Aun así, sólo sustituyen el equipo periódicamente. La mayoría de las mujeres debe adquirir sus propias botas de seguridad ya que no consiguen que los patrones les reemplacen las botas rotas. Otras ni siquiera reemplazan las botas ya que no tienen los medios para hacerlo.

Las mujeres trabajan seis días por semana de manera rotativa, y reciben sueldos de servidumbre a cambio de su labor. Para ganarse el sueldo de la semana con frecuencia tienen que trabajar largas horas bajo el sol abrasador. Asimismo, el temor a perder el empleo las hace soportar condiciones ingratas, como comentarios ofensivos y presiones indebidas, y en ocasiones son sometidas a acoso sexual.

Las trabajadoras reciben un salario entre 15 y 18 *ringgit* malayos (MYR, por su sigla en inglés), que equivalen a US\$ 3,95 y US\$ 4,75

por día. Cada fumigadora de herbicidas gana entre MYR 350 y 450 (US\$ 92 y 118) por mes. Algunas empresas de plantaciones otorgan MYR 2 (aproximadamente US\$ 0,50) adicionales por día a las fumigadoras de herbicidas. Esto indica claramente el peligro de la fumigación de herbicidas comparada con otras tareas. En algunas plantaciones se les descuentan de los salarios las cuentas de electricidad y agua.

El estudio concluyó que, con frecuencia, las fumigadoras no gozan de buena salud. Padenen males agudos y crónicos derivados de su trabajo. La mayoría de las plantaciones cuentan con instalaciones médicas para sus trabajadores, aunque gran parte del tiempo estas instalaciones son insuficientes e ineficaces. Si las mujeres padecen enfermedades graves que el paramédico de la plantación no puede tratar, deben visitar a un médico en la ciudad más próxima. Los problemas de salud afectan directamente a la productividad, por lo cual muchas enfermedades no se declaran.

Otra revelación inquietante es que, dado que no se les brinda equipo protector, las trabajadoras que son empleadas bajo contrato trabajan en peores condiciones y deben manipular herbicidas más potentes y dañinos y carecen de cobertura médica.

¿Por qué se quedan las mujeres en las plantaciones a pesar de la pobreza que padecen y de su exposición a los venenos? En la década de 1980 muchas plantaciones reemplazaron los árboles de caucho con palma aceitera porque rendían más económicamente. En consecuencia, las trabajadoras de las plantaciones que eran experimentadas extractoras de caucho perdieron su fuente de sustento. Algunas mujeres habían extraído caucho durante toda su vida, y quedaron en una difícil situación laboral. Con el fin de no ser expulsadas de la plantación, no tuvieron otra opción que aceptar cualquier empleo que les ofreciera la gerencia. Por lo tanto, se convirtieron en fumigadoras de herbicidas, aunque ésta no fue su opción laboral.

A medida que los precios del aceite de palma suban en los próximos años, cabe esperar que la producción malaya también aumente, ya que es uno de los principales cultivos del país. Esta situación intensificará la participación de las mujeres en este sector. Las mujeres

tendrán cada vez más dificultades para escapar al círculo vicioso de la pobreza y su salud, cada vez más afectada, será el precio que deberán pagar.

Es difícil salir de una situación de pobreza. La educación es uno de los medios por los cuales las familias de las plantaciones pueden escapar de ella. Por esta razón, es necesario que se realicen intervenciones políticas y programáticas para asistir y motivar a los hijos de los trabajadores de las plantaciones a continuar su educación. (Boletín del WRM, n° 105, abril 2006).

OCEANIA

- Papúa Nueva Guinea: impactos de monocultivos de palma aceitera promovidos desde Inglaterra

CDC Capital Partners es un actor principal en las plantaciones de palma aceitera de Papúa Nueva Guinea (PNG). Lo que fuera antes un programa de ayuda al exterior del Reino Unido, se convirtió en una compañía mixta e invierte en PNG a través de la compañía Pacific Rim Plantations Ltd., en la que posee el 76% del paquete accionario.

Pacific Rim Plantations Ltd. tiene la propiedad y administración de aproximadamente 23.000 hectáreas de plantaciones de palma aceitera en tres zonas: la Provincia del Norte (Popondetta), la Provincia de Milne Bay (Alotau) en la costa norte de PNG y en Kavieng en la isla Nueva Irlanda. Opera en una *joint venture* con el gobierno de PNG, que tiene una participación del 20%.

CDC tiene planes a largo plazo de duplicar su capacidad de producción de aceite de palma, y ha estado comprando tierras tradicionales. Aunque según su Plan Ambiental, las áreas a talar eran “matorrales” y “arbustos secundarios”, fotografías recientes muestran que las operaciones de la CDC impulsan la deforestación de bosques tropicales húmedos en tierras bajas de PNG. Una de las áreas más afectadas es el hábitat de la mariposa más grande del mundo, la mariposa Ala de Pájaro Reina Alexandra (*Ornithoptera alexandrae*), orgullo de los pueblos locales, que ha sido clasificada como una especie rara y en peligro de extinción por la UICN y figura en el Apéndice 1 de CITES.

Un grupo ambientalista local, Conservation Melanesia (CM) puso en evidencia que los problemas de la preparación de tierras por parte de CDC, van desde la tala de vegetación hasta los propios márgenes de arroyos y ríos, hasta la plantación en medio de los cursos de agua. Todas las empresas plantadoras de palma aceitera plantan a través de cursos de agua menores, que tienden a secarse durante la estación seca. Estas corrientes de agua, sin embargo, juegan un papel importante en el ecosistema ... hasta que la vegetación natural circun-

dante es talada y plantada con palma aceitera. Además, la planta procesadora de aceite de palma de la CDC en Oro descargaba en forma abierta y directa sus efluentes en el medio ambiente circundante, mediante la descarga de desperdicios directamente en un río local y sus afluentes. Gran cantidad de personas que viven a lo largo de ese río, que se extiende por todo el interior de la provincia hasta los poblados de la costa, se han quejado sobre la contaminación del agua, los peces muertos y la destrucción causada por inundaciones, que nunca antes habían sucedido hasta que se construyó la planta de procesamiento. Pero la CDC ha hecho muy poco para solucionar estos problemas.

Pero estos problemas no son nuevos. Ya en 1994, FoE-EWNI y WWF-UK criticaron a la CDC por destruir los bosques tropicales en los establecimientos de Milne Bay y también por llevar a las comunidades locales a depender de un único cultivo comercial orientado a la exportación, vulnerable a fluctuaciones de precio descontroladas. Advertieron que al colocar la fábrica en el lugar se alentaría a los habitantes locales a talar sus propias tierras para cultivar palma aceitera, y al parecer eso es exactamente lo que pasó.

La CDC argumenta que tiene una actitud socialmente responsable y que ha lanzado programas de construcción y de inversión en las comunidades para mejorar las condiciones de vida. Pero existen informes que afirman que la CDC está promoviendo el desarrollo de plantaciones de palma en pequeños establecimientos de propietarios locales, porque al basarse en el ahorro de costos salariales de mano de obra, este sistema resulta más rentable para la compañía que seguir ampliando sus propias plantaciones. La compañía proporciona semillas y créditos a pagar en 4 o 5 años a los propietarios de tierras si cultivan palma aceitera en sus propiedades.

Las objeciones de las ONG se relacionan con procesos de consentimiento informado y con los acuerdos de arriendo de las tierras, la falta de sindicatos de trabajadores de palma aceitera, los bajos salarios y la falta de información objetiva a disposición de los propietarios. Además, las transacciones con los pobladores locales no se realizan en pie de igualdad. Los habitantes de Papúa Nueva Guinea tradicionalmente han tenido un enfoque común hacia la propiedad de la tierra

y no son conscientes de los compromisos que implican los contratos comerciales sofisticados que firman. (Boletín del WRM, n° 49, agosto 2001).

- **Papúa Nueva Guinea: devolución de tierras tradicionales impide destrucción de bosques por maderero y plantaciones de palma aceitera**

Los propietarios de las tierras tradicionales de Maisin y Wanigela, en el área de Collingwood Bay en la Provincia Oro, tienen mucho para celebrar.

En mayo de 2002, el Tribunal Nacional de Waigani devolvió las tierras tradicionales que habían sido arrendadas al Estado a comienzos de 1999, según un contrato de arriendo-retroarriendo con la Keoro Development Corporation, una compañía terrateniente local. El plan era despejar el área para dar lugar a plantaciones de palma aceitera. Las tierras en cuestión abarcaban 38.000 hectáreas de rico suelo volcánico con una extensa zona de bosque.

Los pobladores de Collingwood Bay consideraron ilegal el “arriendo” de sus tierras, por lo que decidieron hacer la prueba de iniciar un juicio para determinar si el imperio de la ley y la justicia puede ser ignorado por las empresas mineras, sus agentes e individuos corruptos a nivel de gobierno.

Según la mayoría de los propietarios de tierras, solamente unos pocos habían firmado el arriendo, sin consultar en forma adecuada a varios propietarios tradicionales de Collingwood Bay. La victoria judicial eliminó la amenaza del maderero y la conversión a monocultivos de árboles en tierras cuyos propietarios pueden desarrollar empresas comunitarias autogestionadas en pequeña escala sin destruir los bosques.

Este logro también representa un motivo de aliento para otros propietarios de tierras que enfrentan problemas similares para reclamar tierras que les fueron expropiadas sin su consentimiento, y para afirmar su derecho a participar en las discusiones sobre el uso de sus tierras. Por ejemplo, los propietarios de tierras de Kuinga-Aimbak en

la provincia Occidental también están luchando para detener las operaciones madereras en su zona.

Hubo cuatro días de celebración, a la que concurrieron amigos de dentro y fuera de PNG que colaboraron con los propietarios de tierras en su larga batalla, como Greenpeace, Environmental Law Center y Conservation Melanesia. Los invitados recibieron una lluvia de obsequios de todos los poblados y fueron agasajados con una ceremonia tradicional con grasa de cerdo, como muestra de respeto y agradecimiento por su apoyo. “A diferencia de nuestros antecesores y ancestros que pelearon batallas con lanzas y palos, nosotros dimos esta batalla con papeles y lapiceras, porque nuestra tierra nos fue robada con papeles y lapiceras”, afirmó un propietario de Collingwood Bay.

Aunque el resultado les fue favorable, esta prueba ha sido muy dura para los pobladores y ha significado cambios permanentes en sus vidas. Tuvieron que hacerse cargo de los onerosos costos del juicio y se vieron obligados a tomar decisiones que afectaron la seguridad y el bienestar de sus familias y que en mayor medida implicaron un riesgo para sus propias vidas. (Boletín del WRM, n° 64, noviembre 2002).

- **Papúa Nueva Guinea: *joint venture* de palma aceitera beneficia a grandes empresas**

La palma aceitera es actualmente la principal generadora de divisas de Papúa Nueva Guinea (PNG), habiéndose colocado por encima del café. En este momento existen cuatro grandes proyectos de palma aceitera, la mayoría perteneciente al modelo de “fincas de núcleo” con una compañía de palma aceitera “matriz” mayoritariamente de propiedad extranjera. Según este modelo, los cultivadores se organizan como Poblados de Palma Aceitera (Village Oil Palm - VOP) y Arrendatarios. Las unidades VOP son operadas por propietarios en sus propias tierras tradicionales. Los arrendatarios arriendan tierras de otros propietarios para plantar. Pero la *joint venture* entre fincas de núcleo con pequeños propietarios es en realidad un ejercicio de “externalización” utilizado por las compañías de palma aceitera para aumentar su capacidad de suministro y la rentabilidad de sus fábricas, al mismo tiempo que comparten con los cultivadores los costos y riesgos asociados con este tipo de industria.

Las instituciones financieras internacionales y otras agencias de financiación proporcionan fondos a la compañía. La compañía suministra los plantines, conocimiento técnico, herramientas, fertilizantes y otros insumos, que después son reembolsados por los cultivadores. Los cultivadores aportan su trabajo y asumen todos los costos de desmontar el área y todas las etapas del establecimiento de la plantación de palma, incluso el mantenimiento regular y la cosecha. De esta forma el riesgo recae sobre los cultivadores, porque su ganancia depende fuertemente del nivel de precios mundial del aceite de palma y de la productividad de sus parcelas. Este modelo ofrece a las compañías una alternativa mucho más rentable que las plantaciones a gran escala tradicionales de propiedad de la compañía. A la inversa, los cultivadores no poseen acciones de las compañías.

En lo que respecta al gobierno, el Primer Ministro Michael Somare declaró que habría desgravación fiscal para las compañías interesadas en desarrollar esta industria. Altos funcionarios del gobierno anunciaron planes de expandir las plantaciones de palma aceitera en casi todas las provincias de PNG.

En cuanto a las instituciones financieras internacionales, “les gustan los proyectos de palma aceitera porque están entre los proyectos de desarrollo más viables que garantizan el reembolso de los préstamos”, señaló el Director Gerente de una compañía extranjera productora de palma en PNG. El Banco Asiático de Desarrollo (ADB, por sus siglas en inglés) afirma que el medio más efectivo para reducir la pobreza en PNG es un modelo de crecimiento económico de base amplia dirigido por el sector privado, y que es esencial impulsar el desarrollo de las fincas de núcleo hasta que atraiga la financiación del sector privado u otros financiadores, incluso el ADB. El argumento es que el desarrollo de iniciativas comerciales creará beneficios indirectos para la población rural pobre al posibilitar el desarrollo agrícola de los pequeños propietarios.

Pero la mayoría de las comunidades rurales de PNG no son en absoluto pobres. Salvo en las áreas degradadas o contaminadas por grandes proyectos pesqueros, agrícolas o mineros, el sistema de tenencia tradicional de la tierra ha permitido a las comunidades locales un acceso libre y sencillo a tierras, agua limpia y abundantes recur-

sos naturales, y en consecuencia a una calidad de vida digna. Es un estilo de vida que valorarían y al que aspirarían muchos habitantes del occidente industrializado y de muchos lugares del mundo devastados por la pobreza.

En PNG las tierras son de propiedad comunitaria y se comparten dentro y entre los clanes. Pero una vez que una familia o un grupo de familias particulares dentro de un clan convierten la tierra en parcelas de plantación de cultivos comerciales, esta relación y este tipo de “propiedad” cambian en forma permanente. La sociedad civil teme que las plantaciones de palma aceitera y otros proyectos de agricultura en gran escala sean sólo otra forma usada por las instituciones financieras internacionales y las poderosas agencias de financiación para promover la “movilización de tierras”. La movilización de tierras implica la creación de un registro de propiedad de tierras y de límites de las tierras tradicionales controlado en forma central. De esta forma el gobierno nacional obtendrá el poder de decidir sobre la propiedad y distribución de la tierra, erosionando aún más el sistema tradicional en vigor hasta ahora. Ese cambio puede facilitar la transferencia del sistema de tenencia tradicional de la tierra a modalidades como la propiedad individual, el arriendo, o la propiedad estatal, y de esta forma permitir un más fácil acceso del sector privado a los ricos y abundantes recursos naturales de PNG.

La introducción de la palma aceitera en PNG también ha provocado numerosos y costosos problemas sociales, antes desconocidos para la población rural de PNG. El cambio que conlleva este tipo de proyectos impuestos en forma externa con frecuencia es perjudicial y debilita los sistemas y estructuras tradicionales existentes que han asegurado el sustento de las comunidades locales desde tiempos inmemoriales.

Entre los problemas se incluyen el cambio de los procesos tradicionales de uso y asignación de la tierra (que provoca descontento y enojo dentro y entre las comunidades), la contaminación de vías fluviales por aumento del contenido de limo, el deslizamiento de sedimentos y la eutroficación que se produce durante el establecimiento y las operaciones de las plantaciones de palma aceitera, la baja rentabilidad para los propietarios y pequeños agricultores que se encuen-

tran atrapados en una situación de total dependencia de la compañía de palma aceitera y de las fluctuaciones de precios de los productos, y la destrucción de ecosistemas ricos en biodiversidad debido a la expansión invasiva de las plantaciones, por ejemplo el hábitat de la mariposa Ala de Pájaro Reina Alexandra (*Ornithoptera alexandrae*), la mariposa más grande del mundo, o las Cavernas de Pomio, uno de los sistemas de cavernas más espectaculares del planeta.

Los pequeños propietarios de tierras están preocupados por este proceso y han señalado: “Nosotros, los propietarios de tierras, estamos desarrollando y seguiremos desarrollando NUESTRA TIERRA según nuestras propias condiciones. Por lo tanto queremos advertir seriamente a todos quienes pretendan utilizar NUESTRA TIERRA para la palma aceitera ¡que NO ENTREN! Todo intento de introducir la palma aceitera en nuestras tierras será enérgicamente resistido”. (Extraído de un anuncio publicado en un periódico por un grupo de propietarios de PNG en febrero de 2003). (Boletín del WRM, n° 74, setiembre 2003).

- **Papúa Nueva Guinea: declaración de propietarios tradicionales sobre el maderero, la minería y las plantaciones de palma aceitera**

El 12 de marzo de 2004 se realizó en Popondetta, Provincia de Oro, Papúa Nueva Guinea, el Primer Foro sobre Derechos sobre la Tierra y Manejo Comunitario de los Recursos Naturales de los propietarios tradicionales de tierras de la Provincia de Oro, con la presencia de representantes de todas las comunidades poseedoras de tierras de la provincia.

Los participantes se comprometieron a asegurar el manejo sustentable de los recursos y a proteger sus derechos en tanto legítimos propietarios de estos recursos, y declararon que:

“Nuestro futuro como propietarios tradicionales de tierras está amenazado de muchas maneras diferentes por emprendimientos a gran escala realizados sin nuestro consentimiento libre, previo e informado y sin que tuviéramos acceso a la participación plena. Nuestras tierras tradicionales y las praderas, lagos, pequeñas islas, bosques y

montañas, que son también ecosistemas de importancia fundamental, han sido invadidos por los emprendimientos de maderero, palma aceitera, pesca, minería y turismo que han debilitado nuestra supervivencia. La expansión e intensificación de las industrias extractivas conjuntamente con la liberalización económica, la agresión del libre comercio, el consumo dilapidador y la globalización son señales temibles de una codicia insustentable.

Debemos actuar todos con urgencia para revertir la injusticia social y ecológica generadas por las violaciones a nuestros derechos como propietarios tradicionales reconocidos por la constitución de PNG”.

“Los propietarios tradicionales de tierras rechazamos el mito de la sustentabilidad de las plantaciones de palma aceitera y la minería. No hemos visto nunca un emprendimiento de palma aceitera, maderero o minería que pueda calificarse como ‘desarrollo sustentable’ bajo ninguna definición razonable. Nuestra experiencia y la de otros propietarios tradicionales de Papúa Nueva Guinea y del mundo, demuestra que la expansión de monocultivos, incluido el de palma aceitera, el maderero industrial a gran escala, la minería, la extracción de petróleo y gas, la pesca comercial y el turismo en gran escala, constituyen emprendimientos con graves consecuencias sociales y ambientales tan generalizadas y negativas que hacen imposible que se los pueda calificar como sustentables. La verdad es que hemos comprobado que en vez de contribuir a la mitigación de la pobreza, crean más pobreza y divisiones sociales en nuestras comunidades y mengaban nuestras culturas y leyes tradicionales”.

El Foro también presentó una serie de recomendaciones, entre ellas:

“Reclamamos una moratoria al maderero industrial a gran escala, la expansión del modelo de predios núcleo [núcleo se refiere a la plantación de carácter industrial] de palma aceitera y la extracción minera que pueden afectarnos. Deben paralizarse las concesiones existentes. Debe cesar por completo el financiamiento de las instituciones financieras internacionales (IFI) como el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo y no se deben plantear más iniciativas guberna-

mentales de extracción de recursos ni nuevas inversiones privadas hasta que se asegure plenamente el respeto a nuestros derechos tradicionales, nuestras leyes tradicionales y nuestra participación plena y significativa”.

“Todos los proyectos que afecten a nuestras tierras deben ser sometidos a nuestro consentimiento libre previo e informado, expresado a través de nuestras propias instituciones representativas a las que se debe otorgar personería jurídica. El derecho al consentimiento libre previo e informado no debe ser interpretado como un ‘veto’ al desarrollo, sino como una forma de integrar nuestro derecho, en tanto propietarios tradicionales, a decir ‘no’ a los proyectos que consideremos injuriosos a nuestra condición de pueblos que habitamos estas tierras desde tiempos inmemoriales”.

“La mitigación de la pobreza debe partir de nuestra propia definición de pobreza y de nuestros indicadores de la misma, y particularmente debe abordar la exclusión y la falta de acceso que sufrimos en todos los niveles de toma de decisiones. La pobreza no solo se relaciona con la falta de dinero, de recursos y de servicios como la salud y la educación, sino que también se define por la falta de poder y de acceso a los procesos de toma de decisiones y de gestión. Las inequidades sociales y ecológicas y la injusticia alimentan y permean el empobrecimiento de las poblaciones locales”.

“Como propietarios tradicionales no rechazamos el desarrollo, sino que exigimos poder determinar nuestro propio desarrollo de acuerdo con nuestras propias prioridades. El desarrollo sustentable de las comunidades locales se asegura a través del ejercicio de nuestros propios derechos humanos y a la tierra, así como por disfrutar del respeto y la solidaridad de todos los pueblos. Estamos facultados, por tanto, a realizar contribuciones y desempeñar una función vital en el desarrollo sustentable”. (Boletín del WRM, n° 86, setiembre 2004).

- Papúa Nueva Guinea: ONG locales impugnan el préstamo del Banco Mundial para proyecto de palma aceitera

Papúa Nueva Guinea tiene un sistema de tierras comunales que ha permitido a la mayoría de las comunidades rurales ganarse el sus-

tento a través del acceso gratuito y fácil a la tierra, el agua limpia y la abundancia de recursos naturales. Sin embargo, la introducción de plantaciones de cultivos comerciales socava sus sistemas y estructuras consuetudinarios y conlleva impactos sociales y ambientales negativos.

La palma aceitera es un buen ejemplo: impulsada desde afuera y orientada a la exportación, cuenta con la financiación del Banco Mundial. Sin embargo, el proyecto ha enfrentado la oposición local. Pequeños propietarios han advertido a los empresarios de la palma aceitera que deben permanecer fuera de sus tierras. Ahora, frente a la próxima reunión del Directorio del Banco Mundial que tratará la aprobación del préstamo P079140 (Papúa Nueva Guinea - Desarrollo de la Pequeña Agricultura), varias ONG papuanas se le oponen firmemente. Con el fin de recoger adhesiones han hecho circular una carta dirigida a la Junta de Directores Ejecutivos del Grupo del Banco Mundial en la que se les solicita que no aprueben más préstamos destinados a plantaciones y procesamiento de palma aceitera.

Este tipo de plan no redundará en nada bueno para las comunidades. Su petición está bien fundada, como lo demuestra la carta:

“La palma aceitera es riesgosa: Nos oponemos a que haya más proyectos de palma aceitera en Papúa Nueva Guinea a causa de los problemas sociales y ambientales adversos que se constatan en las zonas de palma aceitera existentes. El precio de la palma aceitera depende en gran medida del precio mundial del producto, que puede ser volátil. Dada la enorme expansión del programa de palma aceitera en otros países, especialmente en Indonesia, el riesgo de una caída del precio es muy alto”.

“La palma aceitera es destructiva para el medio ambiente: El documento del proyecto del Banco Mundial subestima los impactos ambientales de la palma aceitera. Nuestro país ya ha sufrido los impactos adversos de la palma aceitera en aquellas provincias donde se cultiva. El historial de PNG en cuanto a garantizar la sustentabilidad ambiental es paupérrimo. La capacidad de supervisión del Departamento para el Medio Ambiente y la Conservación está limitada por la falta crónica de recursos. No tiene la capacidad ni la competencia

necesarias para supervisar la amplia gama de asuntos ambientales relativamente complejos relacionados con la palma aceitera.”

“La palma aceitera es mal desarrollo: Más de dos décadas de cultivo de palma aceitera en Papúa Nueva Guinea han resultado en poco o ningún desarrollo para nuestro país. De hecho vemos una regresión de las condiciones y niveles de vida en los lugares donde se cultiva palma aceitera. Nuestro gobierno ofrece exoneraciones y créditos impositivos a los operadores de la industria de la palma aceitera, pero esto limita considerablemente los beneficios económicos para PNG. Los agricultores que trabajan de sol a sol con la esperanza de una mejor calidad de vida, como les prometieron los que los metieron en el cultivo de palma aceitera, están desilusionados y enfadados porque lo único que les han dado son promesas vacías, en tanto los recursos de los que dependen para sobrevivir están ahora degradados y contaminados. Gran parte de los ingresos que obtienen con la palma aceitera se vuelven a ir con los pagos de los costes incurridos para establecer sus parcelas cultivadas con palma aceitera.”

“La palma aceitera es una imposición a nuestro pueblo: Los productores de palma aceitera nos informan que cultivan palma aceitera solamente porque necesitan dinero para pagar las matrículas escolares cada vez más onerosas necesarias para que sus hijos accedan a la educación. La ironía es que las matrículas escolares nos fueron impuestas precisamente porque nuestro gobierno presta oídos a un poder extranjero como el Banco Mundial, que recomienda la adopción del sistema de usuarios que pagan de forma que los ingresos se desvíen al pago de la deuda. Para una nación del Sur como PNG, la educación y el cuidado elemental de la salud son servicios esenciales a los que debería darse prioridad al distribuir los ingresos que PNG obtiene de otros sectores. El Banco Mundial debería presionar a nuestros dirigentes para que se cubran estas necesidades y responsabilidades fundamentales, en lugar de presionar a la población papuana a sacrificar tierras fértiles, bosques prístinos y cursos de agua sanos por un cultivo comercial que ninguna nación rica industrializada del mundo quiere tener en su propio jardín. Es obvio que las naciones ricas imponen el cultivo de palma aceitera en países como PNG simplemente porque se trata de un cultivo contaminante que exige trabajo intenso y gran cantidad de nutrientes, para que sus industrias puedan tener acceso a aceite barato.”

El proyecto también es malo para el país: “La palma aceitera aumenta el problema de la balanza de pagos de PNG. Los agricultores pasan a depender demasiado de un monocultivo comercial. Lo que queda del dinero que tanto les costó obtener con la palma aceitera terminará enriqueciendo a empresas extranjeras debido al consumo generalizado de arroz importado de Australia, pescado enlatado, carne enlatada y un abanico de otros productos de baja calidad procedentes de Indonesia y China. Esto aumenta nuestra balanza de pagos. Papúa Nueva Guinea debería recibir apoyo y asistencia para producir internamente alimentos y otros productos necesarios y procurados, de modo que el dinero circule dentro del país en beneficio de nuestras comunidades y disminuya la precaria balanza de pagos del país.”

“Aumento de la deuda nacional: De aprobarse, este préstamo aumentará la carga de la deuda de Papúa Nueva Guinea sin que haya ninguna verdadera ganancia en cuanto a desarrollo. Tememos que frente al fracaso del gobierno, el aumento de la deuda lleve a una mayor devaluación del kina [moneda local], otra carga sobre los hombros de nuestro pueblo y nuestro preciado medio ambiente. Esto resultará inevitablemente en más privaciones para nuestra gente y una mayor presión para explotar el medio ambiente relativamente sano, del que más del 80% de nuestra gente depende para sobrevivir. ¡Esto es, en esencia, fabricar la pobreza, no reducirla!”

Además, la financiación llega a un país cuyo ejercicio del gobierno está siendo impugnado: “El gobierno de Papúa Nueva Guinea no se hace responsable. Papúa Nueva Guinea tiene un largo historial de fracasos en el ejercicio del gobierno, mala administración y mal uso de los fondos públicos por parte de quienes están en el poder. Esto ha convertido en inútil e ineficaz a la mayor parte de la ayuda para el desarrollo”.

“Banca imprudente. Es una falta de responsabilidad que el Banco Mundial otorgue un préstamo a este proyecto tras el fracaso del Proyecto de Bosques y Conservación (FCP). El año pasado el Banco Asiático de Desarrollo tuvo que cancelar su préstamo para un proyecto similar llamado “proyecto Nucleus Agro-Enterprises” por motivos de mala administración financiera. Puesto que el riesgo asociado es alto

y que el Banco Mundial en tanto prestamista tiene poca influencia en el resultado, embarcarse en otro proyecto así para la expansión de la palma aceitera es una mala práctica bancaria, al igual que otorgar otro préstamo a PNG.”

Demasiados riesgos por el bien de la industria de la palma aceitera: “PNG se endeuda para subsidiar la industria de la palma aceitera: Aunque el documento del proyecto declara que este plan aumentará los ingresos de PNG, se trata en realidad de un subsidio otorgado a la industria. Nuestro pueblo, sobre todo los agricultores que el Banco Mundial ha identificado como los que necesitan ayuda para salir de la pobreza, han terminado soportando sobre sus hombros el grueso de la carga de la deuda. Es por todo esto que las comunidades han empezado a rechazar los proyectos de palma aceitera, como lo demuestran las declaraciones de protesta que se adjuntan para vuestra referencia.”

Las ONG concluyen denunciando que el préstamo contradice los Objetivos y Principios Directivos Nacionales: “Nuestra Constitución nacional hace énfasis en las empresas a pequeña escala y el respeto a la forma de ser de PNG, el desarrollo humano integral para nuestro pueblo, el uso y la administración sensatos de nuestros recursos naturales para hoy y para el futuro. Si el Banco Mundial está verdaderamente interesado en el desarrollo en PNG, los cinco principios directivos de la Constitución brindan un marco sensato para un enfoque muy especial del desarrollo que creemos será más beneficioso para el país.” (Boletín del WRM, n° 104, marzo 2006).

REFERENCIAS

Artículos Generales

Palma aceitera y soja: dos cultivos comerciales paradigmáticos de la deforestación

- Artículo basado en información obtenida de: "Oil Palm and Soy: The Expanding Threat to Forests", "Soy Expansion - Losing Forests to Fields", WWF Forest Conversion Initiative, julio 2003, http://www.wwf.ch/images/progneut/upload/WWF_OIL_PALM_AND_SOI.pdf
- "Accommodating Growth: Two scenarios for soybean production growth", Jan Maarten Dros, AIDEnvironment, noviembre 2003, http://www.wwf.ch/images/progneut/upload/1122_Soy_quick_scan_v6.pdf
- "Corporate actors in the South American soy production chain", Jan Willem van Gelder, Jan Maarten Dros, noviembre 2002, www.wwf.ch/images/progneut/upload/South%20American%20soybean%20actors%20WWF%2020021126.pdf
- "Greasy palms – palm oil, the environment and big business", marzo 2004, http://www.foe.co.uk/resource/reports/greasy_palms_summary.pdf
- "Greasy Palms - The social and ecological impacts of large-scale oil palm plantation development", marzo 2004, http://www.foe.co.uk/resource/reports/greasy_palms_impacts.pdf
- Ver: "El amargo fruto de la palma aceitera", en: <http://www.wrm.org.uy/plantaciones/material/palma.html>

Monocultivos: el símbolo de un modelo perimido

- Por: Raquel Núñez, Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), correo electrónico: raquelnu@wrm.org.uy

Plantaciones de palma aceitera: no hay sustentabilidad con Paraquat

- Artículo basado en información de: Comunicado de prensa del 17 de noviembre del 2005, de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA), correo electrónico: iuf@iuf.org, www.iuf.org; y la Declaración de Berna, correo electrónico: info@evb.ch; www.evb.ch

El cultivo que más destruye la tierra no es la solución para la crisis energética

- Por: George Monbiot, 6 de diciembre de 2005, *The Guardian*, <http://www.guardian.co.uk/climatechange/story/0,12374,1659037,00.html>

AFRICA

Uganda

Plantaciones de palma aceitera de BIDCO a costa de las selvas prístinas de Bugala

- Artículo basado en información obtenida de: "BIDCO to undertake largest private Project", *The New Vision* 2000-2005, 10 de noviembre de 2005, <http://www.newvision.co.ug/D/8/220/464984>
- "Museveni Launches Bidco", *The New Vision* (Kampala), 2 de noviembre de 2005, <http://allafrica.com/stories/200511020416.html>, y fuentes locales personales.

Plantaciones de palma aceitera que trajeron fuertes vientos y salarios bajos

- Por: Kalundi Serumaga, correo electrónico: kalundi@panoseasternafrika.org.ug. Kalundi Serumaga fue activista comunitario durante muchos años y en la actualidad es columnista en la prensa y tiene un programa radial en Uganda. En el año 2003 produjo y presentó un programa semanal sobre medio ambiente en la televisión nacional. El cementerio de sus ancestros se situaba en las tierras donde hace poco se estableció una plantación de palma aceitera a gran escala en las islas Ssesse.

AMERICA

Colombia

La dura vida de los trabajadores de plantaciones de palma africana

- Artículo elaborado en base a información obtenida de: Gerardo Iglesias, Rel-UITA, SIREL, Agricultura, No. 20, noviembre 2001, correo electrónico: uita@rel-uita.org, www.rel-uita.org

Política antisindical en plantaciones de palma aceitera

- Artículo basado en información obtenida de: SIREL, Sindicatos, N° 43, 25 de noviembre 2002, entrevista de Gerardo Iglesias, Rel-UITA a Hernán Correa, Secretario General de SINTRAINAGRO y Secretario de Asuntos Agrarios de la CUT.

Proyecto de plantaciones de palma aceitera pone en peligro biodiversidad del Chocó

- Artículo basado en información obtenida de: “Alerta por Palmicultura en el Bajo Atrato”, enviado por Gonzalo Díaz Cañadas, Fundación Beteguma, fundador del periódico *Citará*, www.citara.ipfox.com, correo electrónico: periodicocitara@hotmail.com
- “Graves violaciones de derechos humanos en Jiguamiandó y Curbaradó [Chocó]”, por Justicia y Paz, 23 de diciembre de 2002, <http://colombia.indymedia.org/news/2002/12/854.php>

Lo forestal como negocio

- Por: Paula Alvarez Roa, CENSAT Agua-Viva, Amigos de la Tierra - Colombia, correo electrónico: agua@censat.org

Expansión de la palma aceitera en un marco de violación de los derechos humanos

- Artículo basado en información obtenida de: “Jiguamiandó, amenazas de muerte por la siembra de palma”, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, abril de 2005, enviado por Justicia y Paz, correo electrónico: justiciaypaz@andinet.com

Plantaciones de palma aceitera en tierras comunales usurpadas

- Artículo basado en información obtenida de: “Decisión de INCODER, reversa y violación de los derechos de los afro colombianos y la Constitución”, Carlos Rosero, enviado por Tatiana Roa Avendaño, Iniciativa Ambiental Colombia, correo electrónico: bosques@censat.org
- “Comunidades negras de Colombia: en defensa de biodiversidad, territorio y cultura”, Arturo Escobar, GRAIN, <http://www.grain.org/biodiversidad/?id=87>
- Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Bogotá, octubre de 2005, <http://www.pasc.ca/dever/dever211.pdf>

Ecuador

Palma africana y madereras en la Bio-región del Chocó

- Por: Ivonne Ramos, Acción Ecológica, correo electrónico: creativo@uio.satnet.net

México

¿Quiénes se benefician con la palma aceitera en Chiapas?

- Artículo basado en información obtenida de: "El cultivo de la palma africana en Chiapas", *Chiapas al Día*, No. 293, CIEPAC, junio 2002, <http://www.ciepac.org/bulletins/200-300/bolec293.htm>

Perú

La Amazonía amenazada por proyectos de plantaciones de palma aceitera

- Artículo basado en información obtenida de: "Arbitrario posesionamiento del grupo económico Romero en tierras protegidas de selva virgen de Yurimaguas", declaración del 9 de junio de 2006 del Comité Directivo - APACSI del bajo Shanusi.
- "Paralizan titulación de tierras de más de cuarenta comuneros del Alto Shanusi", Giovanni Acate, Radio Oriente, <http://www.ideeleradio.org.pe/look/Ideeleradio/article.tpl?IdLanguage=13&IdPublication=7&NrIssue=27&NrSection=50&NrArticle=8898>
- Ver la declaración completa en: http://www.wrm.org.uy/paises/Peru/Declaracion_Yurimaguas.html

ASIA

Camboya

Plantaciones de caucho y de palma africana provocan impactos en las comunidades locales

- Extraído de: "The Pulp Invasion: The international pulp and paper industry in the Mekong Region" por Chris Lang, WRM, 2002. Correo electrónico: chrislang@t-online.de. El informe completo está disponible en inglés en: <http://www.wrm.org.uy/countries/Asia/mekong.html>

Indonesia

!!! Buenas noticias sobre la palma aceitera!!!

- Artículo basado en información obtenida de: Focus on Finance News, correo electrónico: wakker@aidenvironment.org

- Para obtener más información sobre las plantaciones de palma aceitera en todo el mundo, visite el sitio web: <http://www.wrm.org.uy/plantaciones/palma.html>

Plantaciones de palma aceitera en el centro de la destrucción de la biodiversidad

- Artículo basado en información obtenida de: “The Bitter Fruit of Oil Palm. Dispossession and Deforestation”, <http://www.wrm.org.uy/>
- “The Politics of Extinction. Palm Oil”, Environmental Investigation Agency, <http://www.eia-international.org/Campaigns/Forests/Indonesia/PolExtinction/palm.html>
- “A Framework for Assessing the Relationship between Trade Liberalization and Biodiversity Conservation”, Tom Conway, International Institute for Sustainable Development, para UNEP, 1998, http://iisd1.iisd.ca/pdf/tradelib_biodiv.pdf

Informe del WWF vincula plantaciones de palma aceitera con deforestación a gran escala

- Artículo basado en información obtenida de: “Oil Palm Plantations and Deforestation in Indonesia. What Role do Europe and Germany Play?”, WWF, 2002, <http://www.panda.org/downloads/forests/oilpalmindonesia.pdf>

La palma aceitera hace desaparecer los bosques

- Extractado de: “Greasy Palms. The social and ecological impacts of large-scale oil palm plantation development in Southeast Asia”, marzo de 2004, Eric Wakker, AIDEnvironment, en colaboración con Sawit Watch Indonesia y Joanna de Rozario para FOE, http://www.foe.co.uk/resource/reports/greasy_palms_impacts.pdf

Invirtiendo para el desastre; la CFI y las plantaciones de palma aceitera

- Por: Liz Chidley, Down to Earth, correo electrónico: dtecampaign@gn.apc.org, <http://www.dte.org>

El FMI y la deforestación

- Por: Longgena Ginting, WALHI /Amigos de la Tierra Indonesia, correo electrónico: ginting@foei.org

Indonesia: el insalubre olor del dinero en los incendios forestales

- Por: Raquel Núñez, WRM, correo electrónico: raquelnu@wrm.org.uy, basado en información extraída de: Ficha informativa N° 254, OMS, <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs254/en/>

- "Effects of Indonesian Forest Fire", TED Case Studies, <http://www.american.edu/projects/mandala/TED/indofire.htm>
- "Forest Fires in Indonesia Blanket Malaysian Cities with Unhealthy Haze", Associated Press, 3 de agosto de 2005, <http://www.enn.com/today.html?id=8412>
- "The trail of destruction: A chronology of the fires", Down to Earth N° 35, <http://dte.gn.apc.org/35su1.htm>
- Casey, Michael, "Indonesia to prosecute companies over haze", 15 de agosto de 2005, http://news.yahoo.com/s/ap/malaysia_haze

Pedido de cancelación del plan para establecer tres millones de hectáreas de plantaciones de palma aceitera

- Artículo basado en información obtenida de: "European Hunger for Palm Oil and Timber Triggers Expansion of Destructive Palm Oil Plantations on Kalimantan", por Amigos de la Tierra Países Bajos, Sawit Watch, Amigos de la Tierra Indonesia (WALHI), Amigos de la Tierra Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, http://www.eng.walhi.or.id/kampanye/hutan/konversi/060412_palmoil-plantation_/
- "The Kalimantan Border Oil Palm Mega-project", Eric Wakker, AIDEnvironment, por encargo de Milieudefensie (Amigos de la Tierra Países Bajos) y la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza (SSNC), <http://www.milieudefensie.nl/globalisering/publicaties/rapporten/KalimantanOilPalmMega-lowres.pdf>

Las plantaciones de palma aceitera vienen con represión...

- Por: UITA, correo electrónico iuf@iuf.org, http://www.iufdocuments.org/cgi-bin/editorials/db.cgi?db=default&ww=1&uid=default&ID=475&view_records=1&es=1

Plantaciones de palma aceitera invaden las tierras tradicionales de las comunidades

- Artículo basado en información obtenida de: "From Singapore to West Kalimantan", Down to Earth N° 68, febrero de 2006, <http://dte.gn.apc.org/68oi3.htm>

Malasia

La lucha de las comunidades indígenas de Sabah contra el maderero y las plantaciones de palma aceitera

- Artículo adaptado de: "Sabah Tribes Rally Against Corporate Takeover of Land", Earth Island Journal, http://www.earthisland.org/eijournal/new_articles.cfm?articleID=908&journalID=80

La difícil situación de las trabajadoras en las plantaciones de palma aceitera

- Artículo basado en: "Poisoned and Silenced. A Study of Pesticide Poisoning in the Plantations", Tenaganita, correo electrónico: tenaganita@yahoo.co.uk o tnita@hotmail.com, http://caramasia.gn.apc.org/tn_page0.html
- Pesticide Action Network (PAN) Asia and the Pacific, correo electrónico: panap@panap.net, <http://www.panap.net/>
- El informe conjunto con la Red de Acción en Plaguicidas (Pesticide Action Network) de Asia y el Pacífico completo está disponible en: http://www.evb.ch/index.cfm?page_id=1300 T

Trabajadoras de las plantaciones envenenadas y silenciadas

- Artículo basado en información obtenida de: "Women Plantation Workers Poisoned and Silenced", Tenaganita/PAN-Asia Pacific, 2002, <http://www.panap.net/highlightsA1.cfm?id=9&hilitid=HILITE04#Top>
- "A Study of Pesticide Poisoning in the Plantations", Tenaganita/PAN-Asia Pacific, 2002. <http://www.panap.net/highlightsA1.cfm?id=16&hilitid=HILITE04>

Las condiciones laborales de las trabajadoras en las plantaciones de palma aceitera

- Extractado de: "Pobreza y veneno para las trabajadoras en plantaciones", por Mageswari Sangaralingam, Consumers' Association of Penang, <http://www.socialwatch.org/es/informesNacionales/406.html>

OCEANIA

Papúa Nueva Guinea

Impactos de monocultivos de palma aceitera promovidos desde Inglaterra

- Artículo basado en información obtenida de: Friends of the Earth Briefing, "CDC, Oil Palm and Forest Destruction in Papua New Guinea", enviado por Ed Matthew, correo electrónico: edmat@foe.co.uk

Devolución de tierras tradicionales impide destrucción de bosques por madereo y plantaciones de palma aceitera

- Artículo basado en información obtenida de: "Landowners celebrate reclaimed land", Raymond Palangat, Conservation Melanesia, correo electrónico: momis@global.net.pg

Joint venture de palma aceitera beneficia a grandes empresas

- Artículo basado en información obtenida de: "ADB and Smallholders Agriculture Projects in Papua New Guinea", junio de 2003, Documento informativo preparado por Lee Tan, Australian Conservation Foundation/Friends of the Earth Australia, correo electrónico: l.tan@acfonline.org.au, enviado por Chris Lang.

Declaración de propietarios tradicionales sobre el madereo, la minería y las plantaciones de palma aceitera

- Seleccionado y adaptado de: "Oro Landowners Declaration on Large Scale Commercial Extraction of Natural Resources and the Expansion of Oil Palm Nucleus Estates", enviado por Sandy Gauntlett, correo electrónico: sandygauntlett@hotmail.com. Es posible acceder al texto completo de la declaración en inglés en el sitio: <http://www.wrm.org.uy/countries/PapuaNG/Oro.html>

ONG locales impugnan el préstamo del Banco Mundial para proyecto de palma aceitera

- La carta completa está disponible en inglés en: <http://www.wrm.org.uy/countries/PapuaNG/WBLetter.htm>

